



XI legislatura

Año 2025

**Parlamento  
de Canarias**

Número 368

17 de noviembre

# BOLETÍN OFICIAL

El texto del Boletín Oficial del Parlamento de Canarias puede ser consultado gratuitamente a través de Internet en la siguiente dirección: <http://www.parcn.es>

## SUMARIO

### **CONSULTAS FORMULADAS AL PARLAMENTO/INICIATIVAS LEGISLATIVAS EUROPEAS SOBRE CONTROL DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD**

#### DICTÁMENES

**11L/CSUE-0156** Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el apoyo de la Unión al espacio Schengen, a la gestión europea integrada de las fronteras y a la política común de visados para el periodo 2028-2034 [COM (2025) 541]

Página 2

**11L/CSUE-0158** Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Mecanismo «Conectar Europa» para el periodo 2028-2034, se modifica el Reglamento (UE) 2024/1679 y se deroga el Reglamento (UE) 2021/1153 [COM (2025) 547]

Página 7

**11L/CSUE-0159** Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el apoyo de la Unión al asilo, la migración y la integración para el periodo 2028-2034 [COM (2025) 540]

Página 10

**11L/CSUE-0160** Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el apoyo de la Unión a la seguridad interior para el periodo comprendido entre 2028 y 2034 [COM (2025) 542]

Página 15

**11L/CSUE-0162** Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 en lo que respecta al programa de distribución de frutas, hortalizas y leche en los centros escolares («programa escolar de la UE»), las intervenciones sectoriales, la creación de un sector de las proteaginosas, los requisitos para el cáñamo, la posibilidad de establecer normas de comercialización para el queso, las proteaginosas y la carne, la aplicación de derechos de importación adicionales, las normas sobre la disponibilidad de suministros en tiempos de emergencia y crisis graves y las garantías [COM (2025) 553]

Página 21

**11L/CSUE-0164** Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las condiciones para la ejecución de la ayuda de la Unión a la política agrícola común para el periodo 2028-2034. COM (2025) 560

Página 27

**11L/CSUE-0165** Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en particular para la cooperación territorial europea (Interreg) y el Fondo de Cohesión como parte del Fondo establecido en el Reglamento (UE) [...] [Reglamento sobre los planes CNR], y por el que se establecen las condiciones para la ejecución del apoyo de la Unión al desarrollo regional para el periodo 2028-2034. COM (2025) 552 final

Página 33

**11L/CSUE-0166** Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Fondo Social Europeo como parte de los planes de colaboración nacional y regional establecidos en el Reglamento (UE) [planes CNR], por el que se establecen las condiciones para la ejecución de la ayuda de la Unión destinada al empleo de calidad, las capacidades y la inclusión social para el periodo 2028-2034. COM/2025/558 final   Página 39

**11L/CSUE-0169** Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo Europeo para la Cohesión Económica, Social y Territorial, la Agricultura y las Zonas Rurales, la Pesca y el Mar, la Prosperidad y la Seguridad para el periodo 2028-2034, y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2023/955 y el Reglamento (UE, Euratom) 2024/2509. COM (2025) 565. Anexo. SWD (2025) 565   Página 44

**11L/CSUE-0172** Relativo a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» para el periodo 2028-2034, se establecen sus normas de participación y difusión, y se deroga el Reglamento (UE) 2021/695 [COM (2025) 543] {SEC (2025) 555} {SWD (2025) 555} {SWD (2025) 556}   Página 49

**11L/CSUE-0173** Propuesta de Decisión del Consejo que establece el Programa Específico por el que se ejecuta el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» para el periodo 2028-2034, se establecen las normas de participación y difusión en el marco de dicho Programa, y se deroga la Decisión (UE) 2021/764 [COM (2025) 544] {SEC (2025) 555} {SWD (2025) 555} {SWD (2025) 556}   Página 53

**11L/CSUE-0175** Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo Europeo de Competitividad (FEC), incluido el programa específico de actividades de investigación e innovación en materia de defensa, por el que se derogan los Reglamentos (UE) 2021/522, (UE) 2021/694, (UE) 2021/697 y (UE) 2021/783 y se modifican los Reglamentos (UE) 2021/696, (UE) 2023/588 y (UE) [EDIP] [COM (2025) 555] {SEC (2025) 555} {SWD (2025) 555} {SWD (2025) 556}   Página 57



## CONSULTAS FORMULADAS AL PARLAMENTO/INICIATIVAS LEGISLATIVAS EUROPEAS SOBRE CONTROL DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD

### DICTÁMENES

**11L/CSUE-0156** *Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el apoyo de la Unión al espacio Schengen, a la gestión europea integrada de las fronteras y a la política común de visados para el periodo 2028-2034 [COM (2025) 541]*

#### Presidencia

Emitido dictamen por el Parlamento de Canarias, a instancias de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales, para la verificación del cumplimiento del principio de subsidiariedad por parte de una iniciativa legislativa de la Unión Europea, relativo a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el apoyo de la Unión al espacio Schengen, a la gestión europea integrada de las fronteras y a la política común de visados para el periodo 2028-2034 [COM (2025) 541], por la ponencia creada al efecto, al amparo de lo previsto en el artículo 53.5 del Reglamento de la Cámara, con fecha 3 de noviembre de 2025, de conformidad con lo establecido en los artículos 53.6 y 112 del Reglamento del Parlamento, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 3 de noviembre de 2025. EL SECRETARIO GENERAL (*P. D. de la presidenta, Resolución de 30 de junio de 2023, BOPC núm. 8, de 3/7/2023*), Salvador Iglesias Machado.

**DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS Y ACCIÓN EXTERIOR DEL  
PARLAMENTO DE CANARIAS, A INSTANCIAS DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA  
UNIÓN EUROPEA DE LAS CORTES GENERALES, PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO  
DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD POR PARTE DE UNA INICIATIVA LEGISLATIVA DE LA  
UNIÓN EUROPEA**

<b>Título del documento:</b>	<b>Iniciativa legislativa UE:</b> <b>Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el apoyo de la Unión al espacio Schengen, a la gestión integrada de las fronteras y a la política común de visados para el período 2028-2034</b>
<b>Referencia:</b>	<b>COM (2025) 541 final de 16/7/2025 (CSUE-156)</b>

**I. ANTECEDENTES:**

1. Con fecha 5 de septiembre de 2025, RE 202510000009521, se recibió en la Cámara correo electrónico de la Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales, por el que, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la citada Comisión Mixta remitió al Parlamento de Canarias, Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el apoyo de la Unión al espacio Schengen, a la gestión europea integrada de las fronteras y a la política común de visados para el periodo 2028-2034 –COM (2025) 541 final, de 16/7/2025, para su conocimiento y, en su caso, emisión de dictamen motivado sobre el eventual incumplimiento del principio de subsidiariedad.

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 53.3 del Reglamento del Parlamento de Canarias, la comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior elaborará y aprobará, dentro del plazo de cuatro semanas fijado por el artículo 6.2 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, modificada por la 24/2009, de 22 de diciembre, para su adaptación al Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007 y por la 38/2010, de 20 de diciembre, para reforzar las funciones asignadas a dicha Comisión Mixta, así como el artículo Octavo. 3 de la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, 628/000006 (S) de 27 de mayo de 2010, sobre reforma de la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de septiembre de 1995, sobre desarrollo de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, para su adaptación a las previsiones del Tratado de Lisboa y de la Ley 24/2009, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales núm. 312 de 8 de junio de 2010, un dictamen en el que quedará fijada la posición de la Cámara y de cuya aprobación se dará cuenta al pleno.

3. La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de julio de 2023, adoptó el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

“17. ASUNTOS TRATADOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

17.1. Asuntos remitidos por la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales.

Acuerdo:

“La Mesa de la Cámara, con el objeto de determinar, dentro de las posibilidades que al efecto, dispone el artículo 53 del Reglamento de la Cámara, el concreto procedimiento parlamentario que haya de seguirse para la emisión del parecer del Parlamento de Canarias respecto del cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad por parte de las iniciativas legislativas comunitarias europeas que sean objeto de remisión al mismo por las Cortes Generales, en los términos de lo previsto en la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, en su versión modificada para su adaptación al Tratado de Lisboa de 13 de abril de 2007, oída la Junta de Portavoces en su reunión del día de la fecha, acuerda:

1. Constituir la ponencia a que se refiere el artículo 53.5 del Reglamento de la Cámara, que, con carácter general y en tanto en cuanto no se determine lo contrario, será la competente para conocer y, en su caso, elaborar para su posterior remisión a las Cortes Generales, dictamen motivado en relación con el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad por parte de los proyectos legislativos europeos que sean objeto de consulta por aquellas”.

4. Con fecha 14 de octubre de 2025, el Gobierno de Canarias presentó informe a la iniciativa legislativa de la UE sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el apoyo de la Unión al espacio Schengen, a la gestión europea integrada de las fronteras y a la política común de visados para el periodo 2028-2034 –COM (2025) 541 final, de 16/7/2025.

5. Finalmente, la ponencia, en su reunión de 3 de noviembre del año en curso, ha analizado el texto de la iniciativa legislativa europea remitida por la Comisión Mixta para la Unión Europea, a resultas de lo cual, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 53.5 del Reglamento de la Cámara y del acuerdo de la Mesa antes referido, ha elaborado el siguiente:

## II. DICTAMEN

### 1. Base jurídica y tipo de competencia:

#### a) Objetivos de la propuesta legislativa:

Como señala la Exposición de motivos de la propuesta, el contexto geopolítico de Europa ha cambiado significativamente y afecta profundamente a la gestión de las fronteras exteriores de la Unión. El aumento de las amenazas híbridas y otras amenazas a la seguridad, incluida la utilización como arma de la migración, da una mayor urgencia a la protección de las fronteras exteriores. Mientras tanto, la migración irregular sigue siendo un factor de primer orden, lo que pone de relieve la necesidad de garantizar una cooperación eficaz con países no pertenecientes a la UE combinada con asociaciones globales con los países de origen y de tránsito apoyadas a través del Reglamento (UE) [...] [Europa Global].

Además, el tráfico ilícito de migrantes es un negocio rentable para las redes delictivas, cuyos traficantes utilizan rutas terrestres, marítimas y aéreas para facilitar la migración irregular tanto hacia la Unión Europea como en el seno de ella.

Por ello, es esencial garantizar el desarrollo, el funcionamiento seguro y el mantenimiento de los sistemas informáticos de gran magnitud con arreglo al Derecho de la Unión en el ámbito de la gestión de fronteras, a saber, el Sistema de Información de Schengen (SIS), el Sistema de Información de Visados (VIS), Eurodac, el Sistema de Entradas y Salidas (SES) y el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV), incluida su interoperabilidad, y la infraestructura de comunicación.

La Unión ha considerado, por tanto, oportuno prever un fondo para apoyar a los Estados miembros en este ámbito, incluido además el apoyo de la Unión para determinar los conocimientos especializados y la capacidad operativa necesarios para aplicar los elementos pertinentes el Pacto sobre Asilo y Migración, recogidos en el Reglamento 2024/1356 por el que se introduce el triaje de nacionales de terceros países en las fronteras exteriores. Asimismo, la política de visados de la UE también es fundamental para proteger mejor las fronteras y gestionar la migración, lo que implica igualmente el apoyo de la Unión para mejorar la eficiencia en la tramitación de visados, su digitalización y una mejor cobertura de los servicios consulares en todo el mundo.

Por todo ello, esta propuesta tiene por objeto abordar la necesidad de una mayor flexibilidad en la gestión del apoyo de la Unión, así como una mayor orientación al rendimiento y una mayor simplificación para todos los agentes que participan en su ejecución. Para ello, la Comisión considera que se debe garantizar una estrecha complementariedad con la propuesta de Reglamento (UE) [...], por el que se establece el Fondo Europeo para la Cohesión Económica, Social y Territorial, la Agricultura y las Zonas Rurales, la Pesca y el Mar, la Prosperidad y la Seguridad, que introduce nuevos mecanismos de asignación de fondos para la gestión compartida, directa e indirecta.

Además, dado que los retos en el ámbito de la gestión de las fronteras y la migración están en constante evolución, también se ha considerado necesario responder a las necesidades apremiantes y a los cambios en las políticas y las prioridades de la Unión y orientar la financiación a acciones con un gran valor añadido de la Unión a través de un mecanismo de la UE que ofrezca flexibilidad en la gestión del apoyo de esta.

Por último, esta propuesta, junto con la propuesta de Reglamento (UE) de apoyo de la Unión al asilo, la migración y la integración y la propuesta de Reglamento (UE) por el que se establece el apoyo de la Unión a la seguridad interior, proporcionan el marco jurídico específico para la acción de la Unión en los ámbitos de la gestión eficiente de la migración y el asilo, la gestión europea integrada de las fronteras en las fronteras exteriores, el buen funcionamiento del espacio Schengen y la política europea de visados, y la seguridad interior.

#### b) Ámbito competencial

El artículo 3, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea dispone que *«la Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con medidas adecuadas respecto al control de las fronteras exteriores, asilo, inmigración y de prevención y lucha contra la delincuencia»*.

La propuesta se basa en los artículos 77, apartado 2 y 79, apartado, 2 letras c) y d) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que facultan al Parlamento Europeo y al Consejo para actuar con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y adoptar medidas sobre:

Artículo 77, apartado 2:

- la política común de visados y otros permisos de residencia de corta duración;
- los controles a los cuales se someterá a las personas que crucen las fronteras exteriores;
- las condiciones en las que los nacionales de terceros países podrán circular libremente por la Unión durante un corto período;
- cualquier medida necesaria para el establecimiento progresivo de un sistema integrado de gestión de las fronteras exteriores;
- la ausencia total de controles de las personas, sea cual sea su nacionalidad, cuando crucen las fronteras interiores.

y sobre (artículo 79, apartado 2):



- c) la inmigración y residencia ilegales, incluidas la expulsión y la repatriación de residentes en situación ilegal;
- d) la lucha contra la trata de seres humanos, en particular de mujeres y niños.

Por su parte, la Constitución española garantiza en su artículo 13 que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el título I de la Constitución, en los términos que establezcan los tratados y la ley. De este modo, la Orgánica 4/2000, con sus sucesivas modificaciones, ha establecido los derechos y libertades de los extranjeros y su integración social. A su vez, el artículo 149, apartado 1. 2.ª otorga competencia exclusiva al Estado en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.

En cuanto a la Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad con el artículo 144 de su Estatuto de Autonomía, le “corresponde, en materia de inmigración sin perjuicio de las competencias constitucionalmente atribuidas al Estado sobre la materia:

- a) La competencia exclusiva en la atención sociosanitaria y de orientación de los inmigrantes no comunitarios.
- b) El desarrollo de la política de integración de las personas inmigradas en el marco de sus competencias.
- c) La adopción de las medidas necesarias para la integración social y económica de las personas inmigrantes y para la garantía de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.
- d) El establecimiento, de acuerdo con la normativa estatal, de un marco de referencia para la acogida e integración de las personas inmigrantes, incluidos los menores extranjeros no acompañados”.

Continúa señalando el párrafo 2 de ese mismo artículo 144 que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia ejecutiva en materia de autorización de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Canarias. Esta competencia, que se ejercerá en necesaria coordinación con la que corresponde al Estado en materia de entrada y residencia de extranjeros y en el marco de su legislación, incluye:

- a) La tramitación y resolución de las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena.
- b) La tramitación y la resolución de los recursos presentados con relación a los expedientes a que se refiere el apartado anterior y la aplicación del régimen de inspección y sanción.

La iniciativa, por tanto, afecta a competencias compartidas entre la Unión Europea, el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias. En cualquier caso, desde el punto del cumplimiento del principio de subsidiariedad, la iniciativa se justifica porque su finalidad no puede alcanzarse eficazmente por ningún Estado actuando por sí solo sino a través de una intervención a nivel europeo.

## 2. Análisis de las exigencias derivadas del principio de subsidiariedad

Tal y como determina el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (versión consolidada), en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva la Unión intervendrá solo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.

Por otra parte, los criterios que han sido definidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para proceder al examen de un acto comunitario desde la óptica del respeto al principio de subsidiariedad son dos: 1) determinar, en primer lugar, si la competencia a la que recurre el legislador comunitario es exclusiva de la Unión y, a continuación, en el caso en que no fuera una competencia exclusiva, 2) determinar si el objetivo de la acción adoptada puede lograrse mejor a nivel comunitario. Al primer criterio ya se ha respondido, de manera que procede referirse al segundo.

El Protocolo n.º 2, publicado en el *Diario Oficial de la Unión Europea*, n.º 115 de 9 de mayo de 2008 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, establece en su artículo 5 lo siguiente:

*“Los proyectos de actos legislativos se motivarán en relación con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Todo proyecto de acto legislativo debería incluir una ficha con pormenores que permitan evaluar el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Esta ficha debería incluir elementos que permitan evaluar el impacto financiero y, cuando se trate de una Directiva, sus efectos en la normativa que han de desarrollar los Estados miembros, incluida, cuando proceda, la legislación regional. Las razones que justifiquen la conclusión de que un objetivo de la Unión puede alcanzarse mejor en el plano de esta se sustentarán en indicadores cualitativos y, cuando sea posible, cuantitativos. Los proyectos de actos legislativos tendrán debidamente en cuenta la necesidad de que cualquier carga, tanto financiera como administrativa, que recaiga sobre la Unión, los Gobiernos nacionales, las autoridades regionales o locales, los agentes económicos o los ciudadanos sea lo más reducida posible y proporcional al objetivo que se desea alcanzar”.*

El principio de subsidiariedad establece que solo podrán tomarse medidas a nivel de la UE cuando sean más eficaces que la actuación individual de los Estados miembros a nivel nacional, regional o local. El mecanismo de control de la subsidiariedad, que se aplica en los ámbitos de competencia compartida entre la UE y los Estados miembros, permite a los parlamentos nacionales manifestar su posición cuando consideren que una iniciativa legislativa de la UE no respeta este principio, posición que ha de ser tenida en cuenta por la Comisión Europea.

En lo que a la presente iniciativa se refiere, esta materia pertenece al ámbito de actuación en el espacio de libertad, seguridad y justicia, tal como se define en el título V de la tercera parte del TFUE. Los objetivos y el apoyo correspondiente de la Unión son proporcionados con respecto a lo que el instrumento pretende lograr.

Consecuentemente, se aprecia que la iniciativa cumple formalmente con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

### 3. Carga financiera y administrativa

No se acompaña en la documentación remitida por las Cortes Generales un análisis de las eventuales cargas, si es que las hay, para las autoridades nacionales, regionales o locales, agentes económicos o ciudadanos, derivadas de la nueva regulación, con lo cual no es posible pronunciarse al respecto.

### 4. Consideración de los aspectos locales y regionales en la consulta y análisis del impacto

El Parlamento de Canarias no ha sido objeto de consulta previa a la elaboración de la propuesta que hoy se somete a su valoración en el marco del mecanismo de control del principio de subsidiariedad. Tampoco nos consta que lo haya sido el Gobierno de Canarias.

### 5. Otras observaciones

La iniciativa legislativa incide en medidas específicas adoptadas en el marco del artículo 349 del TFUE que afectan a Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea.

Hay que tener en cuenta que este Fondo sustituirá al Instrumento de apoyo financiero a la gestión de fronteras y la política de visados que se estableció, como parte del Fondo para la Gestión integrada de las fronteras por el Reglamento (UE) 2021/1148 cuyas acciones seguirán en marcha, una vez aprobado este nuevo, hasta su cierre (artículo 9 de la propuesta que estamos analizando, que establece las disposiciones transitorias). Este Reglamento 2021/1148 si preveía una consideración específica para las RUP en su considerando 63 al señalar “*Con arreglo al artículo 349 del TFUE y en consonancia con la Comunicación de la Comisión de 24 de octubre de 2017, titulada «Una asociación estratégica renovada y más fuerte con las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea», respaldada por el Consejo en sus Conclusiones de 12 de abril de 2018, los Estados miembros pertinentes debe velar por que sus programas den respuesta a las amenazas emergentes a que se enfrentan las regiones ultraperiféricas. El Instrumento debe apoyar a dichos Estados miembros con recursos suficientes para que ayuden a las regiones ultraperiféricas según proceda*”.

Este considerando, que no tuvo traslación a la parte dispositiva del Reglamento 2021/1148, ha desaparecido de la propuesta actual que remite toda especialidad para las regiones ultraperiféricas a lo dispuesto en el artículo 46 de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo Europeo para la Cohesión Económica, Social y Territorial, la Agricultura y las Zonas Rurales, la Pesca y el Mar, la Prosperidad y la Seguridad para el período 2028- 2034, y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2023/955 y el Reglamento (UE, Euratom) 2024/2509, propuesta igualmente adoptada el 16 de julio con la referencia (COM(2025) 565).

En concreto, el artículo 46, en su apartado 1, letra a), establece que España, como parte de su plan nacional y regional para la implementación del nuevo Fondo Europeo para la Cohesión Económica, Territorial y Social, la Agricultura y las Zonas Rurales, la Pesca y el Mar, la Prosperidad y la Seguridad habrá de incluir las medidas para hacer frente a las limitaciones permanentes y estructurales de Canarias, como región ultraperiférica e la Unión, para atender sus necesidades y retos específicos en materias, tales como la migración.

Por tanto, el nuevo sistema definido en las propuestas de la Comisión Europea para el marco financiero plurianual 2028-2034 deja en manos de la Administración nacional española estas consideraciones que estaban recogidas en el mencionado considerando.

Además, la iniciativa legislativa podría tener un importante impacto sobre Canarias, ya que representa una de las fronteras externas de la Unión Europea y además supone, actualmente, uno de los principales puntos de entrada de migrantes procedentes, principalmente, de África occidental que acceden al territorio europeo a través de nuestras costas.

Por ello, la vinculación prevista entre estos fondos y los planes de colaboración nacionales y regionales (artículos 1 y 4 de la propuesta, entre otros) podría tener efectos presupuestos negativos, dado que los fondos atribuidos a estos planes son limitados, para atender principalmente a determinadas regiones europeas, como Canarias, cuya situación geográfica justificaría la adopción de medidas destinadas a ejercer un mayor control fronterizo, con el fin de reforzar la labor de la guarda costera y proteger la seguridad de las personas migrantes.

### 6. Conclusión

Por todo ello, si bien la propuesta recoge un cumplimiento formal de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad porque no menoscaba las competencias autonómicas, sin embargo, supone un retroceso y un riesgo para la aplicación del derecho europeo en Canarias, puesto que el nuevo sistema definido en las propuestas de la Comisión Europea para el marco financiero plurianual 2028-2034 deja en manos de la Administración nacional española la regulación que, en esta materia, se confiere a Canarias en su condición de región ultraperiférica, donde además, esta iniciativa podría tener un importante impacto, ya que representa una de las fronteras externas de la Unión Europea y, además, supone, actualmente, uno de los principales puntos de entrada de migrantes procedentes, principalmente, de África occidental que acceden al territorio europeo a través de nuestras costas.

La vinculación prevista entre estos fondos y los planes de colaboración nacionales y regionales podría tener efectos presupuestos negativos, dado que los fondos atribuidos a estos planes son limitados para atender a determinadas regiones europeas, como Canarias, cuya situación geográfica justificaría la adopción de medidas destinadas a ejercer un mayor control fronterizo, con el fin de reforzar la labor de la guarda costera y proteger la

seguridad de las personas migrantes, tal y como, por otro lado, exige el artículo 349 del TFUE. Sin embargo, lejos de esto, la propuesta lo deja en manos de un reparto estatal en el marco de un plan conjunto.

Parlamento de Canarias, a 3 de noviembre de 2025. Alicia Vanoostende Simili. Socorro Beato Castellano. Luz Reverón González. Luis Alberto Campos Jiménez. Melodie Mendoza Rodríguez.

**11L/CSUE-0158 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Mecanismo «Conectar Europa» para el periodo 2028-2034, se modifica el Reglamento (UE) 2024/1679 y se deroga el Reglamento (UE) 2021/1153 [COM (2025) 547]**

**Presidencia**

Emitido dictamen por el Parlamento de Canarias, a instancias de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales, para la verificación del cumplimiento del principio de subsidiariedad por parte de una iniciativa legislativa de la Unión Europea, relativo a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Mecanismo «Conectar Europa» para el periodo 2028-2034, se modifica el Reglamento (UE) 2024/1679 y se deroga el Reglamento (UE) 2021/1153 [COM (2025) 547], por la ponencia creada al efecto, al amparo de lo previsto en el artículo 53.5 del Reglamento de la Cámara, con fecha 3 de noviembre de 2025, de conformidad con lo establecido en los artículos 53.6 y 112 del Reglamento del Parlamento, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 3 de noviembre de 2025. EL SECRETARIO GENERAL (*P. D. de la presidenta, Resolución de 30 de junio de 2023, BOPC núm. 8, de 3/7/2023*), Salvador Iglesias Machado.

**DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS Y ACCIÓN EXTERIOR DEL PARLAMENTO DE CANARIAS, A INSTANCIAS DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA DE LAS CORTES GENERALES, PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD POR PARTE DE UNA INICIATIVA LEGISLATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA**

<b>Título del documento:</b>	<b>Iniciativa legislativa UE:</b> <b>Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el mecanismo “Conectar Europa” para el período 2028-2034, se modifica el Reglamento (UE) y se deroga el Reglamento (UE) 2021/1153, de 16 de julio de 2025.</b>
<b>Referencia:</b>	<b>COM (2025) 547 final de 16/7/2025 (CSUE-158)</b>

**I. ANTECEDENTES:**

1. Con fecha 5 de septiembre de 2025, RE 202510000009529, se recibió en la Cámara correo electrónico de la Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales, por el que, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la citada Comisión Mixta remitió al Parlamento de Canarias, Propuesta de Reglamento del del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Mecanismo “Conectar Europa” para el periodo 2028-2034, se modifica el Reglamento (UE) 2024/1679 y se deroga el Reglamento (UE) 2021/1153, de 16 de julio de 2025 –COM (2025) 547, de 16/07/2025, para su conocimiento y, en su caso, emisión de dictamen motivado sobre el eventual incumplimiento del principio de subsidiariedad.

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 53.3 del Reglamento del Parlamento de Canarias, la comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior elaborará y aprobará, dentro del plazo de cuatro semanas fijado por el artículo 6.2 de la *Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea*, modificada por la 24/2009, de 22 de diciembre, para su adaptación al Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007 y por la 38/2010, de 20 de diciembre, para reforzar las funciones asignadas a dicha Comisión Mixta, así como el artículo Octavo. 3 de la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, 628/000006 (S) de 27 de mayo de 2010, sobre reforma de la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de septiembre de 1995, sobre desarrollo de la *Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea*, para su adaptación a las previsiones del Tratado de Lisboa y de la Ley 24/2009, publicado en el *Boletín Oficial de las Cortes Generales* núm. 312 de 8 de junio de 2010, un dictamen en el que quedará fijada la posición de la Cámara y de cuya aprobación se dará cuenta al pleno.

3. La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de julio de 2023, adoptó el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

“17. ASUNTOS TRATADOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

17.1. Asuntos remitidos por la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales.

Acuerdo:

“La Mesa de la Cámara, con el objeto de determinar, dentro de las posibilidades que al efecto, dispone el artículo 53 del Reglamento de la Cámara, el concreto procedimiento parlamentario que haya de seguirse para la emisión del parecer del Parlamento de Canarias respecto del cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad por parte de las iniciativas legislativas comunitarias europeas que sean objeto de remisión al mismo por las Cortes Generales, en los términos de lo previsto en la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, en su versión modificada para su adaptación al Tratado de Lisboa de 13 de abril de 2007, oída la Junta de Portavoces en su reunión del día de la fecha, acuerda:

*1. Constituir la ponencia a que se refiere el artículo 53.5 del Reglamento de la Cámara, que, con carácter general y en tanto en cuanto no se determine lo contrario, será la competente para conocer y, en su caso, elaborar para su posterior remisión a las Cortes Generales, dictamen motivado en relación con el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad por parte de los proyectos legislativos europeos que sean objeto de consulta por aquellas”.*

4. Con fecha 21 de octubre de 2025, el Gobierno de Canarias presentó informe a la iniciativa legislativa de la UE sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Mecanismo «Conectar Europa» para el período 2028-2034, se modifica el Reglamento (UE) 2024/1679 y se deroga el Reglamento (UE) 2021/1153 –COM (2025) 547, de 16/07/2025.

5. Finalmente, la ponencia, en su reunión de 3 de noviembre del año en curso, ha analizado el texto de la iniciativa legislativa europea remitida por la Comisión Mixta para la Unión Europea, a resultas de lo cual, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 53.5 del Reglamento de la Cámara y del acuerdo de la Mesa antes referido, ha elaborado el siguiente:

## **II. DICTAMEN**

### **1. Base jurídica y tipo de competencia:**

#### **a) Objetivos de la propuesta legislativa**

La propuesta forma parte del amplio paquete para el próximo marco financiero plurianual (MFP) correspondiente al período 2028-2034, presentada por la Comisión el pasado 16 de julio. Este paquete legislativo va más allá de las modificaciones que se han ido consolidando en los anteriores periodos legislativos y pretende ser mucho más ambicioso para abordar los numerosos retos a los que se enfrenta la Unión en estos momentos.

En concreto, el Mecanismo “Conectar Europa” (MCE) tiene como finalidad promover un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, mediante la conexión y la integración de los sectores del transporte y la energía en toda la Unión y en todas sus regiones. La propuesta establece los objetivos del programa, un presupuesto total de 81 428 000 000 euros para el período 2028-2034, los instrumentos de financiación de la Unión y las normas para su concesión.

De forma específica, el MCE persigue los siguientes objetivos:

- Facilitar las conexiones transfronterizas.
- Garantizar la seguridad de la UE.
- Aumentar la competitividad de la economía social de mercado europea.
- Contribuir a la lucha contra el cambio climático.
- Acabar con el aislamiento y fomentar una mayor cohesión económica, social y territorial.

En el ámbito del transporte, el nuevo MCE se centrará en la movilidad interoperable, segura e inteligente, en la red transeuropea de transporte (RTE-T) y en ayudar a facilitar una transición hacia un sistema de transporte sostenible y descarbonizado. Asimismo, se prevé financiar proyectos de doble uso civil y militar que garanticen una movilidad militar fluida. En ese sentido, se identifican cuatro corredores prioritarios de movilidad multimodal que abarcan los ámbitos ferroviario, viario, fluvial, marítimo y aéreo.

En materia de energía, el MCE apoyará dos categorías de proyectos transfronterizos:

- Proyectos de infraestructuras energéticas en los sectores del transporte, de la electricidad, el hidrógeno y el dióxido de carbono que tengan una importante repercusión transfronteriza y hayan obtenido la condición de proyecto de interés común o proyecto de interés mutuo con arreglo a la red transeuropea de energía (RTE-E);
- Proyectos transfronterizos en el ámbito de las energías renovables basado en un acuerdo de cooperación entre Estados miembros con arreglo a la Directiva sobre fuentes de energía renovables.

Cabe señalar que, a diferencia del marco anterior, el nuevo MCE se limita a los ámbitos de energía y transporte, excluyendo las telecomunicaciones.

En cuanto a la distribución presupuestaria:

- 51 515 000 000 euros se destinarán a los objetivos específicos en materia de transporte y movilidad militar.
- 29 912 000 000 euros se asignarán a proyectos en el ámbito energético que se ajusten a los objetivos específicos del Reglamento.

#### **b) Ámbito competencial**

El artículo 4.2 del TFUE dispone que las competencias en materia de transportes y energía son compartidas entre la Unión y los Estados miembros.

La propuesta se ampara principalmente en el artículo 170 del TFUE, que dispone que “la Unión contribuirá al establecimiento y al desarrollo de redes transeuropeas en los sectores de las infraestructuras de transporte, de las telecomunicaciones y de la energía”. Asimismo, el artículo 171 TFUE faculta a la Unión a apoyar proyectos de interés común, incluidos los financiados por los Estados miembros, mediante estudios de viabilidad, garantías de crédito o bonificaciones de interés.

Por ello, la base jurídica de la propuesta es el artículo 172 del TFUE que especifica que el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán las orientaciones y medidas previstas en el apartado 1 del artículo 171.

A su vez, en materia de energía, la base jurídica es el artículo 194.1 del TFUE, que fija los objetivos de la política energética de la Unión: a) garantizar el funcionamiento del mercado de la energía; b) garantizar la seguridad del



abastecimiento energético en la Unión; (y) c) fomentar la eficacia y el ahorro energéticos, así como el desarrollo de nuevas energías y de las renovables.

En el ordenamiento jurídico español, el artículo 149.1.21.<sup>a</sup> de la Constitución española atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre los ferrocarriles y los transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor. A su vez, el apartado 1.22.<sup>a</sup> de este mismo artículo concede competencias exclusivas al Estado para las instalaciones eléctricas y el transporte de energía que transcurran por territorio de más de una comunidad autónoma.

Por otro parte, conforme al artículo 160 del Estatuto de Autonomía de Canarias, corresponde a la comunidad autónoma la competencia exclusiva sobre el transporte terrestre de viajeros y mercancías por carreteras, ferrocarril y cable, así como sobre el transporte marítimo que transcurra íntegramente dentro del ámbito del archipiélago. Estas competencias incluyen:

a) La regulación, la planificación, la gestión, la coordinación y la inspección de los servicios y las actividades, incluyendo el transporte urbano y de los servicios de transporte discrecional, de viajeros y mercancías, el transporte turístico, escolar o de menores, sanitario, funerario, de mercancías peligrosas o perecederas y de otros que requieran un régimen específico, respetando las competencias estatales sobre seguridad pública.

b) La potestad tarifaria sobre transportes de competencia autonómica, así como un sistema de mediación en materia de transportes en el ámbito de sus competencias.

En efecto, el artículo 70 del Estatuto de Autonomía reconoce a los cabildos insulares funciones ejecutivas en transportes por carretera, cable y ferrocarril, mientras que el artículo 163 atribuye a la Comunidad Autónoma la regulación y planificación del sector energético, incluyendo las instalaciones de producción, distribución y transporte de energía en Canarias.

La iniciativa, por tanto, afecta esencialmente a competencias estatales, sin perjuicio de las que ostenta la Comunidad Autónoma de Canarias, tanto en materia de transporte como de energía.

No obstante, de acuerdo con lo establecido en el considerando 4 de la propuesta, el nuevo MCE se centrará en proyectos transfronterizos, con el objetivo de crear un sistema de transporte y energético interconectado con la UE. Como es evidente, este tipo de infraestructura no puede ser creada por un solo Estado miembro y requiere, por tanto, de la acción coordinada de la Unión, en coherencia con el principio de subsidiariedad.

## 2. Análisis de las exigencias derivadas del principio de subsidiariedad

Tal y como determina el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (versión consolidada), en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva la Unión intervendrá solo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.

Por otra parte, los criterios que han sido definidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para proceder al examen de un acto comunitario desde la óptica del respeto al principio de subsidiariedad son dos: 1) determinar, en primer lugar, si la competencia a la que recurre el legislador comunitario es exclusiva de la Unión y, a continuación, en el caso en que no fuera una competencia exclusiva, 2) determinar si el objetivo de la acción adoptada puede lograrse mejor a nivel comunitario. Al primer criterio ya se ha respondido, de manera que procede referirse al segundo.

El Protocolo n.º 2, publicado en el *Diario Oficial de la Unión Europea*, n.º 115 de 9 de mayo de 2008 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, establece en su artículo 5 lo siguiente:

*“Los proyectos de actos legislativos se motivarán en relación con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Todo proyecto de acto legislativo debería incluir una ficha con pormenores que permitan evaluar el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Esta ficha debería incluir elementos que permitan evaluar el impacto financiero y, cuando se trate de una Directiva, sus efectos en la normativa que han de desarrollar los Estados miembros, incluida, cuando proceda, la legislación regional. Las razones que justifiquen la conclusión de que un objetivo de la Unión puede alcanzarse mejor en el plano de esta se sustentarán en indicadores cualitativos y, cuando sea posible, cuantitativos. Los proyectos de actos legislativos tendrán debidamente en cuenta la necesidad de que cualquier carga, tanto financiera como administrativa, que recaiga sobre la Unión, los Gobiernos nacionales, las autoridades regionales o locales, los agentes económicos o los ciudadanos sea lo más reducida posible y proporcional al objetivo que se desea alcanzar”.*

El principio de subsidiariedad establece que solo podrán tomarse medidas a nivel de la UE cuando sean más eficaces que la actuación individual de los Estados miembros a nivel nacional, regional o local. El mecanismo de control de la subsidiariedad, que se aplica en los ámbitos de competencia compartida entre la UE y los Estados miembros, permite a los parlamentos nacionales manifestar su posición cuando consideren que una iniciativa legislativa de la UE no respeta este principio, posición que ha de ser tenida en cuenta por la Comisión Europea.

En lo que a la presente iniciativa se refiere, la magnitud y el tipo de problemas a los que hace frente el MCE requieren una actuación específica de la Unión, puesto que son, por su naturaleza, de ámbito comunitario y pueden resolverse con mayor eficacia a nivel de la UE, lo que redundaría en mayores beneficios en general, una aplicación más acelerada y una reducción de costes si la Comisión coordina las acciones de los Estados miembros.

La financiación de la UE es también el medio adecuado para abordar los retos de financiación a los que suelen enfrentarse los proyectos transfronterizos. La distribución desigual de los beneficios y los costes de los proyectos entre los distintos Estados miembros interesados dificulta que la financiación de estos proyectos provenga únicamente de fuentes nacionales.

En lo que al principio de proporcionalidad se refiere, la iniciativa entra dentro del ámbito de actuación en el campo de las redes transeuropeas, tal como se contempla en el artículo 170 del TFUE, y en el de los proyectos transfronterizos en el ámbito de las energías renovables, de acuerdo con el artículo 194 de dicho Tratado. La actuación prevista en la presente propuesta se limita específicamente a la dimensión de la UE de las infraestructuras de transporte y de energía y al despliegue transfronterizo de fuentes de energía renovables.

Consecuentemente, se aprecia que la iniciativa cumple formalmente con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

### **3. Carga financiera y administrativa**

No se acompaña en la documentación remitida por las Cortes Generales un análisis de las eventuales cargas, si es que las hay, para las autoridades nacionales, regionales o locales, agentes económicos o ciudadanos, derivadas de la nueva regulación, con lo cual no es posible pronunciarse al respecto.

### **4. Consideración de los aspectos locales y regionales en la consulta y análisis del impacto**

El Parlamento de Canarias no ha sido objeto de consulta previa a la elaboración de la propuesta que hoy se somete a su valoración en el marco del mecanismo de control del principio de subsidiariedad. Tampoco nos consta que lo haya sido el Gobierno de Canarias.

### **5. Otras observaciones**

La iniciativa legislativa incide en medidas específicas adoptadas en el marco del artículo 349 del TFUE que afectan a Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea.

Si bien en el considerando 3 se recoge que *“la Unión debe favorecer los proyectos en las regiones desfavorecidas, menos conectadas, rurales e insulares, costeras, periféricas, congestionadas, ultraperiféricas o aisladas a fin de permitir el acceso a las redes transeuropeas de energía y transporte y aportar, al mismo tiempo, beneficios a toda la Unión en lo que respecta a la seguridad, la competitividad, la cohesión social, económica y territorial”*, la única mención que se realiza relativa a las regiones ultraperiféricas, a o largo del articulado del Reglamento es en el artículo 10.8, que recoge que *“en el sector del transporte y en el de la energía, por lo que se refiere a las obras realizadas en las regiones ultraperiféricas, se aplicará un porcentaje máximo de cofinanciación específico del 60%”*. Cabe señalar que, este porcentaje de cofinanciación ha disminuido un 10% respecto al anterior MCE.

En este sentido, cabe destacar que, de acuerdo con lo establecido en el considerando 3, relativo a las regiones ultraperiféricas, la nueva propuesta permitirá financiar proyectos en materia de transporte alineados con el RTE-T y con el desarrollo de su red básica.

No obstante, la imposibilidad de llevar a cabo en Canarias interconexiones energéticas transfronterizas limita significativamente la participación de Canarias en el Mecanismo. De hecho, durante la legislativas anterior, la mayoría de los proyectos financiados a través de este instrumento se centraron en el ámbito de las telecomunicaciones, que en la nueva propuesta ha quedado excluido.

### **6. Conclusión**

Por todo ello, aunque la propuesta cumple formalmente con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y se refiere a las regiones ultraperiféricas, sin embargo, ni el nivel de cofinanciación previsto ni la ausencia de un enfoque diferenciado que atienda a las limitaciones específicas de las regiones ultraperiféricas, derivadas de su incapacidad para establecer dichas interconexiones, se reflejan adecuadamente en el texto. Esta situación, en última instancia, supone un obstáculo para la cohesión social y territorial que debería perseguir el Mecanismo y para la participación de Canarias en él, lo cual debería corregirse.

Parlamento de Canarias, a 3 de noviembre de 2025. Alicia Vanoostende Simili. Socorro Beato Castellano. Luz Reverón González. Luis Alberto Campos Jiménez. Melodie Mendoza Rodríguez.

**11L/CSUE-0159 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el apoyo de la Unión al asilo, la migración y la integración para el periodo 2028-2034 [COM (2025) 540]**

#### **Presidencia**

Emitido dictamen por el Parlamento de Canarias, a instancias de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales, para la verificación del cumplimiento del principio de subsidiariedad por parte de una iniciativa legislativa de la Unión Europea, relativo a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el apoyo de la Unión al asilo, la migración y la integración para el periodo 2028-2034

[COM (2025) 540], por la ponencia creada al efecto, al amparo de lo previsto en el artículo 53.5 del Reglamento de la Cámara, con fecha 3 de noviembre de 2025, de conformidad con lo establecido en los artículos 53.6 y 112 del Reglamento del Parlamento, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 3 de noviembre de 2025. EL SECRETARIO GENERAL (*P. D. de la presidenta, Resolución de 30 de junio de 2023, BOPC núm. 8, de 3/7/2023*), Salvador Iglesias Machado.

**DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS Y ACCIÓN EXTERIOR DEL PARLAMENTO DE CANARIAS, A INSTANCIAS DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA DE LAS CORTES GENERALES, PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD POR PARTE DE UNA INICIATIVA LEGISLATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA**

<b>Título del documento:</b>	<b>Iniciativa legislativa UE:</b> <b>Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el apoyo de la Unión al asilo, la migración y la integración para el periodo 2028 y 2034.</b>
<b>Referencia:</b>	<b>COM (2025) 540 final de 16/7/2025 (CSUE-159)</b>

**I. ANTECEDENTES:**

1. Con fecha 5 de septiembre de 2025, RE 202510000009530, se recibió en la Cámara correo electrónico de la Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales, por el que, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la citada Comisión Mixta remitió al Parlamento de Canarias, Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el apoyo de la Unión al asilo, la migración y la integración para el periodo 2028-2034 –COM (2025) 540 final, de 16/7/2025, para su conocimiento y, en su caso, emisión de dictamen motivado sobre el eventual incumplimiento del principio de subsidiariedad.

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 53.3 del Reglamento del Parlamento de Canarias, la comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior elaborará y aprobará, dentro del plazo de cuatro semanas fijado por el artículo 6.2 de la *Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea*, modificada por la 24/2009, de 22 de diciembre, para su adaptación al Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007 y por la 38/2010, de 20 de diciembre, para reforzar las funciones asignadas a dicha Comisión Mixta, así como el artículo Octavo. 3 de la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, 628/000006 (S) de 27 de mayo de 2010, sobre reforma de la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de septiembre de 1995, sobre desarrollo de la *Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea*, para su adaptación a las previsiones del Tratado de Lisboa y de la Ley 24/2009, publicado en el *Boletín Oficial de las Cortes Generales* núm. 312 de 8 de junio de 2010, un dictamen en el que quedará fijada la posición de la Cámara y de cuya aprobación se dará cuenta al pleno.

3. La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de julio de 2023, adoptó el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

“17. ASUNTOS TRATADOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

17.1. Asuntos remitidos por la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales.

Acuerdo:

“La Mesa de la Cámara, con el objeto de determinar, dentro de las posibilidades que al efecto, dispone el artículo 53 del Reglamento de la Cámara, el concreto procedimiento parlamentario que haya de seguirse para la emisión del parecer del Parlamento de Canarias respecto del cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad por parte de las iniciativas legislativas comunitarias europeas que sean objeto de remisión al mismo por las Cortes Generales, en los términos de lo previsto en la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, en su versión modificada para su adaptación al Tratado de Lisboa de 13 de abril de 2007, oída la Junta de Portavoces en su reunión del día de la fecha, acuerda:

1. Constituir la ponencia a que se refiere el artículo 53.5 del Reglamento de la Cámara, que, con carácter general y en tanto en cuanto no se determine lo contrario, será la competente para conocer y, en su caso, elaborar para su posterior remisión a las Cortes Generales, dictamen motivado en relación con el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad por parte de los proyectos legislativos europeos que sean objeto de consulta por aquellas”.

4. Con fecha 14 de octubre de 2025, el Gobierno de Canarias presentó informe a la iniciativa legislativa de la UE sobre Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el apoyo de la Unión al asilo, la migración y la integración para el periodo 2028-2034 –COM (2025) 540 final, de 16/7/2025.

5. Finalmente, la ponencia, en su reunión de 3 de noviembre del año en curso, ha analizado el texto de la iniciativa legislativa europea remitida por la Comisión Mixta para la Unión Europea, a resultas de lo cual, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 53.5 del Reglamento de la Cámara y del acuerdo de la Mesa antes referido, ha elaborado el siguiente:

## II. DICTAMEN

### 1. Base jurídica y tipo de competencia:

#### a) Objetivos de la propuesta legislativa

En el ámbito del asilo, de la inmigración y de la integración social de estos migrantes, la Unión Europea se ha dotado de distintos instrumentos que ha ido modificando en cada periodo presupuestario plurianual para tener en cuenta la constante evolución de los desafíos en este ámbito, incluidos los cambios derivados de aumentos de la presión en las fronteras y de la necesidad de orientar la financiación hacia las prioridades con mayor valor añadido de la Unión.

El Pacto Migratorio adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo en mayo de 2024 aboga por un enfoque integral de la inmigración y una política común de asilo, inmigración y gestión de las fronteras exteriores de los Estados miembros, basada en el principio de solidaridad y el reparto equitativo de responsabilidades entre los Estados miembros, incluidas las implicaciones financieras de dicho principio.

Para ello, el Reglamento (UE) 2024/1351 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, establece el marco común para la gestión del asilo y la migración en la Unión y para el funcionamiento del Sistema Europeo Común de Asilo, así como el mecanismo de solidaridad y los criterios y mecanismos para determinar el Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional (en adelante, el Marco).

Este marco prevé, en particular, la adopción de una estrategia europea de gestión del asilo y la migración a largo plazo, que se adoptará por primera vez, a más tardar, el 12 de diciembre de 2025 y, posteriormente, cada cinco años. Asimismo, prevé la adopción de informes europeos anuales sobre asilo y migración en los que se evaluará la situación en materia de asilo, acogida y migración durante los doce meses anteriores. Estos informes habrán de contener una evaluación de la situación general que abarque todas las rutas migratorias hacia la Unión, en todos los Estados miembros e incluir, en particular la capacidad de acogida de los Estados miembros, número de nacionales de terceros países, por nacionalidad, y por solicitudes de protección y el número de menores no acompañados, entre otras cuestiones, así como la proyección para el año siguiente del número de llegadas por mar previstas. El primer informe, según establece el Reglamento, se publicará, a más tardar, el 15 de octubre de 2025. En base a este informe, la Comisión podrá evaluar si un determinado Estado miembro se encuentra bajo presión migratoria, pero, además, entre otras muchas cuestiones, tendrá en cuenta la situación geopolítica en terceros países pertinentes, así como las causas profundas de la migración, y el efecto acumulado de las llegadas anuales actuales y anteriores de naciones de terceros países.

El Reglamento establece también que, sobre la base del informe anual, la Comisión presente una propuesta de acto de ejecución del Consejo por el que se establezca el contingente anual de solidaridad.

El Reglamento establece, por tanto, un marco regulatorio, pero su aplicación general y completa se demora hasta el 1 de julio de 2026, y cuestiones como los informes anuales y la estrategia, cuya entrada en vigor ya ha sido efectiva, no han comenzado a entrar en funcionamiento todavía.

Por ello, la aplicación de los planes nacionales del Marco conllevará importantes recursos financieros para los Estados miembros, que tendrán que seguir invirtiendo y mejorando sus sistemas nacionales integrados de gestión de casos que reúnan el asilo, la acogida y el retorno.

Si bien, como señala la Comisión Europea en esta propuesta, la dimensión exterior y las soluciones innovadoras para la gestión de la migración y el asilo deben apoyarse principalmente en el Reglamento que se apruebe para el instrumento Europa Global, las obligaciones del Pacto conllevan costes de funcionamiento significativos para los Estados miembros que requieren del apoyo de la UE puesto que son componentes clave que garantizan el funcionamiento del sistema europeo en la práctica dado que los fallos en estos ámbitos en un Estado miembro afectan a todos los demás.

La Comisión considera que el alcance del apoyo de la Unión debe ser coherente con las prioridades políticas y flexible, a fin de permitir que se tengan en cuenta los nuevos acontecimientos. Sobre la base de los resultados y las inversiones en los ámbitos del asilo y la migración de los periodos de programación anteriores, esta propuesta pretende proporcionar el apoyo necesario de la Unión para alcanzar los objetivos del planteamiento global de la migración y el asilo. Asimismo, ofrece apoyo a la migración legal y la integración temprana de los nacionales de terceros países, así como medidas horizontales de apoyo a las capacidades de los Estados miembros en el ámbito de la integración.

Asimismo, la Unión debe contar con apoyo para el nuevo enfoque común y el nuevo marco legislativo propuestos por la Comisión (COM (2025) 101 final) en su propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un sistema común para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular en la Unión y se derogan la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 2001/40/CE del Consejo y la Decisión 2004/191/CE del Consejo), con procedimientos de retorno más rápidos, sencillos y eficaces en toda la UE y soluciones innovadoras para la gestión de la migración. Este nuevo marco jurídico para los retornos constituye un elemento clave para completar el Pacto sobre Migración y Asilo.

Además, la propuesta pretende abordar la necesidad de una mayor flexibilidad en la gestión del apoyo de la Unión, así como una mayor orientación al rendimiento y una mayor simplificación para todos los agentes que participan en su aplicación garantizando una estricta complementariedad con la propuesta de Reglamento (UE) [...], por el que se crea el Fondo Europeo de Cohesión Económica, Social y Territorial, la Agricultura y las Zonas Rurales,



la Pesca y el Mar, la Prosperidad y la Seguridad, que introduce nuevos mecanismos de asignación de fondos para la gestión compartida, directa e indirecta.

Por otro lado, dado que los retos en el ámbito de la migración y el asilo están en constante evolución, la Comisión considera oportuno responder a las necesidades apremiantes y a los cambios en las políticas y las prioridades de la Unión y orientar la financiación a acciones con un gran valor añadido de la Unión, en particular a través de un mecanismo de la UE que ofrezca flexibilidad en la gestión del apoyo de esta.

Por último, esta propuesta, junto con la propuesta de Reglamento (UE) [...] por el que se establece el apoyo de la Unión al espacio Schengen, a la gestión europea integrada de las fronteras y la propuesta de Reglamento (UE) [...] por el que se establece el apoyo de la Unión a la seguridad interior, proporcionan el marco jurídico específico para la acción de la Unión en los ámbitos de la gestión eficiente de la migración y el asilo, la gestión europea integrada de las fronteras en las fronteras exteriores, el buen funcionamiento del espacio Schengen y la política europea de visados, y la seguridad interior.

### **b) Ámbito competencial**

El artículo 3, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea dispone que *«la Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con medidas adecuadas respecto al control de las fronteras exteriores, asilo, inmigración y de prevención y lucha contra la delincuencia»*.

La propuesta se basa en los artículos 78, apartado 2 y 79, apartados 2 y 4 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que facultan al Parlamento Europeo y al Consejo para actuar con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y adoptar medidas sobre el procedimiento europeo de asilo (artículo 78) y sobre (artículo 79, apartado 2):

- a) las condiciones de entrada y residencia y las normas relativas a la expedición por los Estados miembros de visados y permisos de residencia de larga duración, incluidos los destinados a la reagrupación familiar;
- b) la definición de los derechos de los nacionales de terceros países que residan legalmente en un Estado miembro, con inclusión de las condiciones que rigen la libertad de circulación y de residencia en los demás Estados miembros;
- c) la inmigración y residencia ilegales, incluidas la expulsión y la repatriación de residentes en situación ilegal;
- d) la lucha contra la trata de seres humanos, en particular de mujeres y niños.

Así como (artículo 79, apartado 4) medidas para fomentar y apoyar la acción de los Estados miembros destinada a propiciar la integración de los nacionales de terceros países que residan legalmente en su territorio.

Por su parte, la Constitución española garantiza en su artículo 13 que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el título I de la Constitución, en los términos que establezcan los tratados y la ley. De este modo, la Orgánica 4/2000, con sus sucesivas modificaciones, ha establecido los derechos y libertades de los extranjeros y su integración social. A su vez, el artículo 149, apartado 1. 2.ª otorga competencia exclusiva al Estado en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.

En cuanto a la Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad con el artículo 144 de su Estatuto de Autonomía, *“le corresponde, en materia de inmigración sin perjuicio de las competencias constitucionalmente atribuidas al Estado sobre la materia:*

- a) *La competencia exclusiva en la atención sociosanitaria y de orientación de los inmigrantes no comunitarios.*
- b) *El desarrollo de la política de integración de las personas inmigradas en el marco de sus competencias.*
- c) *La adopción de las medidas necesarias para la integración social y económica de las personas inmigrantes y para la garantía de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.*
- d) *El establecimiento, de acuerdo con la normativa estatal, de un marco de referencia para la acogida e integración de las personas inmigrantes, incluidos los menores extranjeros no acompañados”.*

Continúa señalando el párrafo 2 de ese mismo artículo 144 que *“Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia ejecutiva en materia de autorización de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Canarias. Esta competencia, que se ejercerá en necesaria coordinación con la que corresponde al Estado en materia de entrada y residencia de extranjeros y en el marco de su legislación, incluye:*

- a) *La tramitación y resolución de las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena.*
- b) *La tramitación y la resolución de los recursos presentados con relación a los expedientes a que se refiere el apartado anterior y la aplicación del régimen de inspección y sanción”.*

La iniciativa, por tanto, afecta a competencias compartidas entre la Unión Europea, el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias. En cualquier caso, desde el punto del cumplimiento del principio de subsidiariedad, la iniciativa se justifica porque su finalidad no puede alcanzarse eficazmente por ningún Estado actuando por sí solo sino a través de una intervención a nivel europeo.

## **2. Análisis de las exigencias derivadas del principio de subsidiariedad**

Tal y como determina el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (versión consolidada), en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva la Unión intervendrá solo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central

ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.

Por otra parte, los criterios que han sido definidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para proceder al examen de un acto comunitario desde la óptica del respeto al principio de subsidiariedad son dos: 1) determinar, en primer lugar, si la competencia a la que recurre el legislador comunitario es exclusiva de la Unión y, a continuación, en el caso en que no fuera una competencia exclusiva, 2) determinar si el objetivo de la acción adoptada puede lograrse mejor a nivel comunitario. Al primer criterio ya se ha respondido, de manera que procede referirse al segundo.

El Protocolo n.º 2, publicado en el *Diario Oficial de la Unión Europea*, n.º 115 de 9 de mayo de 2008 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, establece en su artículo 5 lo siguiente:

*“Los proyectos de actos legislativos se motivarán en relación con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Todo proyecto de acto legislativo debería incluir una ficha con pormenores que permitan evaluar el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Esta ficha debería incluir elementos que permitan evaluar el impacto financiero y, cuando se trate de una Directiva, sus efectos en la normativa que han de desarrollar los Estados miembros, incluida, cuando proceda, la legislación regional. Las razones que justifiquen la conclusión de que un objetivo de la Unión puede alcanzarse mejor en el plano de esta se sustentarán en indicadores cualitativos y, cuando sea posible, cuantitativos. Los proyectos de actos legislativos tendrán debidamente en cuenta la necesidad de que cualquier carga, tanto financiera como administrativa, que recaiga sobre la Unión, los Gobiernos nacionales, las autoridades regionales o locales, los agentes económicos o los ciudadanos sea lo más reducida posible y proporcional al objetivo que se desea alcanzar”.*

El principio de subsidiariedad establece que solo podrán tomarse medidas a nivel de la UE cuando sean más eficaces que la actuación individual de los Estados miembros a nivel nacional, regional o local. El mecanismo de control de la subsidiariedad, que se aplica en los ámbitos de competencia compartida entre la UE y los Estados miembros, permite a los parlamentos nacionales manifestar su posición cuando consideren que una iniciativa legislativa de la UE no respeta este principio, posición que ha de ser tenida en cuenta por la Comisión Europea.

En lo que a la presente iniciativa se refiere, los Estados miembros no pueden alcanzar por sí solos los objetivos de la propuesta, ya que los retos son de carácter transfronterizo y no se limitan a un solo Estado miembro o a un subconjunto de Estados miembros. El apoyo de la Unión crea valor añadido al promover un enfoque común en todos los Estados miembros para aplicar el acervo y las normas de la UE y al fomentar la colaboración y el intercambio oportuno de información entre ellos en cuestiones transnacionales.

En lo que al principio de proporcionalidad de la iniciativa legislativa se refiere, esta pertenece al ámbito de actuación en el espacio de libertad, seguridad y justicia, tal como se define en el título V de la tercera parte del TFUE.

Consecuentemente, la iniciativa cumple formalmente con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad.

### **3. Carga financiera y administrativa**

No se acompaña en la documentación remitida por las Cortes Generales un análisis de las eventuales cargas, si es que las hay, para las autoridades nacionales, regionales o locales, agentes económicos o ciudadanos, derivadas de la nueva regulación, con lo cual no es posible pronunciarse al respecto.

### **4. Consideración de los aspectos locales y regionales en la consulta y análisis del impacto**

El Parlamento de Canarias no ha sido objeto de consulta previa a la elaboración de la propuesta que hoy se somete a su valoración en el marco del mecanismo de control del principio de subsidiariedad. Tampoco nos consta que lo haya sido el Gobierno de Canarias.

### **5. Otras observaciones**

La iniciativa legislativa incide en medidas específicas adoptadas en el marco del artículo 349 del TFUE que afectan a Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea.

Hay que tener en cuenta que este Fondo sustituirá al Fondo de Seguridad Interior adoptado por el Reglamento (UE) 2021/1149 cuyas acciones seguirán en marcha, una vez aprobado este nuevo, hasta su cierre (artículo 5 de la propuesta que estamos analizando, que establece las disposiciones transitorias). Este Reglamento 2021/1149 si preveía una consideración específica para las RUP en su considerando 58 al señalar *“Con arreglo al artículo 349 del TFUE y en consonancia con la Comunicación de la Comisión de 24 de octubre de 2017, titulada «Una asociación estratégica renovada y más fuerte con las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea», respaldada por el Consejo en sus Conclusiones de 12 de abril de 2018, los Estados miembros pertinentes deben velar por que sus programas den respuesta a las amenazas específicas a que se enfrentan las regiones ultraperiféricas. El Fondo debe apoyar a dichos Estados miembros con recursos adecuados para que ayuden a las regiones ultraperiféricas según proceda”.*

Este considerando, que no tuvo traslación a la parte dispositiva del Reglamento 2021/1149, ha desaparecido de la propuesta actual que remite toda especialidad para las regiones ultraperiféricas a lo dispuesto en el

artículo 46 de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo Europeo para la Cohesión Económica, Social y Territorial, la Agricultura y las Zonas Rurales, la Pesca y el Mar, la Prosperidad y la Seguridad para el periodo 2028-2034, y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2023/955 y el Reglamento (UE, Euratom) 2024/2509, propuesta igualmente adoptada el 16 de julio con la referencia (COM(2025) 565).

En concreto, el artículo 46, en su apartado 1, letra a), establece que España, como parte de su plan nacional y regional para la implementación del nuevo Fondo Europeo para la Cohesión Económica, Territorial y Social, la Agricultura y las Zonas Rurales, la Pesca y el Mar, la Prosperidad y la Seguridad habrá de incluir las medidas para hacer frente a las limitaciones permanentes y estructurales de Canarias, como región ultraperiférica e la Unión, para atender sus necesidades y retos específicos en materias, tales como la migración.

Por tanto, el nuevo sistema definido en las propuestas de la Comisión Europea para el marco financiero plurianual 2028-2034 deja en manos de la Administración nacional española estas consideraciones que estaban recogidas en el mencionado considerando.

Además, la iniciativa legislativa podría tener un importante impacto sobre Canarias, ya que representa una de las fronteras externas de la Unión Europea y además supone, actualmente, uno de los principales puntos de entrada de migrantes procedentes, principalmente, de África occidental que acceden al territorio europeo a través de nuestras costas.

Por ello, la vinculación prevista entre estos fondos y los planes de colaboración nacionales y regionales (artículos 1 y 4 de la propuesta, entre otros) podría tener efectos presupuestos negativos, dado que los fondos atribuidos a estos planes son limitados, para atender principalmente a determinadas regiones europeas, como Canarias, cuya situación geográfica justificaría la adopción de medidas destinadas a ejercer un mayor control fronterizo, con el fin de reforzar la labor de la guarda costera y proteger la seguridad de las personas migrantes.

Como dato positivo, por otro lado, figura el hecho de que se reconozca, entre otras categorías, a los menores no acompañados como grupo vulnerable, tanto a efectos de la asignación presupuestaria prevista para el reasentamiento y la admisión humanitaria (artículo 5 de la propuesta) como en el reparto de recursos para el traslado de solicitantes de protección internacional o de beneficiarios de protección internacional (artículo 6, apartado 2).

## 6. Conclusión

Por todo ello, se considera que la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el apoyo de la Unión al asilo, la migración y la integración para el periodo 2028-2034, si bien aborda objetivos de indudable interés para la Unión, no se ajusta plenamente al principio de subsidiariedad en lo que respecta a su aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias, por no incorporar las adaptaciones necesarias que exige su condición de Región Ultraperiférica conforme al artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Asimismo, se propone la inclusión de un nuevo considerando que reconozca explícitamente las vulnerabilidades específicas de las regiones ultraperiféricas y que dé respuesta a las amenazas específicas a que se enfrentan las regiones ultraperiféricas. El Fondo debe apoyar a dichos Estados miembros con recursos adecuados para que ayuden a las regiones ultraperiféricas según proceda.

Al tiempo que se insta a que, en la metodología de asignación de fondos por Estado miembro, se introduzcan criterios correctores que ponderen que regiones ultraperiféricas como Canarias, representan una de las fronteras exteriores de la Unión Europea y que, además supone, actualmente, uno de los principales puntos de entrada de migrantes procedentes, principalmente, de África occidental que acceden al territorio europeo a través de nuestras costas.

Por ello, la vinculación prevista entre estos fondos y los planes de colaboración nacionales y regionales (artículos 1 y 4 de la propuesta, entre otros) podría tener efectos presupuestos negativos, dado que los fondos atribuidos a estos planes son limitados, para atender principalmente a determinadas regiones europeas, como Canarias, cuya situación geográfica justificaría la adopción de medidas destinadas a ejercer un mayor control fronterizo, con el fin de reforzar la labor de la guarda costera y proteger la seguridad de las personas migrantes.

Parlamento de Canarias, a 3 de noviembre de 2025. Alicia Vanoostende Simili. Socorro Beato Castellano. Luz Reverón González. Luis Alberto Campos Jiménez. Melodie Mendoza Rodríguez.

## 11L/CSUE-0160 *Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el apoyo de la Unión a la seguridad interior para el periodo comprendido entre 2028 y 2034 [COM (2025) 542]*

### Presidencia

Emitido dictamen por el Parlamento de Canarias, a instancias de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales, para la verificación del cumplimiento del principio de subsidiariedad por parte de una iniciativa legislativa de la Unión Europea, relativo a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el apoyo de la Unión a la seguridad interior para el periodo comprendido entre 2028 y 2034 [COM (2025) 542], por la ponencia creada al efecto, al amparo de lo previsto en el artículo 53.5 del Reglamento de la Cámara, con fecha 3 de noviembre de 2025, de conformidad con lo establecido en los artículos 53.6 y 112 del Reglamento del Parlamento, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 3 de noviembre de 2025. EL SECRETARIO GENERAL (*P. D. de la presidenta, Resolución de 30 de junio de 2023, BOPC núm. 8, de 3/7/2023*), Salvador Iglesias Machado.

**DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS Y ACCIÓN EXTERIOR DEL PARLAMENTO DE CANARIAS, A INSTANCIAS DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA DE LAS CORTES GENERALES, PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD POR PARTE DE UNA INICIATIVA LEGISLATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA**

<b>Título del documento:</b>	<b>Iniciativa legislativa UE:</b> <b>Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el apoyo de la Unión a la seguridad interior comprendido entre 2028 y 2034.</b>
<b>Referencia:</b>	<b>COM (2025) 542 final de 16/7/2025 (CSUE-160)</b>

**I. ANTECEDENTES:**

1. Con fecha 5 de septiembre de 2025, RE 202510000009531, se recibió en la Cámara correo electrónico de la Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales, por el que, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la citada Comisión Mixta remitió al Parlamento de Canarias, Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el apoyo de la Unión a la seguridad interior para el período comprendido entre 2028 y 2034 –COM (2025) 542 final, de 16/7/2025, para su conocimiento y, en su caso, emisión de dictamen motivado sobre el eventual incumplimiento del principio de subsidiariedad.

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 53.3 del Reglamento del Parlamento de Canarias, la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior elaborará y aprobará, dentro del plazo de cuatro semanas fijado por el artículo 6.2 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, modificada por la 24/2009, de 22 de diciembre, para su adaptación al Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007 y por la 38/2010, de 20 de diciembre, para reforzar las funciones asignadas a dicha Comisión Mixta, así como el artículo Octavo. 3 de la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, 628/000006 (S) de 27 de mayo de 2010, sobre reforma de la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de septiembre de 1995, sobre desarrollo de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, para su adaptación a las previsiones del Tratado de Lisboa y de la Ley 24/2009, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales núm. 312 de 8 de junio de 2010, un dictamen en el que quedará fijada la posición de la Cámara y de cuya aprobación se dará cuenta al pleno.

3. La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de julio de 2023, adoptó el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

“17. ASUNTOS TRATADOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

17.1. Asuntos remitidos por la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales.

Acuerdo:

“La Mesa de la Cámara, con el objeto de determinar, dentro de las posibilidades que al efecto, dispone el artículo 53 del Reglamento de la Cámara, el concreto procedimiento parlamentario que haya de seguirse para la emisión del parecer del Parlamento de Canarias respecto del cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad por parte de las iniciativas legislativas comunitarias europeas que sean objeto de remisión al mismo por las Cortes Generales, en los términos de lo previsto en la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, en su versión modificada para su adaptación al Tratado de Lisboa de 13 de abril de 2007, oída la Junta de Portavoces en su reunión del día de la fecha, acuerda:

1. Constituir la ponencia a que se refiere el artículo 53.5 del Reglamento de la Cámara, que, con carácter general y en tanto en cuanto no se determine lo contrario, será la competente para conocer y, en su caso, elaborar para su posterior remisión a las Cortes Generales, dictamen motivado en relación con el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad por parte de los proyectos legislativos europeos que sean objeto de consulta por aquellas”.

4. Con fecha 13 de octubre de 2025, el Gobierno de Canarias presentó informe a la iniciativa legislativa de la UE sobre Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el apoyo de la Unión a la seguridad interior para el período comprendido entre 2028 y 2034 –COM (2025) 542 final, de 16/7/2025.

5. Finalmente, la ponencia, en su reunión de 3 de noviembre del año en curso, ha analizado el texto de la iniciativa legislativa europea remitida por la Comisión Mixta para la Unión Europea, a resultas de lo cual, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 53.5 del Reglamento de la Cámara y del acuerdo de la Mesa antes referido, ha elaborado el siguiente:

**II. DICTAMEN**

**1. Base jurídica y tipo de competencia:**

Objetivos de la propuesta legislativa:

Como señala la Exposición de Motivos de la propuesta, en consonancia con las orientaciones políticas de la Comisión para el período 2024-2029, la UE se ha comprometido a lograr una Europa más segura y protegida. La Comisión ha dado seguimiento a este compromiso mediante la adopción, el 1 de abril de 2025, de la estrategia ProtectEU, cuyo objetivo es satisfacer las expectativas de los ciudadanos en el ámbito de la seguridad, protegiéndolos de diversas amenazas delictivas que también pueden proceder de fuera de la UE. Esta estrategia proporciona un



marco global para reforzar la seguridad interior, que deberá apoyarse con acciones concretas contra las amenazas híbridas, las posibles perturbaciones de las infraestructuras críticas, como los interconectores de energía o los cables de comunicación transfronterizos, y las cadenas de suministro, las redes de delincuencia organizada, las amenazas terroristas, el extremismo y la radicalización, así como los ciberataques y la manipulación de la información por parte de agentes extranjeros.

Para ello, la Comisión propone que los Estados miembros reciban un apoyo adecuado, dentro de un marco de financiación coherente pero flexible, que integre los elementos fundamentales del nuevo enfoque y se centre en medidas esenciales que aporten valor añadido de la Unión. En este enfoque, la Comisión propone que deben privilegiarse las medidas para mejorar la coordinación y la cooperación entre las autoridades policiales y judiciales y otras autoridades competentes, dada su importancia en los ámbitos de la prevención de la delincuencia y la lucha contra esta, el racismo y la xenofobia. La cooperación con las agencias y organismos de la Unión, especialmente en lo que se refiere al intercambio de información, también es esencial para prevenir los delitos relacionados con la seguridad, como el terrorismo y la delincuencia grave y organizada, así como para la lucha contra estos.

En particular, la propuesta tiene por objeto abordar la necesidad de una mayor flexibilidad en la gestión del apoyo de la Unión, así como una mayor orientación al rendimiento y una mayor simplificación para todos los agentes que participan en su aplicación. Para ello, la Comisión propone que se garantice una complementariedad estricta con la propuesta de Reglamento (UE) [...], por el que se establece el Fondo Europeo para la Cohesión Económica, Social y Territorial, la Agricultura y las Zonas Rurales, la Pesca y el Mar, la Prosperidad y la Seguridad, que introduce nuevos mecanismos de asignación y ejecución de fondos para la gestión compartida, directa e indirecta.

Asimismo, conforme a lo establecido en la estrategia ProtectEU, las consideraciones de seguridad deben integrarse e incorporarse en toda la legislación, todas las políticas y todos los programas de la UE, incluida la acción exterior de la UE. Por ello, la Comisión Europea propone que se contemple la cooperación y la financiación de acciones pertinentes en materia de seguridad interior en terceros países o en relación con estos, garantizando también la plena coherencia y complementariedad con las actividades apoyadas en el marco de los instrumentos de financiación exterior de la Unión establecidos de conformidad con el Reglamento (UE) [...] [Europa Global].

Además, dado que los retos en el ámbito de la seguridad interior están en constante evolución, la Comisión también considera necesario responder a las necesidades apremiantes y a los cambios en las políticas y las prioridades de la Unión y orientar la financiación a acciones con un gran valor añadido de la Unión a través de un mecanismo de la UE que ofrezca flexibilidad en la gestión del apoyo de esta.

Finalmente, este Reglamento supone la continuidad del Reglamento (UE) 2021/1149, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se crea el Fondo de Seguridad Interior.

## **b) Ámbito competencial**

La base jurídica de la competencia de la UE en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil y mercantil y de este Reglamento es el artículo 81, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

El artículo 81, apartado 3, del TFUE, relativo al Derecho de familia con repercusiones transfronterizas, no es aplicable porque la protección transfronteriza de los adultos no es una cuestión de Derecho de familia.

El concepto de «*Derecho de familia*» en el sentido del artículo 81, apartado 3, del TFUE debe interpretarse de manera autónoma con independencia de la definición establecida en la legislación nacional de los Estados miembros. Hasta ahora, el legislador de la Unión ha interpretado el concepto de manera bastante estricta y lo ha limitado a las normas que regulan las relaciones familiares, como las cuestiones matrimoniales, las responsabilidades parentales o las obligaciones alimenticias.

No es infrecuente que los adultos se beneficien de la protección proporcionada por los miembros de la familia. En algunos Estados miembros, la protección jurídica de los adultos vulnerables se atribuye de oficio al cónyuge o a los miembros de la familia. Sin embargo, la familia del adulto, si la tiene, no es más que uno de los aspectos a considerar para garantizar la protección. La preocupación fundamental en la protección de los adultos es el apoyo prestado y la preservación de los derechos del adulto a la dignidad, la autonomía individual, la no discriminación y la inclusión social, independientemente de sus vínculos familiares.

La regulación de la capacidad jurídica a nivel nacional en España corresponde al Derecho Civil y está regulada en el Código Civil.

De conformidad con el artículo 149.1.8º de la Constitución el Estado tiene competencia exclusiva en materia de “*legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial*”.

En cuanto a la Comunidad Autónoma de Canarias, carece de competencias en materia de legislación civil.

Por otro lado, el artículo 149.1.29.<sup>a</sup> de la Constitución Española atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad pública, si bien habilita a las comunidades autónomas para crear policías propias en la forma establecida por sus Estatutos y una orgánica.

En este sentido, el artículo 148 del Estatuto de Autonomía de Canarias ( Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canaria) atribuye a la comunidad autónoma la potestad de establecer políticas de seguridad pública y protección de personas y bienes, así como de crear, organizar y mandar la policía autonómica canaria, bajo dependencia directa del Gobierno autonómico y sin perjuicio de las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El Tribunal Constitucional, en su STC 117/1995, de 5 de diciembre, ha declarado que *“corresponde al Estado en exclusiva la competencia sobre la seguridad pública (artículo 149.1.29 CE), las competencias autonómicas en este ámbito afectan al aspecto orgánico, esto es, al servicio disponible para garantizar la seguridad pública (la policía), no al aspecto material, por lo que la existencia de una policía autonómica o Local no modifica la titularidad estatal de la competencia”*.

En coherencia con lo anterior, la Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, reconoce en su preámbulo que *“En el marco del artículo 149.1.29.ª de la Constitución y siguiendo las orientaciones de la doctrina constitucional, esta tiene por objeto la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana, e incluye un conjunto plural y diversificado de actuaciones, de distinta naturaleza y contenido, orientadas a una misma finalidad tuitiva del bien jurídico protegido. Una parte significativa de su contenido se refiere a la regulación de las intervenciones de la policía de seguridad, funciones propias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad [...]”*.

En este contexto, el artículo 5.3 de la citada señal que *“Serán autoridades y órganos competentes, a los efectos de esta ley, los correspondientes de las comunidades autónomas que hayan asumido competencias para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento de la seguridad ciudadana y cuenten con un cuerpo de policía propio”*.

La Propuesta de Reglamento de la Unión se limita a establecer un mecanismo de apoyo financiero y estratégico para reforzar las capacidades de las autoridades competentes de los Estados miembros. Define como beneficiarios a las *“autoridades responsables de la prevención, detección e investigación de infracciones penales”*, incluyendo expresamente a las autoridades policiales en sentido amplio.

## 2. Análisis de las exigencias derivadas del principio de subsidiariedad

Tal y como determina el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (versión consolidada), en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva la Unión intervendrá solo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.

Por otra parte, los criterios que han sido definidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para proceder al examen de un acto comunitario desde la óptica del respeto al principio de subsidiariedad son dos: 1) determinar, en primer lugar, si la competencia a la que recurre el legislador comunitario es exclusiva de la Unión y, a continuación, en el caso en que no fuera una competencia exclusiva, 2) determinar si el objetivo de la acción adoptada puede lograrse mejor a nivel comunitario. Al primer criterio ya se ha respondido, de manera que procede referirse al segundo.

El Protocolo n.º 2, publicado en el *Diario Oficial de la Unión Europea*, n.º 115 de 9 de mayo de 2008 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, establece en su artículo 5 lo siguiente:

*“Los proyectos de actos legislativos se motivarán en relación con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Todo proyecto de acto legislativo debería incluir una ficha con pormenores que permitan evaluar el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Esta ficha debería incluir elementos que permitan evaluar el impacto financiero y, cuando se trate de una Directiva, sus efectos en la normativa que han de desarrollar los Estados miembros, incluida, cuando proceda, la legislación regional. Las razones que justifiquen la conclusión de que un objetivo de la Unión puede alcanzarse mejor en el plano de esta se sustentarán en indicadores cualitativos y, cuando sea posible, cuantitativos. Los proyectos de actos legislativos tendrán debidamente en cuenta la necesidad de que cualquier carga, tanto financiera como administrativa, que recaiga sobre la Unión, los Gobiernos nacionales, las autoridades regionales o locales, los agentes económicos o los ciudadanos sea lo más reducida posible y proporcional al objetivo que se desea alcanzar”*.

El principio de subsidiariedad establece que solo podrán tomarse medidas a nivel de la UE cuando sean más eficaces que la actuación individual de los Estados miembros a nivel nacional, regional o local. El mecanismo de control de la subsidiariedad, que se aplica en los ámbitos de competencia compartida entre la UE y los Estados miembros, permite a los parlamentos nacionales manifestar su posición cuando consideren que una iniciativa legislativa de la UE no respeta este principio, posición que ha de ser tenida en cuenta por la Comisión Europea.

En lo que a la presente iniciativa se refiere, los Estados miembros no pueden alcanzar por sí solos los objetivos de la propuesta, ya que los retos son de carácter transfronterizo y no se limitan a un solo Estado miembro o a un subconjunto de Estados miembros. El apoyo de la Unión crea valor añadido al promover un enfoque común en todos los Estados miembros para aplicar el acervo y las normas de la UE y al fomentar la colaboración y el intercambio oportuno de información entre ellos en cuestiones transnacionales.

Conforme a lo anterior, si bien la propuesta incide en competencias exclusivas nacionales, se entiende respetado el principio de subsidiariedad a la luz de los objetivos que se pretenden alcanzar, ya que una intervención a nivel europeo puede garantizar la consecución de los mismos. Las normas de Derecho internacional privado de los Estados miembros contradictorias o divergentes en el ámbito de la protección de los adultos causan múltiples problemas en situaciones transfronterizas en la UE, como la interrupción de la protección de los adultos, el no reconocimiento de medidas extranjeras, los procesos judiciales adicionales o la falta de reconocimiento de la voluntad y las preferencias expresadas por el adulto. Los Estados miembros, actuando individualmente, no podrían abordar satisfactoriamente estos problemas.

El nudo del argumento reside en una interpretación más sofisticada de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad cuando se aplican a las RUP. Estos principios no pueden analizarse en un vacío jurídico, sino que deben leerse de manera conjunta y sistemática con el resto del Tratado, y en particular, con el artículo 349 del TFUE.

Para una RUP, una medida de la Unión solo es verdaderamente subsidiaria y proporcionada si está adaptada a su realidad específica. El principio de subsidiariedad implica que la acción de la Unión debe emprenderse solo si los objetivos no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ya sea a nivel central, regional o local.

En el caso de la seguridad de las RUP, los objetivos de protección no pueden alcanzarse de manera “suficiente” con una medida genérica, porque esa medida ignora el “multiplicador de vulnerabilidades” inherente a la ultraperiferia. Una acción más eficaz y mejor orientada a los objetivos se lograría a través de medidas que, como exige el artículo 349 del TFUE, tengan en cuenta sus características y exigencias especiales.

La propuesta, en su forma actual, no es plenamente subsidiaria en su aplicación a Canarias porque existe una forma de acción a nivel de la Unión –una acción adaptada– que sería superior y que la Comisión ha omitido proponer.

En lo que al principio de proporcionalidad de la iniciativa legislativa se refiere, al aplicar una solución uniforme a un problema manifiestamente no uniforme, falla el test de proporcionalidad. No va “*más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos*”, sino que se queda corta, al no emplear los instrumentos jurídicos (la adaptación prevista en el artículo 349 del TFUE) que el propio Tratado le proporciona para alcanzar dichos objetivos de la manera más eficiente y efectiva posible en estos territorios.

### **3. Carga financiera y administrativa**

No se acompaña en la documentación remitida por las Cortes Generales un análisis de las eventuales cargas, si es que las hay, para las autoridades nacionales, regionales o locales, agentes económicos o ciudadanos, derivadas de la nueva regulación, con lo cual no es posible pronunciarse al respecto.

### **4. Consideración de los aspectos locales y regionales en la consulta y análisis del impacto**

El Parlamento de Canarias no ha sido objeto de consulta previa a la elaboración de la propuesta que hoy se somete a su valoración en el marco del mecanismo de control del principio de subsidiariedad. Tampoco nos consta que lo haya sido el Gobierno de Canarias.

### **5. Otras observaciones**

La iniciativa legislativa incide en medidas específicas adoptadas en el marco del artículo 349 del TFUE que afectan a Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea.

Hay que tener en cuenta que este Fondo sustituirá al Fondo de Seguridad Interior adoptado por el Reglamento (UE) 2021/1149 cuyas acciones seguirán en marcha, una vez aprobado este nuevo, hasta su cierre (artículo 5 de la propuesta que estamos analizando, que establece las disposiciones transitorias). Este Reglamento 2021/1149 si preveía una consideración específica para las RUP en su considerando 58 al señalar “*Con arreglo al artículo 349 del TFUE y en consonancia con la Comunicación de la Comisión de 24 de octubre de 2017, titulada «Una asociación estratégica renovada y más fuerte con las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea», respaldada por el Consejo en sus Conclusiones de 12 de abril de 2018, los Estados miembros pertinentes deben velar por que sus programas den respuesta a las amenazas específicas a que se enfrentan las regiones ultraperiféricas. El Fondo debe apoyar a dichos Estados miembros con recursos adecuados para que ayuden a las regiones ultraperiféricas según proceda*”.

Este considerando, que no tuvo traslación a la parte dispositiva del Reglamento 2021/1149, ha desaparecido de la propuesta actual que remite toda especialidad para las regiones ultraperiféricas a lo dispuesto en el artículo 46 de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo Europeo para la Cohesión Económica, Social y Territorial, la Agricultura y las Zonas Rurales, la Pesca y el Mar, la Prosperidad y la Seguridad para el período 2028-2034, y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2023/955 y el Reglamento (UE, Euratom) 2024/2509, propuesta igualmente adoptada el 16 de julio con la referencia (COM(2025) 565).

Sin embargo, el artículo 46 (que menciona, en su apartado 1, letra a), entre otras necesidades y retos específicos de las regiones ultraperiféricas, la seguridad alimentaria, la vivienda, el transporte sostenible, la gestión del agua y los residuos, la energía, el empleo y la movilidad laboral –en particular, de los jóvenes–, la descarbonización, la circularidad, la educación y las capacidades, la inclusión social, la migración, la resiliencia frente al cambio climático y la adaptación a este, la protección del medio ambiente, la economía azul, el acceso a la asistencia

sanitaria, la energía, el transporte sostenible y la conectividad digital, y el desarrollo económico, que incluya una economía azul sostenible y diversificada) no hace ninguna referencia a la seguridad interior.

Por lo tanto, la Comisión no obliga, en la redacción actual, a España, como parte de su plan nacional y regional para la implementación del nuevo Fondo Europeo para la Cohesión Económica, Territorial y Social, la Agricultura y las Zonas Rurales, la Pesca y el Mar, la Prosperidad y la Seguridad a que incluya medidas para hacer frente a las limitaciones permanentes y estructurales de Canarias, como región ultraperiférica e la Unión, para atender sus necesidades y retos específicos en materias, tales como la seguridad interior.

Por tanto, el nuevo sistema definido en las propuestas de la Comisión Europea para el marco financiero plurianual 2028-2034 deja en manos de la Administración nacional española estas consideraciones que estaban recogidas en el mencionado considerando.

La propuesta de Reglamento, al promover acciones para *“mejorar e intensificar la cooperación policial operativa, incluidas las operaciones conjuntas”*, incide directamente en el núcleo del modelo policial canario. Si bien los objetivos de la propuesta son, en gran medida, coincidentes con los fines del sistema de seguridad canario, los mecanismos de implementación propuestos podrían generar fricciones con la distribución competencial vigente.

La propuesta europea, al referirse de manera genérica a las *“autoridades competentes”*, podría incentivar la creación de canales de cooperación directa entre las FCSE y otros cuerpos policiales europeos o agencias de la Unión (como Europol), sin la necesaria articulación con la policía autonómica-Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) en materias que requieren una actuación coordinada en el territorio canario.

El artículo 148.4 del EAC y la Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo 50) establecen de forma inequívoca que la Junta de Seguridad es el instrumento superior de coordinación entre la policía autonómica-CGPC y las FCSE en el archipiélago. Es en este foro paritario donde se deben acordar los protocolos de actuación conjunta, el intercambio de información y la delimitación de ámbitos operativos para garantizar la eficacia y evitar disfunciones.

La propuesta de Reglamento, en su redacción actual, adolece de una visión centralista de la organización policial de los Estados miembros. Al promover una cooperación operativa directa entre *“autoridades competentes”* y con agencias de la UE, sin salvaguardar la existencia de modelos policiales complejos y descentralizados como el español, corre el riesgo de debilitar estas estructuras de coordinación legalmente establecidas.

La financiación europea podría incentivar la creación de marcos de cooperación *ad hoc* para proyectos específicos que operen en paralelo a la Junta de Seguridad. Esto no solo generaría una respuesta de seguridad fragmentada y menos eficiente en el territorio, sino que, a largo plazo, podría erosionar la relevancia y la autoridad de la Junta, recentralizando *de facto* la toma de decisiones en materia de seguridad y vaciando de contenido una competencia autonómica clave.

Por tanto, una aplicación del Reglamento que no respete el papel central de la Junta de Seguridad supondría una vulneración del principio de autonomía institucional, corolario del principio de subsidiariedad, que exige que la acción de la Unión no menoscabe las estructuras constitucionales y administrativas de los Estados miembros.

Por su parte, el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, reformado por 8/2018, de 5 de noviembre, por la que se modifica la 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, establece que *“Además de reforzar los principios básicos consagrados por la 19/1994, de 6 de julio, esta modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias incorpora en el Título preliminar de dicha los principios derivados del reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea en virtud del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión; con el objetivo de que los ciudadanos canarios, pese a la lejanía, insularidad y limitaciones estructurales permanentes, estén en igualdad de oportunidades frente al conjunto de ciudadanos de la Unión Europea, debiéndose modular a tal fin la actuación estatal en las políticas económicas. Además, se incluye una referencia expresa a que las medidas recogidas en el Régimen tendrán en cuenta con carácter general, la doble insularidad de las islas no capitalinas”*.

La relación entre la propuesta de seguridad y el REF no es de conflicto jurídico directo, sino de potencial fricción política y estratégica. Un entorno seguro es una condición *sine qua non* para la inversión y el desarrollo económico. Por tanto, una mayor financiación para la seguridad en Canarias podría, en principio, reforzar los objetivos del REF al hacer del archipiélago un destino más seguro y, por ende, más atractivo para la inversión.

Sin embargo, si el nuevo fondo de seguridad se implementa sin una coordinación estratégica con las autoridades responsables de la gestión del REF, se podrían enviar señales contradictorias.

Por ello, es imperativo que los planes nacionales de aplicación del fondo incluyan una evaluación de impacto sobre los objetivos del REF y que las medidas de seguridad se diseñen de forma que apoyen, y no obstaculicen, la resiliencia económica de la región.

El artículo 349 del TFUE no es una mera disposición programática, sino un mandato jurídico vinculante para las instituciones de la Unión. Obliga al Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, a adoptar *“medidas específicas”* destinadas a adaptar la aplicación de las políticas de la Unión, incluidas las del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, a las realidades estructurales, sociales y económicas de las RUP.

Estas realidades, como la lejanía, la insularidad, la reducida superficie, la topografía y el clima difíciles, y la dependencia económica de un número reducido de productos, obstaculizan gravemente su desarrollo y generan vulnerabilidades de seguridad únicas.



Estas observaciones no cuestionan la premisa fundamental de la Comisión Europea. Las amenazas más graves para la seguridad interior –la delincuencia grave y organizada, el terrorismo, la ciberdelincuencia y las amenazas híbridas– son, por definición, transnacionales. Ningún Estado miembro, y mucho menos una región, puede hacerles frente de manera aislada.

La acción a nivel de la Unión es, por tanto, no solo necesaria sino indispensable. Aporta un valor añadido innegable al facilitar la cooperación operativa, el intercambio de inteligencia, la armonización de capacidades y la movilización de recursos a una escala que supera las posibilidades individuales de los Estados. Un rechazo total de la propuesta por motivos de subsidiariedad sería, en consecuencia, jurídicamente insostenible y estratégicamente imprudente.

En consecuencia, se reconoce la necesidad y el valor añadido de una acción coordinada a nivel de la Unión para hacer frente a las amenazas transnacionales a la seguridad interior. Sin embargo, la propuesta presenta un riesgo de menoscabo de las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de seguridad, al no reconocer explícitamente ni salvaguardar los órganos de coordinación legalmente establecidos en su Estatuto de Autonomía, como es la Junta de Seguridad de Canarias.

La propuesta ignora por completo la condición de Región Ultraperiférica de Canarias, incumpliendo el mandato del artículo 349 del TFUE de adaptar las políticas de la Unión. Tampoco reconoce las vulnerabilidades específicas y amplificadas del archipiélago en materia de narcotráfico, inmigración irregular, trata de seres humanos y, de forma crítica, la seguridad de sus infraestructuras de comunicación submarinas.

Como consecuencia de lo anterior, la propuesta, en su redacción actual, no se ajusta plenamente a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en lo que respecta a su aplicación en Canarias, al no ser el instrumento más idóneo y eficaz para garantizar la seguridad en este territorio con especificidades constitucional y europeamente reconocidas.

## 6. Conclusión

Por todo ello, se considera que la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el apoyo de la Unión a la seguridad interior para el período comprendido entre 2028 y 2034 [COM(2025) 542], si bien aborda objetivos de indudable interés para la Unión, no se ajusta plenamente al principio de subsidiariedad en lo que respecta a su aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias, por no incorporar las adaptaciones necesarias que exige su condición de Región Ultraperiférica conforme al artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y por no salvaguardar adecuadamente los mecanismos de coordinación policial previstos en su Estatuto de Autonomía.

Asimismo, se propone la inclusión de un nuevo considerando que reconozca explícitamente las vulnerabilidades específicas de las Regiones Ultraperiféricas en materia de seguridad, mencionando su posición geoestratégica, su exposición a rutas de delincuencia organizada y la criticidad de sus infraestructuras, y que subraye la necesidad de aplicar el artículo 349 del TFUE en el marco del presente Reglamento.

Paralelamente, se propone la adición de un nuevo objetivo o un subapartado específico que contemple *“la adaptación de las medidas de seguridad y el refuerzo de las capacidades en las Regiones Ultraperiféricas para hacer frente a sus vulnerabilidades específicas, en particular en lo que respecta a la lucha contra la delincuencia organizada transfronteriza y la protección de sus infraestructuras críticas”*.

Al tiempo que se insta a que, en la metodología de asignación de fondos por Estado miembro, se introduzcan criterios correctores que ponderen no solo la población o el PIB, sino también factores de riesgo estratégico como la presencia de fronteras exteriores, la condición de RUP y la existencia de infraestructuras críticas de importancia para la Unión.

Y se recomienda que el texto del Reglamento o los actos de ejecución posteriores especifiquen que la financiación de la *“cooperación policial operativa”* en Estados miembros con estructuras policiales descentralizadas deberá llevarse a cabo respetando y, preferentemente, a través de los órganos de coordinación legalmente establecidos, como la Junta de Seguridad de Canarias.

Finalmente, se solicitar que, en los programas de trabajo que desarrollen el Reglamento, se designe como área de financiación prioritaria la protección de las infraestructuras críticas de conectividad digital (cables submarinos) en las Regiones Ultraperiféricas, dada su importancia vital para su supervivencia económica y social.

Parlamento de Canarias, a 3 de noviembre de 2025. Alicia Vanoostende Simili. Socorro Beato Castellano. Luz Reverón González. Luis Alberto Campos Jiménez. Melodie Mendoza Rodríguez.

**11L/CSUE-0162 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 en lo que respecta al programa de distribución de frutas, hortalizas y leche en los centros escolares («programa escolar de la UE»), las intervenciones sectoriales, la creación de un sector de las proteaginosas, los requisitos para el cáñamo, la posibilidad de establecer normas de comercialización para el queso, las proteaginosas y la carne, la aplicación de derechos de importación adicionales, las normas sobre la disponibilidad de suministros en tiempos de emergencia y crisis graves y las garantías [COM (2025) 553]**

## Presidencia

Emitido dictamen por el Parlamento de Canarias, a instancias de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales, para la verificación del cumplimiento del principio de subsidiariedad por parte de una iniciativa legislativa de la Unión Europea, relativo a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el

que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 en lo que respecta al programa de distribución de frutas, hortalizas y leche en los centros escolares («programa escolar de la UE»), las intervenciones sectoriales, la creación de un sector de las proteaginosas, los requisitos para el cáñamo, la posibilidad de establecer normas de comercialización para el queso, las proteaginosas y la carne, la aplicación de derechos de importación adicionales, las normas sobre la disponibilidad de suministros en tiempos de emergencia y crisis graves y las garantías [COM (2025) 553], por la ponencia creada al efecto, al amparo de lo previsto en el artículo 53.5 del Reglamento de la Cámara, con fecha 3 de noviembre de 2025, de conformidad con lo establecido en los artículos 53.6 y 112 del Reglamento del Parlamento, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 3 de noviembre de 2025. EL SECRETARIO GENERAL (*P. D. de la presidenta, Resolución de 30 de junio de 2023, BOPC núm. 8, de 3/7/2023*), Salvador Iglesias Machado.

**DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS Y ACCIÓN EXTERIOR DEL PARLAMENTO DE CANARIAS, A INSTANCIAS DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA DE LAS CORTES GENERALES, PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD POR PARTE DE UNA INICIATIVA LEGISLATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA**

<b>Título del documento:</b>	<b>Iniciativa legislativa UE:</b> Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el reglamento (UE) núm. 1308/2013 en lo que respecta al programa de distribución de frutas, hortalizas y leche en los centros escolares (programa escolar de la UE), las intervenciones sectoriales, la creación de un sector de las proteaginosas, los requisitos para el cáñamo, la posibilidad de establecer normas de comercialización para el queso, las proteaginosas y la carne, la aplicación de derechos de importación adicionales, las normas sobre disponibilidad de suministros en tiempos de emergencia y crisis graves y las garantías.
<b>Referencia:</b>	COM (2025) 553 final de 16/7/2025 (CSUE-162)

**I. ANTECEDENTES:**

1. Con fecha 5 de septiembre de 2025, RE 202510000009533, se recibió en la Cámara correo electrónico de la Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales, por el que, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la citada Comisión Mixta remitió al Parlamento de Canarias, Propuesta de Reglamento del del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) núm. 1308/2013 en lo que respecta al programa de distribución de frutas, hortalizas y leche en los centros escolares (“programa escolar UE”), las intervenciones sectoriales, la creación de un sector de las proteaginosas, los requisitos para el cáñamo, la posibilidad de establecer normas de comercialización para el queso, las proteaginosas y la carne, la aplicación de derechos de importación adicionales, las normas sobre disponibilidad de suministros en tiempos de emergencia y crisis graves y las garantías COM (2025) 553 final, de 16/7/2025.

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 53.3 del Reglamento del Parlamento de Canarias, la comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior elaborará y aprobará, dentro del plazo de cuatro semanas fijado por el artículo 6.2 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, modificada por la 24/2009, de 22 de diciembre, para su adaptación al Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007 y por la 38/2010, de 20 de diciembre, para reforzar las funciones asignadas a dicha Comisión Mixta, así como el artículo Octavo. 3 de la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, 628/000006 (S) de 27 de mayo de 2010, sobre reforma de la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de septiembre de 1995, sobre desarrollo de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, para su adaptación a las previsiones del Tratado de Lisboa y de la Ley 24/2009, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales núm. 312 de 8 de junio de 2010, un dictamen en el que quedará fijada la posición de la Cámara y de cuya aprobación se dará cuenta al pleno.

3. La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de julio de 2023, adoptó el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

“17. ASUNTOS TRATADOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

17.1. Asuntos remitidos por la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales.

Acuerdo:

“La Mesa de la Cámara, con el objeto de determinar, dentro de las posibilidades que al efecto, dispone el artículo 53 del Reglamento de la Cámara, el concreto procedimiento parlamentario que haya de seguirse para la emisión del parecer del Parlamento de Canarias respecto del cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad por parte de las iniciativas legislativas comunitarias europeas que sean objeto de remisión al mismo por las Cortes Generales, en los términos de lo previsto en la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, en su versión modificada para su adaptación al Tratado de Lisboa de 13 de abril de 2007, oída la Junta de Portavoces en su reunión del día de la fecha, acuerda:

1. Constituir la ponencia a que se refiere el artículo 53.5 del Reglamento de la Cámara, que, con carácter general y en tanto en cuanto no se determine lo contrario, será la competente para conocer y, en su caso,

*elaborar para su posterior remisión a las Cortes Generales, dictamen motivado en relación con el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad por parte de los proyectos legislativos europeos que sean objeto de consulta por aquellas”.*

4. Con fecha 21 de octubre de 2025, el Gobierno de Canarias presentó informe a la iniciativa legislativa de la UE sobre Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) núm. 1308/2013 en lo que respecta al programa de distribución de frutas, hortalizas y leche en los centros escolares (“programa escolar UE”), las intervenciones sectoriales, la creación de un sector de las proteaginosas, los requisitos para el cáñamo, la posibilidad de establecer normas de comercialización para el queso, las proteaginosas y la carne, la aplicación de derechos de importación adicionales, las normas sobre disponibilidad de suministros en tiempos de emergencia y crisis graves y las garantías COM (2025) 553 final, de 16/7/2025.

5. Finalmente, la ponencia, en su reunión de 3 de noviembre del año en curso, ha analizado el texto de la iniciativa legislativa europea remitida por la Comisión Mixta para la Unión Europea, a resultas de lo cual, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 53.5 del Reglamento de la Cámara y del acuerdo de la Mesa antes referido, ha elaborado el siguiente:

## **II. DICTAMEN**

### **1. Base jurídica y tipo de competencia:**

#### **a) Objetivos de la propuesta legislativa**

Durante todos sus años de funcionamiento, la Política Agraria Común (PAC) ha experimentado grandes reformas para adaptarse a nuevos planteamientos más verdes, sostenibles y equitativos, ha reducido su peso porcentual en el presupuesto europeo y ha tenido que adaptar sus políticas de apoyo a la globalización del comercio mundial y a los cambios de hábitos de consumo de los europeos.

Sin embargo, las sucesivas reformas han mantenido los tres grandes bloques en los que conceptualmente se agrupan las medidas de la PAC:

- La ayuda a la renta consistentes en pagos directos que garantizan la estabilidad de los ingresos de los agricultores como contrapartida a la importante función de producción alimentaria desempeñada por este sector, que no podría obtener una remuneración equitativa en condiciones normales de mercado. Todo ello, siempre dentro del respeto a las normas

- Las medidas de mercado que se canalizan a través de la organización común de mercados agrarios (OCM). Inicialmente estas OCM se basaban en precios garantizados al agricultor que se han ido reduciendo y convirtiendo en una red de seguridad (solo para crisis provocadas por perturbaciones importantes en los mercados) así como en ayudas al almacenamiento privado y a la intervención pública; y, en medidas de control de la oferta que han desaparecido progresivamente. Se mantienen, no obstante, determinadas disposiciones sobre algunos cultivos o producciones que actualmente dan mucho más margen a los Estados miembros, como ocurre en el sector del vino que tiene una regulación muy detallada. Asimismo, se mantienen ayudas para la distribución de productos lácteos y hortalizas en los centros escolares, reglas para las organizaciones de productores, asociaciones de organizaciones y organizaciones interprofesionales, así como los programas operativos para las organizaciones de productores de frutas y hortalizas. Por último, el Reglamento de la organización común de mercados también establece disposiciones específicas sobre intercambios comerciales con terceros países y el régimen de certificados de importación y exportación.

- Las medidas de desarrollo rural, recogidas en el período 2021-2027 en los planes estratégicos nacionales de la PAC, que buscan incrementar la productividad del sector agrario, con apoyos específicos, financiando las inversiones necesarias para garantizar el relevo generacional y la adaptación a un sector agrícola sostenible y competitivo.

El pasado 16 de julio la Comisión Europea presentó un amplio paquete legislativo para el próximo marco financiero plurianual (MFP) correspondiente al período 2028-2034 que incluye también la reforma de la PAC para ese mismo período.

Dentro de esta nueva estructura, la Comisión agrupa en unos pocos instrumentos, la multiplicidad de fondos actual y propone, en particular, la adopción de un Fondo Europeo para la Cohesión Económica, Social y Territorial, la Agricultura y las Zonas Rurales, la Pesca y el Mar, la Prosperidad y la Seguridad. Este Fondo agrupará las normas sectoriales específicas relativas a:

- Desarrollo regional (Feder y Fondo de Cohesión).
- Migración, fronteras, seguridad.
- Social (FSE +).
- Política Agrícola común.
- Política Pesquera y Marítima.
- Asimismo, se creará un Mecanismo de la Unión como una reserva para aumentar la flexibilidad y hacer frente a crisis imprevistas.

Y, todo ello, a través de la elaboración por parte de los Estados miembros de planes de colaboración nacional y regional que reúnan catorce fondos existentes y que habrán de ser aprobados por la Comisión Europea y que

combinarán fondos de la UE ejecutados por los Estados miembros y por las regiones en un proceso de planificación a medida que debe ser acorde con las prioridades comunes de la Unión.

El Reglamento sobre los planes de colaboración nacionales y regionales (Documentos COM (2025) 565 final) agrupa los fondos agrícolas preasignados a nivel nacional, es decir, el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural restablecidos actualmente en los reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo (UE) 2021/2115 y (UE) 2021/2116.

La propuesta de Reglamento por el que se establecen las condiciones para la ejecución de la ayuda de la Unión a la política agrícola común para el período 2028-2034 (Documento COM (2025) 560 final) desarrolla los aspectos relacionados con las ayudas a la renta y al desarrollo de esta propuesta sobre los planes de colaboración nacional y regional.

Mientras que la propuesta que estamos analizando ahora desarrolla las medidas de mercado con una modificación del Reglamento (UE) núm. 1308/2013, que establece las normas fundamentales sobre la organización común de mercados (OCM) de los productos agrarios.

Para el período 2028-2034, la ayuda financiera a las medidas establecidas en dicho reglamentos sobre las OCM se regirá por el marco jurídico establecido en el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los planes de colaboración nacionales y regionales. Esta ayuda también estará sujeta a las normas especificadas en el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el rendimiento (Documento COM (2025) 545) que establece un marco de rendimiento y rastreo del gasto del presupuesto, junto con otras normas horizontales para los programas y actividades de la Unión, salvo disposición en contrario.

De igual modo, el programa escolar de la UE y la ayuda a sectores agrícolas específicos recibirán apoyo financiero a través de los planes de colaboración nacional y regional. No obstante, dado que estos están vinculados a los mercados de productos agrícolas, las normas específicas sobre el tipo de intervenciones deben establecerse en el Reglamento (UE) núm. 1308/2013 que ahora modifica esta propuesta.

Por último, esta propuesta integra las disposiciones del Reglamento (UE) núm. 228/2013 (Posci) relativas a la utilización de un símbolo gráfico para la comercialización de productos agrícolas de calidad en las regiones ultraperiféricas y la excepción en materia de ayudas estatales para los pagos nacionales en el sector del azúcar para las regiones ultraperiféricas francesas.

### **b) Ámbito competencial**

De conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra d), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en el ámbito de la agricultura y la pesca la competencia es compartida entre la UE y los Estados miembros, salvo en lo relativo a la conservación de los recursos biológicos marinos.

El artículo 38 del TFUE faculta a la Unión para definir y aplicar una política agrícola común. El artículo 39 del TFUE establece los objetivos de la PAC, que incluyen incrementar la productividad agrícola, garantizar un nivel de vida equitativo para la población agrícola, estabilizar los mercados, garantizar la seguridad de los abastecimientos y asegurar al consumidor estos suministros a precios razonables.

Por ello, la base jurídica de esta propuesta es el artículo 43, apartado 2, del TFUE que otorga competencias al Parlamento Europeo y al Consejo para adoptar las disposiciones que resulten necesarias para la consecución de los objetivos de la política común de agricultura.

Forma parte, asimismo, de la base jurídica de este Reglamento, el artículo 349 del TFUE por cuanto recoge medidas específicas de aplicación a las regiones ultraperiféricas.

De conformidad con el artículo 148.1.7.<sup>a</sup> de la Constitución española, las comunidades autónomas pueden asumir competencias en materia de agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.

Por su parte, el artículo 13 del Estatuto de Autonomía establece que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materia de agricultura y ganadería, respetando lo establecido por el Estado en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 19.1.13.<sup>a</sup>, 16.<sup>a</sup> y 23.<sup>a</sup> de la Constitución.

La iniciativa, por tanto, afecta a competencias estatales y autonómicas. Sin embargo, los Fondos Europeos destinados a la Política Agrícola señalados en esta iniciativa legislativa no están destinados a sustituir las políticas públicas aplicadas por los Estados miembros y regiones en esta materia, sino a cofinanciar las acciones que los Estados y las regiones efectúen al respecto, manteniendo, por tanto, la Comunidad Autónoma de Canarias todas sus competencias en materia de realización y ejecución de dichos planes y programas específicos.

En particular, la propuesta que se informa, se considera que no menoscaba las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias. No obstante, aún sin menoscabar estas, supone un retroceso y un riesgo para la aplicación del derecho europeo en Canarias puesto que la financiación europea específicamente dirigida a paliar las dificultades de la agricultura en estas regiones no está claramente diferenciada y especificada a nivel europeo, sino que se deja en manos de un reparto estatal en el marco de un plan conjunto con otras políticas.

## **2. Análisis de las exigencias derivadas del principio de subsidiariedad**

Tal y como determina el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (versión consolidada), en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva la Unión intervendrá solo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central



ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.

Por otra parte, los criterios que han sido definidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para proceder al examen de un acto comunitario desde la óptica del respeto al principio de subsidiariedad son dos: 1) determinar, en primer lugar, si la competencia a la que recurre el legislador comunitario es exclusiva de la Unión y, a continuación, en el caso en que no fuera una competencia exclusiva, 2) determinar si el objetivo de la acción adoptada puede lograrse mejor a nivel comunitario. Al primer criterio ya se ha respondido, de manera que procede referirse al segundo.

El Protocolo n.º 2, publicado en el *Diario Oficial de la Unión Europea*, n.º 115 de 9 de mayo de 2008 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, establece en su artículo 5 lo siguiente:

*“Los proyectos de actos legislativos se motivarán en relación con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Todo proyecto de acto legislativo debería incluir una ficha con pormenores que permitan evaluar el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Esta ficha debería incluir elementos que permitan evaluar el impacto financiero y, cuando se trate de una Directiva, sus efectos en la normativa que han de desarrollar los Estados miembros, incluida, cuando proceda, la legislación regional. Las razones que justifiquen la conclusión de que un objetivo de la Unión puede alcanzarse mejor en el plano de esta se sustentarán en indicadores cualitativos y, cuando sea posible, cuantitativos. Los proyectos de actos legislativos tendrán debidamente en cuenta la necesidad de que cualquier carga, tanto financiera como administrativa, que recaiga sobre la Unión, los Gobiernos nacionales, las autoridades regionales o locales, los agentes económicos o los ciudadanos sea lo más reducida posible y proporcional al objetivo que se desea alcanzar”.*

El principio de subsidiariedad establece que solo podrán tomarse medidas a nivel de la UE cuando sean más eficaces que la actuación individual de los Estados miembros a nivel nacional, regional o local. El mecanismo de control de la subsidiariedad, que se aplica en los ámbitos de competencia compartida entre la UE y los Estados miembros, permite a los parlamentos nacionales manifestar su posición cuando consideren que una iniciativa legislativa de la UE no respeta este principio, posición que ha de ser tenida en cuenta por la Comisión Europea.

En lo que a la presente iniciativa se refiere, en virtud del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la agricultura es un ámbito de competencia compartida entre la Unión y los Estados miembros, por lo que se aplica el principio de subsidiariedad.

Habida cuenta de la dimensión europea de la organización común de mercados y de que esta regula la libre circulación de productos agrícolas en el mercado interior, las diversas cuestiones que emanan deben abordarse a escala de la UE, no a nivel de los Estados miembros actuando de manera individual. Además, los cambios propuestos son modificaciones de la actual organización común de mercados de los productos agrícolas.

En lo que al principio de proporcionalidad se refiere, la iniciativa comprende modificaciones limitadas y específicas de la legislación actual, necesarias para el buen funcionamiento de la actual organización común de mercados.

Consecuentemente, se aprecia que la iniciativa cumple formalmente con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

### **3. Carga financiera y administrativa**

No se acompaña en la documentación remitida por las Cortes Generales un análisis de las eventuales cargas, si es que las hay, para las autoridades nacionales, regionales o locales, agentes económicos o ciudadanos, derivadas de la nueva regulación, con lo cual no es posible pronunciarse al respecto.

### **4. Consideración de los aspectos locales y regionales en la consulta y análisis del impacto**

El Parlamento de Canarias no ha sido objeto de consulta previa a la elaboración de la propuesta que hoy se somete a su valoración en el marco del mecanismo de control del principio de subsidiariedad. Tampoco nos consta que lo haya sido el Gobierno de Canarias.

### **5. Otras observaciones**

La iniciativa legislativa incide en medidas específicas adoptadas en el marco del artículo 349 del TFUE que afectan a Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea.

Para el período 2021-2027 la regulación europea en materia de política agrícola se encuentra recogida, en carácter general, en tres reglamentos: uno sobre las normas de financiación y de gestión; un segundo sobre los planes estratégicos de la PAC que aborda las medidas de ayuda a la renta, pero también las ayudas al desarrollo rural; y, por último, una modificación del Reglamento sobre la organización común de mercados.

- Reglamento (UE) 2021/2116, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la PAC;
- Reglamento (UE) 2021/2115, por el que se establecen normas sobre la ayuda a los planes estratégicos nacionales de la PAC;
- Reglamento (UE) 2021/2117, que modifica los reglamentos (UE) núm. 1308/2013, sobre la organización común de los mercados agrícolas; (UE) núm. 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas; (UE) núm. 251/2014, sobre las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados; y (UE) núm. 228/2013, por el que se establecen las medidas en el sector agrícola de las regiones ultraperiféricas de la UE.

Todos ellos establecen disposiciones específicas para las regiones ultraperiféricas (RUP); en particular, el Reglamento (UE) 2021/2115, sobre planes estratégicos nacionales de la PAC que contempla amplias excepciones para las RUP, que tienen sus regímenes propios a través de los Posei.

Las medidas de mercado que contenían una protección muy amplia de los mercados agrícolas europeos han ido cediendo a la realidad de las normas de la Organización Mundial del Comercio y de las limitaciones propias del presupuesto europeo, que han supuesto la disminución de los gastos agrícolas a favor de las nuevas competencias de las que la Unión Europea se ha ido dotando.

Por ello, si bien las primeras normas dedicadas a la agricultura de las RUP previeron excepciones en el ámbito de las medidas de mercado en sectores como la leche, el vino o el azúcar, la mayor parte de estas excepciones han ido decaendo al flexibilizar la Unión la regulación de estos mercados. Algunas de estas medidas específicas se mantienen en Canarias, pero por la transposición que del derecho europeo ha realizado España, siempre dentro de los márgenes permitidos por las Instituciones Europeas, como es el caso de las autorizaciones para la plantación de viñas o de normas sanitarias en el marco de programas nacionales con una incidencia específica en las producciones propias del archipiélago.

En estos momentos, las excepciones que prevé el Reglamento 1308/2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios se centran en los siguientes aspectos:

- Por lo que respecta a las ayudas para la distribución en los centros escolares de frutas y hortalizas y de leche y productos lácteos, se prevé en el artículo 23 bis que las asignaciones para los Estados miembros de que se trate garanticen mayores ayudas a las RUP enumeradas en el artículo 349 TFUE con el fin de tener en cuenta la situación específica de dichas regiones ultraperiféricas cercanas entre sí. Además, aunque no estaba recogido inicialmente, se ha incluido al plátano dentro de las frutas y hortalizas frescas que está previsto distribuir y se incluyen también, para estas regiones, porcentajes más altos de transferencia entre las distintas asignaciones iniciativas. Estas disposiciones no se modifican en la propuesta analizada.

- Sin embargo, por lo que respecta a las frutas y hortalizas y al sector del vino, las excepciones recogidas en los mecanismos de mercado para las RUP están ahora mismo recogidas en el Reglamento 2021/2115 sobre los planes estratégicos nacionales de la PAC y deberían, en coherencia, estar incluidas en el plan nacional y regional que prevé la propuesta de Reglamento recogida en el documento COM (2025) 565.

En lo que se refiere a la propuesta para el futuro marco 2028-2034, las disposiciones específicas para las RUP se han sustituido por un capítulo específico dedicado a las regiones ultraperiféricas, en la propuesta de Reglamento sobre los planes nacionales y regionales, que contiene tres artículos: 46, 47 y 48. Este capítulo obliga a nuestra Administración nacional a incluir todas esas disposiciones específicas dentro del plan nacional y regional que España habrá de presentar y negociar con la Comisión Europea.

Así, el artículo 46 señala que España habrá de preparar, como parte de su plan, medidas para hacer frente a las limitaciones permanentes y estructurales de las regiones ultraperiféricas de la Unión, que obstaculizan gravemente su desarrollo, tal y como reconoce el artículo 349 TFUE para abordar los objetivos siguientes:

- 1) Seguridad alimentaria, la vivienda, el transporte sostenible, la gestión del agua y los residuos, la energía, el empleo y la movilidad laboral –en particular los jóvenes–, la descarbonización, la circularidad, la educación y las capacidades, la inclusión social, la inmigración, la resiliencia frente al cambio climático y la adaptación a este, la protección del medio ambiente, la economía azul, el acceso a la asistencia sanitaria, la energía el transporte sostenible y la conectividad digital, y el desarrollo económico, que incluya una economía azul sostenible y diversificada (es decir, los ámbitos recogidos actualmente en el Feder, el FSE +, el programa LIFE, el Fondo de Asilo, Migración e Integración entre otras más).
- 2) Garantizar el suministro de productos esenciales para el consumo, la transformación o utilización como insumos agrícolas (es decir, lo que actualmente, está recogido en el Régimen Específico de Abastecimiento –REA–);
- 3) Asegurar el futuro y el desarrollo a largo plazo de la agricultura, la pesca y la acuicultura (es decir, lo que ahora está recogido en el Posei y en las normas específicas para pesca y acuicultura).

A su vez, los artículos 47 y 48 desarrollan, respectivamente, las cuestiones relacionadas con el REA y con el apoyo específico a la producción y transformación agrícolas locales (resto Posei).

La presente propuesta de Reglamento recoge otro aspecto del Posei que no está regulado en el plan nacional y regional que es el referido a las disposiciones del Reglamento (UE) núm. 228/2013 relativas a la utilización de un símbolo gráfico para la comercialización de productos agrícolas de calidad en las regiones ultraperiféricas y a la excepción en materia de ayudas estatales para los pagos nacionales en el sector del azúcar en las regiones ultraperiféricas francesas. Asimismo, recoge, dentro de sus definiciones, la de región ultraperiférica (las mencionadas en el artículo 349 TFUE).

Es decir, la propuesta de la PAC para 2028-2034 suprime el Reglamento núm. 228/2013 sobre el Posei y desglosa su contenido en dos reglamentos:

- Por un lado, la propuesta de Reglamento sobre los planes nacionales y regionales que obliga a que el Estado español recoja en su plan el programa de apoyo a las producciones agrícolas y el Régimen Específico de Abastecimiento.

- Por otro lado, la propuesta de modificación del Reglamento 1308/2013 que recoge el símbolo gráfico para la comercialización de productos agrícolas de calidad específicos de las regiones ultraperiféricas, así como una disposición específica sobre las ayudas de Estado al azúcar en las regiones ultraperiféricas francesas.

Hay que recordar el ámbito y alcance de las disposiciones recogidas actualmente en el Reglamento 228/2013 que incluye no solo medidas relacionadas con el apoyo a las producciones agrícolas locales o al Régimen Específico de Abastecimiento, sino también con respecto a las ayudas estatales en general (artículo 23, apartados 1 y 2 –no así el caso del azúcar de la Reunión recogido en el apartado 3 y que ahora sí está reflejado en esta propuesta); a la ayuda estatal a la producción de tabaco en Canarias o a la exención de derechos de aduana al tabaco en Canarias.

En este momento del procedimiento de adopción de la propuesta, es importante destacar que dichas disposiciones deberán estar recogidas o en el plan nacional y regional español o en esta propuesta de Reglamento donde, por el momento, no figuran.

Asimismo, es importante destacar que mientras que el artículo 48 de la propuesta de Reglamento sobre los planes nacionales y regionales obliga al Estado miembro a determinar dichas ayudas para la producción agraria, con respecto al régimen específico de abastecimiento, señala que “podrá establecerse” sin obligar al Estado miembro a hacerlo. Para el resto de cuestiones como el tabaco o las ayudas estatales, la propuesta de planes nacionales y regionales no establece ninguna mención.

De este modo, las previsiones específicas que estaban recogidas en el Reglamento 228/2013 (Posei) para las RUP dependerán a partir de ahora de cómo se aborde su inclusión en el plan nacional y regional o de su posible inclusión en una modificación de este Reglamento.

Y todo ello, independientemente de la ausencia en la normativa propuesta de contribuciones financieras específicas para las RUP en el nuevo marco financiero plurianual, que no son objeto de este informe.

## 6. Conclusión

Por todo ello, aunque la propuesta cumple formalmente con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y se refiere a las regiones ultraperiféricas, sin embargo, supone un retroceso y un riesgo para la aplicación del derecho europeo en Canarias puesto que la financiación europea específicamente dirigida a paliar las dificultades de la agricultura en estas regiones no está claramente diferenciada y especificada a nivel europeo, incumpliendo así las previsiones que el artículo 349 del TFUE recoge para las regiones ultraperiféricas como Canarias, al dejar dicha financiación en manos de un eventual reparto estatal en el marco de un plan conjunto con otras políticas.

Parlamento de Canarias, a 3 de noviembre de 2025. Alicia Vanoostende Simili. Socorro Beato Castellano. Luz Reverón González. Luis Alberto Campos Jiménez. Melodie Mendoza Rodríguez.

**11L/CSUE-0164 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las condiciones para la ejecución de la ayuda de la Unión a la política agrícola común para el periodo 2028-2034. COM (2025) 560**

### Presidencia

Emitido dictamen por el Parlamento de Canarias, a instancias de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales, para la verificación del cumplimiento del principio de subsidiariedad por parte de una iniciativa legislativa de la Unión Europea, relativo a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las condiciones para la ejecución de la ayuda de la Unión a la política agrícola común para el periodo 2028-2034 –COM (2025) 560, por la ponencia creada al efecto, al amparo de lo previsto en el artículo 53.5 del Reglamento de la Cámara, con fecha 3 de noviembre de 2025, de conformidad con lo establecido en los artículos 53.6 y 112 del Reglamento del Parlamento, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 3 de noviembre de 2025. EL SECRETARIO GENERAL (*P. D. de la presidenta, Resolución de 30 de junio de 2023, BOPC núm. 8, de 3/7/2023*), Salvador Iglesias Machado.

**DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS Y ACCIÓN EXTERIOR DEL PARLAMENTO DE CANARIAS, A INSTANCIAS DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA DE LAS CORTES GENERALES, PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD POR PARTE DE UNA INICIATIVA LEGISLATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA**

Título del documento:	Iniciativa legislativa UE: Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las condiciones para la ejecución de la ayuda de la Unión a la Política Agrícola Común para el período 2028-2034
Referencia:	COM (2025) 560 final de 16/7/2025 (CSUE-164)

## I. ANTECEDENTES:

1. Con fecha 8 de septiembre de 2025, RE 202510000009595, se recibió en la Cámara correo electrónico de la Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales, por el que, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la citada Comisión Mixta remitió al Parlamento de Canarias, Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las condiciones para la ejecución de la ayuda de la Unión a la política agrícola común para el período 2028-2034 –COM (2025) 560 final, de 16/7/2025, para su conocimiento y, en su caso, emisión de dictamen motivado sobre el eventual incumplimiento del principio de subsidiariedad.

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 53.3 del Reglamento del Parlamento de Canarias, la comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior elaborará y aprobará, dentro del plazo de cuatro semanas fijado por el artículo 6.2 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, modificada por la 24/2009, de 22 de diciembre, para su adaptación al Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007 y por la 38/2010, de 20 de diciembre, para reforzar las funciones asignadas a dicha Comisión Mixta, así como el artículo Octavo. 3 de la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, 628/000006 (S) de 27 de mayo de 2010, sobre reforma de la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de septiembre de 1995, sobre desarrollo de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, para su adaptación a las previsiones del Tratado de Lisboa y de la Ley 24/2009, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales núm. 312 de 8 de junio de 2010, un dictamen en el que quedará fijada la posición de la Cámara y de cuya aprobación se dará cuenta al pleno.

3. La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de julio de 2023, adoptó el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

“17. ASUNTOS TRATADOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

17.1. Asuntos remitidos por la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales.

Acuerdo:

*“La Mesa de la Cámara, con el objeto de determinar, dentro de las posibilidades que al efecto, dispone el artículo 53 del Reglamento de la Cámara, el concreto procedimiento parlamentario que haya de seguirse para la emisión del parecer del Parlamento de Canarias respecto del cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad por parte de las iniciativas legislativas comunitarias europeas que sean objeto de remisión al mismo por las Cortes Generales, en los términos de lo previsto en la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, en su versión modificada para su adaptación al Tratado de Lisboa de 13 de abril de 2007, oída la Junta de Portavoces en su reunión del día de la fecha, acuerda:*

*1. Constituir la ponencia a que se refiere el artículo 53.5 del Reglamento de la Cámara, que, con carácter general y en tanto en cuanto no se determine lo contrario, será la competente para conocer y, en su caso, elaborar para su posterior remisión a las Cortes Generales, dictamen motivado en relación con el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad por parte de los proyectos legislativos europeos que sean objeto de consulta por aquellas”.*

4. Con fecha 13 de octubre de 2025, el Gobierno de Canarias presentó informe a la iniciativa legislativa de la UE sobre Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las condiciones para la ejecución de la ayuda de la Unión a la política agrícola común para el período 2028-2034 –COM (2025) 560 final, de 16/7/2025.

5. Finalmente, la ponencia, en su reunión de 3 de noviembre del año en curso, ha analizado el texto de la iniciativa legislativa europea remitida por la Comisión Mixta para la Unión Europea, a resultas de lo cual, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 53.5 del Reglamento de la Cámara y del acuerdo de la Mesa antes referido, ha elaborado el siguiente:

## II. DICTAMEN

### 1. Base jurídica y tipo de competencia:

Objetivos de la propuesta legislativa:

La propuesta forma parte del amplio paquete para el próximo marco financiero plurianual (MFP) correspondiente al período 2028-2034 presentada por la Comisión el pasado 16 de julio.

Este paquete legislativo va más allá de las modificaciones que se han ido consolidando en los anteriores periodos legislativos y pretende ser mucho más ambicioso para abordar los numerosos retos a los que se enfrenta la Unión en estos momentos. El presupuesto pretende garantizar que las inversiones de la UE estén en consonancia con las prioridades políticas de la Unión. Con carácter general, el presupuesto crece tanto en términos absolutos como en términos relativos al alcanzar la cifra de 1,98 millones de euros, para todo el período, que es equivalente al 1,26% de la Renta Nacional Bruta (RNB) de los Estados miembros. Sin embargo, por lo que respecta a la política agrícola en particular, su participación en el presupuesto, tanto en términos absolutos como relativos, disminuye con respecto al presupuesto vigente.



En cuanto a los ingresos, la Comisión propone nuevos recursos propios, incluyendo ajustes en los ya propuestos en 2023 así como otros nuevos, de modo que las aportaciones de la renta de los Estados se mantengan estables y se disponga, en cualquier caso, de un presupuesto acorde con las necesidades de la UE, incluida la de reembolso de los préstamos de New Generation EU.

En el lado de los gastos, el próximo presupuesto de la UE presentado por la Comisión Europea estará basado en prioridades superando la división en rúbricas para políticas sectoriales, de modo que puedan establecerse complementariedades entre unos y otros programas para financiar prioridades concretas de la Unión.

Dentro de esta nueva estructura, la Comisión agrupa en unos pocos instrumentos, la multiplicidad de fondos actual y propone, en particular, la adopción de un Fondo Europeo para la Cohesión Económica, Social y Territorial, la Agricultura y las Zonas Rurales, la Pesca y el Mar, la Prosperidad y la Seguridad.

Este Fondo agrupará las normas sectoriales específicas relativas a:

- Desarrollo regional (Feder y Fondo de Cohesión).
- Migración, fronteras, seguridad
- Social (FSE+)
- Política Agrícola común
- Política Pesquera y Marítima

- Asimismo, se creará un Mecanismo de la Unión que funcionará como una reserva para aumentar la flexibilidad y hacer frente a crisis imprevistas

Y, todo ello, a través de la elaboración por parte de cada uno de los Estados miembros de planes de colaboración nacional y regional que reunirán catorce fondos existentes y que habrán de ser aprobados por la Comisión Europea y que combinarán fondos de la UE ejecutados por los Estados miembros y por las regiones en un proceso de planificación a medida que debe ser acorde con las prioridades comunes de la Unión.

Estos planes de colaboración han de estar anclados en las prioridades europeas, aunque podrán adaptarse a las necesidades específicas de los Estados miembros y las regiones y ser coherente con los restos determinados a través del Semestre Europeo. La Comisión pretende dar flexibilidad a este nuevo sistema dando cabida a la diversidad de cada Estado miembro a través de flexibilidad para desarrollar capítulos nacionales, sectoriales, pero también regionales y territoriales.

El Reglamento sobre los planes de colaboración nacionales y regionales agrupa los fondos agrícolas preasignados a nivel nacional, es decir el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural establecidos actualmente en los reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo (UE) 2021/2115 y (UE) 2021/2116.

Al contrario que en los marcos anteriores, en este, la Comisión Europea no establece dotaciones individualizadas para todas y cada una de las categorías, sino únicamente las siguientes (artículo 10):

- para las regiones menos desarrolladas, aquellas que tienen un PIB per cápita inferior en un 75% a la media europea tomando como referencia los años 2021, 2021 y 2023 (sin embargo, no para las regiones en transición ni para las más desarrolladas). Recordemos que, con los datos disponibles en este momento, Canarias es una de esas regiones puesto que, según los datos provisionales de 2022 y 2023, el PIB per cápita se situó en el 68%, y el 71%.
- para determinados tipos de ayudas agrarias entre los que no se encuentra el Posei.
- para cuestiones relacionadas con migración, asilo e integración
- para el Mecanismo de reserva de la Unión
- para Interreg.

En concreto, el artículo 10, apartado 2, letra a) establece que al menos 295.700 millones de euros se destinarán a las intervenciones de la PAC a que se refiere el artículo 35, apartado 1, letras a) a k), y apartado 10, y a las intervenciones recogidas en el artículo 35, apartado 11.

Del análisis de dicho artículo 35, apartado 1, se extrae que los tipos de ayuda que entran dentro de esa financiación ya asignada son los relativos ayudas a la renta, cultivo de algodón, zonas con desventajas específicas, pequeños agricultores, inversiones, o establecimiento de jóvenes agricultores, pero queda excluida la letra o) referida a las intervenciones en las regiones ultraperiféricas a que se refieren los artículos 46, 47 y 48.

En particular, esta propuesta de Reglamento por el que se establecen las condiciones para la ejecución de la ayuda de la Unión a la política agrícola común para el periodo 2028-2034 se plantea como una propuesta muy simplificada con respecto a la legislación existente, dando un amplio margen a los Estados miembros para cumplir con las recomendaciones de la PAC y las directivas estratégicas de la misma en sus respectivos planes nacionales y regionales (en el marco de los requisitos recogidos en los artículos 6 a 20 de la propuesta analizada). En cualquier caso, las intervenciones posibles de la PAC están recogidas en el artículo 5 de la propuesta que, incluye dentro de los tipos de intervenciones de la PAC las intervenciones en las regiones ultraperiféricas (apartado 1, letra o).

El apartado 2 de este artículo 5 reitera que las intervenciones a que se refiere el apartado anterior, en las letras a) a k) se considerarán intervenciones de ayuda a la renta que se financiarán con cargo al fondo, estableciendo un paralelismo con lo dispuesto en los artículos 10 y 35 de la propuesta de Reglamento sobre los planes nacionales y regionales.

### **b) Ámbito competencial**

De conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra d), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en el ámbito de la agricultura y la pesca la competencia es compartida entre la UE y los Estados miembros, salvo en lo relativo a la conservación de los recursos biológicos marinos.

El artículo 38 del TFUE faculta a la Unión para definir y aplicar una política agrícola común. El artículo 39 del TFUE establece los objetivos de la PAC, que incluyen incrementar la productividad agrícola, garantizar un nivel de vida equitativo para la población agrícola, estabilizar los mercados, garantizar la seguridad de los abastecimientos y asegurar al consumidor estos suministros a precios razonables.

Por ello, la base jurídica de esta propuesta es el artículo 43, apartado 2, del TFUE que otorga competencias al Parlamento Europeo y al Consejo para adoptar las disposiciones que resulten necesarias para la consecución de los objetivos de la política común de agricultura.

De conformidad con el artículo 148, 1, 7.ª de la Constitución española, las comunidades autónomas pueden asumir competencias en materia de agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.

Por su parte, el artículo 130 del Estatuto de Autonomía establece que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materia de agricultura y ganadería, respetando lo establecido por el Estado en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 149.1. 13.ª, 16.ª y 23.ª de la Constitución.

La iniciativa, por tanto, afecta a competencias estatales y autonómicas. Sin embargo, los fondos europeos destinados a la política agrícola señalados en esta iniciativa legislativa no están destinados a sustituir las políticas públicas aplicadas por los Estados miembros y regiones en esta materia, sino a cofinanciar las acciones que los Estados y las regiones efectúen al respecto, manteniendo, por tanto, la Comunidad Autónoma de Canarias todas sus competencias en materia de realización y ejecución de dichos planes y programas específicos.

En particular, la propuesta que se informa, consideramos que no menoscaba las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias. No obstante, supone un retroceso y un riesgo para la aplicación del derecho europeo en Canarias puesto que la financiación europea específicamente dirigida a paliar las dificultades de la agricultura en estas regiones no está claramente diferenciada y especificada a nivel europeo, sino que se deja en manos de un reparto estatal en el marco de un plan conjunto con otras políticas. No se comprende la omisión de las regiones ultraperiféricas que hasta la fecha han recibido siempre un tratamiento singular y específico en la normativa agrícola europea.

### **2. Análisis de las exigencias derivadas del principio de subsidiariedad**

Tal y como determina el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (versión consolidada), en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva la Unión intervendrá solo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.

Por otra parte, los criterios que han sido definidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para proceder al examen de un acto comunitario desde la óptica del respeto al principio de subsidiariedad son dos: 1) determinar, en primer lugar, si la competencia a la que recurre el legislador comunitario es exclusiva de la Unión y, a continuación, en el caso en que no fuera una competencia exclusiva, 2) determinar si el objetivo de la acción adoptada puede lograrse mejor a nivel comunitario. Al primer criterio ya se ha respondido, de manera que procede referirse al segundo.

El Protocolo n.º 2, publicado en el *Diario Oficial de la Unión Europea*, n.º 115 de 9 de mayo de 2008 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, establece en su artículo 5 lo siguiente:

*“Los proyectos de actos legislativos se motivarán en relación con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Todo proyecto de acto legislativo debería incluir una ficha con pormenores que permitan evaluar el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Esta ficha debería incluir elementos que permitan evaluar el impacto financiero y, cuando se trate de una Directiva, sus efectos en la normativa que han de desarrollar los Estados miembros, incluida, cuando proceda, la legislación regional. Las razones que justifiquen la conclusión de que un objetivo de la Unión puede alcanzarse mejor en el plano de esta se sustentarán en indicadores cualitativos y, cuando sea posible, cuantitativos. Los proyectos de actos legislativos tendrán debidamente en cuenta la necesidad de que cualquier carga, tanto financiera como administrativa, que recaiga sobre la Unión, los Gobiernos nacionales, las autoridades regionales o locales, los agentes económicos o los ciudadanos sea lo más reducida posible y proporcional al objetivo que se desea alcanzar”.*

El principio de subsidiariedad establece que solo podrán tomarse medidas a nivel de la UE cuando sean más eficaces que la actuación individual de los Estados miembros a nivel nacional, regional o local. El mecanismo de control de la subsidiariedad, que se aplica en los ámbitos de competencia compartida entre la UE y los Estados miembros, permite a los parlamentos nacionales manifestar su posición cuando consideren que una iniciativa legislativa de la UE no respeta este principio, posición que ha de ser tenida en cuenta por la Comisión Europea.

En lo que a la presente iniciativa se refiere, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la competencia en materia de agricultura es compartida entre la Unión y los Estados miembros, y establece una política agrícola común con objetivos comunes y una aplicación común.

En el actual modelo de aplicación, la Unión ha pasado a establecer los parámetros políticos básicos (objetivos de la PAC, tipos generales de intervención y requisitos básicos), al tiempo que los Estados miembros asumen mayores responsabilidades y son más transparentes en cuanto a la manera en que cumplen los objetivos y logran las metas acordadas. Sobre esta base, la propuesta de PAC posterior a 2027 sigue asegurando unas condiciones de competencia equitativas entre los Estados miembros y los agricultores dentro del mercado único, garantiza la seguridad alimentaria en toda la Unión y hace frente a los retos transfronterizos y mundiales.

En consonancia con la visión de la agricultura y la alimentación y teniendo en cuenta la gran diversidad del entorno agrícola de la Unión y sus características físicas, un enfoque único no es adecuado para obtener los resultados deseados. Un mayor nivel de integración entre las diferentes políticas y de flexibilidad para los Estados miembros permitirá tener más en cuenta las condiciones y necesidades locales. Los Estados miembros tendrán que adaptar las intervenciones de la PAC para maximizar su contribución a los objetivos de la Unión, en consonancia con las recomendaciones de la Comisión.

La propuesta, en su forma actual, aunque es formalmente subsidiaria en su aplicación a Canarias, no atiende convenientemente a las singularidades de esta región en su condición de ultraperiférica contemplada en el artículo 349 TFUE:

En lo que al principio de proporcionalidad de la iniciativa legislativa se refiere, los retos económicos, medioambientales y sociales a los que se enfrentan el sector agrícola y las zonas rurales de la UE requieren una respuesta sustancial y un esfuerzo continuo que haga justicia a la dimensión europea de esos retos. El marco político de la PAC va acompañado de un presupuesto robusto y equilibrado con cargo al fondo de colaboración nacional y regional (FCNR). El incremento de la capacidad de elección que se otorga a los Estados miembros a la hora de seleccionar y adaptar los instrumentos disponibles en el marco de la PAC para cumplir los objetivos comunes de la UE es proporcional al nivel de actuación requerido ante las necesidades y los retos, sin perjuicio de la ya mencionada omisión de la singularidad que ostentan las RUP en materia agrícola que debe ser subsanada.

### **3. Carga financiera y administrativa**

No se acompaña en la documentación remitida por las Cortes Generales un análisis de las eventuales cargas, si es que las hay, para las autoridades nacionales, regionales o locales, agentes económicos o ciudadanos, derivadas de la nueva regulación, con lo cual no es posible pronunciarse al respecto.

### **4. Consideración de los aspectos locales y regionales en la consulta y análisis del impacto**

El Parlamento de Canarias no ha sido objeto de consulta previa a la elaboración de la propuesta que hoy se somete a su valoración en el marco del mecanismo de control del principio de subsidiariedad. Tampoco nos consta que lo haya sido el Gobierno de Canarias.

### **5. Otras observaciones**

La iniciativa legislativa incide en medidas específicas adoptadas en el marco del artículo 349 del TFUE que afectan a Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea.

Para el periodo 2021-2027 la regulación europea en materia de política agrícola se encuentra recogida, con carácter general, en tres reglamentos:

A partir del 1 de enero de 2023, la última reforma de la PAC contempla los siguientes tres reglamentos de base aplicables a esta política, uno sobre las normas de financiación y de gestión; un segundo sobre los planes estratégicos de la PAC que aborda las medidas de ayudas a la renta, pero también las ayudas al desarrollo rural, reforzando así los vínculos entre el primer y el segundo pilar; y, por último, una modificación del Reglamento sobre la organización común de mercados:

- Reglamento (UE) 2021/2116, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la PAC y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1306/2013;
- Reglamento (UE) 2021/2115, por el que se establecen normas sobre la ayuda a los planes estratégicos nacionales de la PAC y se derogan los reglamentos (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1307/2013;
- Reglamento (UE) 2021/2117, que modifica los reglamentos (UE) n.º 1308/2013, sobre la organización común de los mercados agrícolas; (UE) n.º 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas; (UE) n.º 251/2014, sobre las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados; y (UE) n.º 228/2013, por el que se establecen medidas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la UE.

Todos ellos establecen disposiciones específicas para las regiones ultraperiféricas (RUP); en particular, el Reglamento (UE) 2021/2115 sobre los planes estratégicos nacionales de la PAC que contempla amplias excepciones para las RUP, que tienen sus regímenes propios a través de los denominados Posei.

El Reglamento (UE) 2021/2116 precisa en su artículo 5 que el FEAGA financiará la contribución de la Unión a las medidas específicas en el sector agrícola en favor de las RUP de la Unión establecidas en el Reglamento (UE) n.º 228/2013. Por consiguiente, en el periodo actual se recoge expresamente que las normas relativas a la financiación agrícola europea serán de aplicación a las medidas del Posei y se hace una referencia expresa al Reglamento 228/2013 donde figuran los montantes presupuestarios que se aplican al Posei de cada uno de Canarias, por un lado, y de las demás RUP, por otro. Además, el artículo 65 de este Reglamento precisa que el sistema integrado de gestión y control se aplicará también a las medidas de apoyo a la producción local previstas en el Posei.

A su vez, el Reglamento 2021/2115 sobre la ayuda a los planes estratégicos de la PAC que es el elemento central de la aplicación de la PAC para 2023-2027, establece que el Reglamento por el que se aplica el Posei queda fuera del ámbito de aplicación del mismo, salvo las disposiciones que se mencionen explícitamente. Esta mención específica está recogida en el artículo 149 del mismo que establece una inaplicación total del título III, capítulo II, que desarrolla las intervenciones en forma de pagos directos (las que se aplican el resto de la Unión, salvo en las RUP y –con alguna excepción– en algunas islas griegas mencionadas en el Reglamento (UE) n.º 229/2013). Este mismo artículo establece qué disposiciones del resto del título III se aplican a las RUP, básicamente, definiciones, conceptos generales, pero también determinados requisitos comunes y normas de condicionalidad no vinculadas a los planes estratégicos, así como determinadas singularidades en el ámbito de determinadas ayudas financieras de la Unión a sectores específicos, que están recogidas en el capítulo III del título III y que sí se aplican a las RUP.

En conclusión, en el periodo actual, el Posei es reconocido expresamente como el régimen de aplicación de las medidas de ayuda a la renta en las regiones ultraperiféricas. La legislación agrícola europea se remite para ello al Reglamento por el que se establece el Posei y el Plan estratégico de la PAC español recoge igualmente esta diferenciación. Por lo que respecta a las medidas de desarrollo rural, estas son de aplicación en Canarias a través de las normas generales de aplicación de las mismas en España y de un capítulo específico dentro del Plan Estratégico español.

En cuanto a la propuesta para el futuro marco 2028-2034, como hemos venido señalando, las disposiciones específicas que estaban recogidas en prácticamente todos los Fondos que son agrupados por la propuesta de los Marcos Nacionales y Regionales han desaparecido en sus Reglamentaciones de desarrollo específicos, como es el caso de esta propuesta de Reglamento por la que se establecen las condiciones para la ejecución de la ayuda de la Unión a la política agraria común.

Estas disposiciones específicas se han sustituido por un capítulo específico dedicado a las regiones ultraperiféricas, en la propuesta de Reglamento sobre los planes nacionales y regionales, que contiene tres artículos 46, 47 y 48. Este capítulo obliga a nuestra Administración nacional a incluir todas esas disposiciones específicas dentro del plan nacional y regional que España habrá de presentar y negociar con la Comisión Europea.

Así, el artículo 46 señala que España habrá de preparar, como parte de su plan, medidas para hacer frente a las limitaciones permanentes y estructurales de las regiones ultraperiféricas de la Unión, que obstaculizan gravemente su desarrollo, tal como se reconoce en el artículo 349 del TFUE para abordar los objetivos siguientes:

1) seguridad alimentaria, la vivienda, el transporte sostenible, la gestión del agua y los residuos, la energía, el empleo y la movilidad laboral –en particular, de los jóvenes–, la descarbonización, la circularidad, la educación y las capacidades, la inclusión social, la migración, la resiliencia frente al cambio climático y la adaptación a este, la protección del medio ambiente, la economía azul, el acceso a la asistencia sanitaria, la energía, el transporte sostenible y la conectividad digital, y el desarrollo económico, que incluya una economía azul sostenible y diversificada (es decir, los ámbitos recogidos actualmente en el Feder, el FSE+, el programa LIFE, el Fondo de Asilo, Migración e Integración entre otros más).

2) garantizar el suministro de productos esenciales para el consumo, la transformación o su utilización como insumos agrícolas (es decir, lo que actualmente está recogido en el Régimen Específico de Abastecimiento –REA–);

3) asegurar el futuro y el desarrollo a largo plazo de la agricultura, la pesca y la acuicultura (es decir, lo que ahora está recogido en el Posei y en las normas específicas para pesca y acuicultura).

A su vez, los artículos 47 y 48 desarrollan, respectivamente, las cuestiones relacionadas con el REA y con el apoyo específico a la producción y transformación agrícolas locales (resto del Posei).

De este modo, las previsiones específicas que estaban recogidas en el Posei para las RUP dependerán a partir de ahora de cómo se aborde su inclusión en el plan nacional y regional.

Y todo ello, independientemente de la ausencia en la normativa propuesta de contribuciones financieras específicas para las RUP en el nuevo marco financiero plurianual, que no son objeto de este informe.

La propuesta adolece de falta de concreción sobre las medidas de la PAC a aplicar en las RUP, esto es, de las medidas recogidas en el artículo 5.1, letra (o) de la propuesta.

El artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) impone a las instituciones europeas la adopción de medidas específicas para paliar las limitaciones estructurales que dificultan el desarrollo de las regiones en comparación con la Europa continental, limitaciones como la lejanía, la insularidad, la escasa superficie, el relieve y el clima desfavorables y la dependencia económica respecto a un número reducido de productos. Esta propuesta, en conjunción con la ya citada propuesta de Reglamento de planes NRP, tiene como efecto la reducción



de las medidas de la PAC en las RUP, recogidas hasta la fecha en el Posei, a un mero capítulo de los futuros planes NRP, en los que además queda mezclado con el resto de las medidas para estas regiones; y ello, además, sin que se derogue explícitamente el Reglamento Posei (Reglamento (UE) n.º 228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo), que no obstante hay que entender implícitamente derogado, puesto que resulta de imposible aplicación si estas propuestas resultan aprobadas.

En consecuencia, mediante esta propuesta, en conjunción con el resto del paquete de propuestas legislativas del que forma parte y entre las que se encuentran el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo Europeo para la cohesión económica, social y territorial, agrícola y rural, pesquero y marítimo, y para la cohesión social y territorial para el periodo 2028-2034 y se modifican el Reglamento (UE) 2023/955 y el Reglamento (UE, Euroatom) 2024/2509 (Reglamento de planes NRP en lo sucesivo), se pretende eludir las obligaciones que impone el artículo 349 del TFUE, lo que supone un incumplimiento de facto de este artículo. Por ello, debe reformarse esta propuesta y las restantes del paquete legislativo de tal forma que se mantenga en vigor el actual Reglamento del Posei.

El artículo 35.2 aclara que no se aplican a las RUP (a) ayuda decreciente a la renta en función de la superficie, (b) la ayuda a la renta asociada a la producción, (c) el pago específico para el algodón y (g) los pagos a pequeños agricultores: en consecuencia, las medidas para las regiones ultraperiféricas (o) siguen sustituyendo el apoyo a la producción, mientras que en las medidas para inversión y en las derivadas de la OCM se continúa aplicando el mismo régimen que para el resto de Europa. No obstante, se echa de menos una norma que permita mayores tasas de cofinanciación para las RUP en estos últimos instrumentos de ayuda.

Tampoco se da continuidad el resto de adaptaciones a las políticas comunes que figuran en la actualidad en el Reglamento 228/2013. En consecuencia, la propuesta debería incluir disposiciones que permitan mayores tasas de cofinanciación en las ayudas de desarrollo rural y que debe darse continuidad a las adaptaciones de la PAC a las RUP actualmente en vigor.

## 6. Conclusión

Por todo ello, si bien la propuesta recoge un cumplimiento formal de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, sin embargo, no recoge contribuciones financieras específicas para las RUP en el nuevo marco financiero plurianual, lo que obliga a nuestra Administración nacional a incluir todas esas disposiciones específicas dentro del plan nacional y regional que España habrá de presentar y negociar con la Comisión Europea. Asimismo, la iniciativa, adolece de falta de concreción sobre las medidas de la PAC a aplicar en las RUP, y en todo caso, tiene como efecto la reducción de las medidas de la PAC en estas regiones, recogidas hasta la fecha en el Posei. La consecuencia es que se pretende eludir las obligaciones que impone el artículo 349 del TFUE, lo que supone un incumplimiento *de facto* de este artículo.

Por ello, debe reformarse esta propuesta y las restantes del paquete legislativo de tal forma que se mantenga en vigor el actual Reglamento del Posei. Asimismo, se considera conveniente la elaboración de una norma que permita mayores tasas de cofinanciación para las RUP en estos últimos instrumentos de ayuda y se deberían incluir disposiciones que permitan mayores tasas de cofinanciación en las ayudas de desarrollo rural y que debe darse continuidad a las adaptaciones de la PAC a las RUP actualmente en vigor.

Parlamento de Canarias, a 3 de noviembre de 2025. Alicia Vanoostende Simili. Socorro Beato Castellano. Luz Reverón González. Luis Alberto Campos Jiménez. Melodie Mendoza Rodríguez.

**11L/CSUE-0165 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en particular para la cooperación territorial europea (Interreg) y el Fondo de Cohesión como parte del Fondo establecido en el Reglamento (UE) [...] [Reglamento sobre los planes CNR], y por el que se establecen las condiciones para la ejecución del apoyo de la Unión al desarrollo regional para el periodo 2028-2034. COM (2025) 552 final**

### Presidencia

Emitido dictamen por el Parlamento de Canarias, a instancias de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales, para la verificación del cumplimiento del principio de subsidiariedad por parte de una iniciativa legislativa de la Unión Europea, relativo a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en particular para la cooperación territorial europea (Interreg) y el Fondo de Cohesión como parte del Fondo establecido en el Reglamento (UE) [...] [Reglamento sobre los planes CNR], y por el que se establecen las condiciones para la ejecución del apoyo de la Unión al desarrollo regional para el periodo 2028-2034. COM (2025) 552 final, por la ponencia creada al efecto, al amparo de lo previsto en el artículo 53.5 del Reglamento de la Cámara, con fecha 3 de noviembre de 2025, de conformidad con lo establecido en los artículos 53.6 y 112 del Reglamento del Parlamento, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 3 de noviembre de 2025. EL SECRETARIO GENERAL (P. D. de la presidenta, Resolución de 30 de junio de 2023, BOPC núm. 8, de 3/7/2023), Salvador Iglesias Machado.

**DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS Y ACCIÓN EXTERIOR DEL PARLAMENTO DE CANARIAS, A INSTANCIAS DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA DE LAS CORTES GENERALES, PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD POR PARTE DE UNA INICIATIVA LEGISLATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA**

<b>Título del documento:</b>	Iniciativa legislativa UE: Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en particular para la cooperación territorial europea (Interreg) y el fondo de cohesión como parte del fondo establecido en el Reglamento (UE) [...] [reglamento sobre los planes CNR] y por el que se establecen las condiciones para la ejecución del apoyo de la Unión al desarrollo regional para el período 2028-2034.
<b>Referencia:</b>	COM (2025) 552 final de 16/7/2025 (CSUE-165)

**I. ANTECEDENTES:**

1. Con fecha 8 de septiembre de 2025, RE 202510000009596, se recibió en la Cámara correo electrónico de la Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales, por el que, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la citada Comisión Mixta remitió al Parlamento de Canarias, Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en particular para la cooperación territorial europea (Interreg) y el Fondo de Cohesión como parte del Fondo establecido en el Reglamento (UE) [...] [Reglamento sobre los planes CNR], y por el que se establecen las condiciones para la ejecución del apoyo de la Unión al desarrollo regional para el período 2028-2034 –COM (2025) 552 final, de 16/7/2025, para su conocimiento y, en su caso, emisión de dictamen motivado sobre el eventual incumplimiento del principio de subsidiariedad.

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 53.3 del Reglamento del Parlamento de Canarias, la comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior elaborará y aprobará, dentro del plazo de cuatro semanas fijado por el artículo 6.2 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, modificada por la 24/2009, de 22 de diciembre, para su adaptación al Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007 y por la 38/2010, de 20 de diciembre, para reforzar las funciones asignadas a dicha Comisión Mixta, así como el artículo Octavo. 3 de la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, 628/000006 (S) de 27 de mayo de 2010, sobre reforma de la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de septiembre de 1995, sobre desarrollo de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, para su adaptación a las previsiones del Tratado de Lisboa y de la Ley 24/2009, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales núm. 312 de 8 de junio de 2010, un dictamen en el que quedará fijada la posición de la Cámara y de cuya aprobación se dará cuenta al pleno.

3. La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de julio de 2023, adoptó el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

“17. ASUNTOS TRATADOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

17.1. Asuntos remitidos por la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales.

Acuerdo:

*“La Mesa de la Cámara, con el objeto de determinar, dentro de las posibilidades que al efecto, dispone el artículo 53 del Reglamento de la Cámara, el concreto procedimiento parlamentario que haya de seguirse para la emisión del parecer del Parlamento de Canarias respecto del cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad por parte de las iniciativas legislativas comunitarias europeas que sean objeto de remisión al mismo por las Cortes Generales, en los términos de lo previsto en la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, en su versión modificada para su adaptación al Tratado de Lisboa de 13 de abril de 2007, oída la Junta de Portavoces en su reunión del día de la fecha, acuerda:*

*1. Constituir la ponencia a que se refiere el artículo 53.5 del Reglamento de la Cámara, que, con carácter general y en tanto en cuanto no se determine lo contrario, será la competente para conocer y, en su caso, elaborar para su posterior remisión a las Cortes Generales, dictamen motivado en relación con el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad por parte de los proyectos legislativos europeos que sean objeto de consulta por aquellas”.*

4. Con fecha 13 de octubre de 2025, el Gobierno de Canarias presentó informe a la iniciativa legislativa de la UE sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en particular para la cooperación territorial europea (Interreg) y el Fondo de Cohesión como parte del Fondo establecido en el Reglamento (UE) [...] [Reglamento sobre los planes CNR], y por el que se establecen las condiciones para la ejecución del apoyo de la Unión al desarrollo regional para el período 2028-2034 –COM (2025) 552 final, de 16/7/2025.

5. Finalmente, la ponencia, en su reunión de 3 de noviembre del año en curso, ha analizado el texto de la iniciativa legislativa europea remitida por la Comisión Mixta para la Unión Europea, a resultas de lo cual, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 53.5 del Reglamento de la Cámara y del acuerdo de la Mesa antes referido, ha elaborado el siguiente:

## II. DICTAMEN

### 1. Base jurídica y tipo de competencia:

Objetivos de la propuesta legislativa:

La propuesta forma parte del amplio paquete para el próximo marco financiero plurianual (MFP) correspondiente al período 2028-2034, presentada por la Comisión el pasado 16 de julio.

Este paquete legislativo va más allá de las modificaciones que se han ido consolidando en los anteriores periodos legislativos y pretende ser mucho más ambicioso para abordar los numerosos retos a los que se enfrenta la Unión en estos momentos. El presupuesto pretende garantizar que las inversiones de la UE estén en consonancia con las prioridades políticas de la Unión. Con carácter general, el presupuesto crece tanto en términos absolutos como en términos relativos al alcanzar la cifra de 1,98 millones de euros, para todo el período, que es equivalente al 1,26% de la Renta Nacional Bruta (RNB) de los Estados miembros.

En cuanto a los ingresos, la Comisión propone nuevos recursos propios, incluyendo ajustes en los ya propuestos en 2023 así como otros nuevos, de modo que las aportaciones de la renta de los Estados se mantengan estables y se disponga, en cualquier caso, de un presupuesto acorde con las necesidades de la UE, incluida la de reembolso de los préstamos de New Generation EU.

En el lado de los gastos, el próximo presupuesto de la UE presentado por la Comisión Europea estará basado en prioridades superando la división en rúbricas para políticas sectoriales, de modo que puedan establecerse complementariedades entre unos y otros programas para financiar prioridades concretas de la Unión.

Dentro de esta nueva estructura, la Comisión agrupa en unos pocos instrumentos, la multiplicidad de fondos actual y propone, en particular, la adopción de un Fondo Europeo para la Cohesión Económica, Social y Territorial, la Agricultura y las Zonas Rurales, la Pesca y el Mar, la Prosperidad y la Seguridad.

Este Fondo agrupará las normas sectoriales específicas relativas a:

- Desarrollo regional (Feder y Fondo de Cohesión).
- Migración, fronteras, seguridad
- Social (FSE+)
- Política Agrícola común
- Política Pesquera y Marítima
- Asimismo, se creará un Mecanismo de la Unión que funcionará como una reserva para aumentar la flexibilidad y hacer frente a crisis imprevistas

Y, todo ello, a través de la elaboración por parte de cada uno de los Estados miembros de planes de colaboración nacional y regional que reunirán catorce fondos existentes y que habrán de ser aprobados por la Comisión Europea y que combinarán fondos de la UE ejecutados por los Estados miembros y por las regiones en un proceso de planificación a medida que debe ser acorde con las prioridades comunes de la Unión.

Estos planes de colaboración han de estar anclados en las prioridades europeas, aunque podrán adaptarse a las necesidades específicas de los Estados miembros y las regiones y ser coherente con los restos determinados a través del Semestre Europeo. La Comisión pretende dar flexibilidad a este nuevo sistema dando cabida a la diversidad de cada Estado miembro a través de flexibilidad para desarrollar capítulos nacionales, sectoriales, pero también regionales y territoriales.

Al contrario que en los marcos anteriores, en este, la Comisión Europea no establece dotaciones individualizadas para todas y cada una de las categorías, sino únicamente las siguientes (artículo 10):

- para las regiones menos desarrolladas, aquellas que tienen un PIB per cápita inferior en un 75% a la media europea tomando como referencia los años 2021, 2021 y 2023 (sin embargo, no para las regiones en transición ni para las más desarrolladas). Recordemos que, con los datos disponibles en este momento, Canarias es una de esas regiones puesto que, según los datos provisionales de 2022 y 2023, el PIB per cápita se situó en el 68%, y el 71%.
- para determinados tipos de ayudas agrarias entre los que no se encuentra el Posei.
- para cuestiones relacionadas con migración, asilo e integración.
- para el Mecanismo de reserva de la Unión.
- para Interreg.

Por consiguiente, el objetivo concreto de esta propuesta de Reglamento sobre el Feder, el Fondo de Cohesión e Interreg es abordar los desequilibrios regionales y apoyar el desarrollo de las regiones menos desarrolladas (artículo 176 del TFUE) apoyando las reformas e invirtiendo en el desarrollo social y económico de todas las regiones y ciudades de la UE, así como mejorando la cooperación territorial (especialmente a través del plan Interreg), así como la regulación específica del Fondo de Cohesión, que tiene por objeto apoyar las inversiones y las reformas en el ámbito del medio ambiente y el transporte en los Estados miembros con menor PIB per cápita (artículo 177).

### b) Ámbito competencial

Los artículos 175, 177 y 178 del TFUE constituyen la base jurídica de la política de cohesión económica, social y territorial y son los que se aplican a esta propuesta, así como el artículo 349 de la misma norma.

Así, por lo que respecta a la cohesión económica, social y territorial, el artículo 149 de la Constitución española concede competencia exclusiva al Estado en lo relativo a las “*Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica*” (apartado 1.13.ª). A su vez, el artículo 114 del Estatuto de Autonomía de Canarias, señala

que “*corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materia de planificación y promoción de la actividad económica en Canarias, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 149.1. 11.ª y 13.ª de la Constitución*”. En particular, dispone el apartado 3 de este artículo que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias “*el desarrollo y la gestión de la planificación general de la actividad económica*”.

Por otro lado, el artículo 175 del Estatuto señala que corresponde en exclusiva a la Comunidad Autónoma de Canarias la gestión, ejecución y, en su caso, la planificación de los fondos europeos destinados a Canarias, en especial de aquellos aprobados en aplicación de criterios de convergencia o derivados de la condición ultraperiférica de Canarias; y el artículo 197 de la misma norma señala, en su apartado 2, que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias “*la gestión de los fondos europeos en materias de su competencia*”.

La iniciativa, por tanto, afecta a competencias estatales y autonómicas. Sin embargo, los Fondos Europeos señalados en esta iniciativa legislativa y, en particular, los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos no están destinados a sustituir las políticas públicas aplicadas por los Estados miembros y regiones en materia de planificación económica, sino a cofinanciar las acciones que los Estados y las regiones efectúen al respecto, manteniendo, por tanto, la Comunidad Autónoma de Canarias todas sus competencias en materia de realización y ejecución de dichos planes y programas específicos.

En particular, la propuesta que se informa, se considera que no menoscaba las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias. A pesar de ello, supone un retroceso y un riesgo para la aplicación del derecho europeo en Canarias puesto que la financiación europea específicamente dirigida a paliar las dificultades de estas regiones no está claramente diferenciada y especificada a nivel europeo, sino que se deja en manos de un reparto estatal en el marco de un plan conjunto con otras políticas.

## **2. Análisis de las exigencias derivadas del principio de subsidiariedad**

Tal y como determina el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (versión consolidada), en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva la Unión intervendrá solo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.

Por otra parte, los criterios que han sido definidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para proceder al examen de un acto comunitario desde la óptica del respeto al principio de subsidiariedad son dos: 1) determinar, en primer lugar, si la competencia a la que recurre el legislador comunitario es exclusiva de la Unión y, a continuación, en el caso en que no fuera una competencia exclusiva, 2) determinar si el objetivo de la acción adoptada puede lograrse mejor a nivel comunitario. Al primer criterio ya se ha respondido, de manera que procede referirse al segundo.

El Protocolo n.º 2, publicado en el *Diario Oficial de la Unión Europea*, n.º 115 de 9 de mayo de 2008 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, establece en su artículo 5 lo siguiente:

*“Los proyectos de actos legislativos se motivarán en relación con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Todo proyecto de acto legislativo debería incluir una ficha con pormenores que permitan evaluar el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Esta ficha debería incluir elementos que permitan evaluar el impacto financiero y, cuando se trate de una Directiva, sus efectos en la normativa que han de desarrollar los Estados miembros, incluida, cuando proceda, la legislación regional. Las razones que justifiquen la conclusión de que un objetivo de la Unión puede alcanzarse mejor en el plano de esta se sustentarán en indicadores cualitativos y, cuando sea posible, cuantitativos. Los proyectos de actos legislativos tendrán debidamente en cuenta la necesidad de que cualquier carga, tanto financiera como administrativa, que recaiga sobre la Unión, los Gobiernos nacionales, las autoridades regionales o locales, los agentes económicos o los ciudadanos sea lo más reducida posible y proporcional al objetivo que se desea alcanzar”.*

El principio de subsidiariedad establece que solo podrán tomarse medidas a nivel de la UE cuando sean más eficaces que la actuación individual de los Estados miembros a nivel nacional, regional o local. El mecanismo de control de la subsidiariedad, que se aplica en los ámbitos de competencia compartida entre la UE y los Estados miembros, permite a los parlamentos nacionales manifestar su posición cuando consideren que una iniciativa legislativa de la UE no respeta este principio, posición que ha de ser tenida en cuenta por la Comisión Europea.

En lo que a la presente iniciativa se refiere, se ha de remarcar que el Feder y el Fondo de Cohesión promueven la integración y la cooperación entre los Estados miembros y reducen las disparidades regionales dentro de los Estados miembros y entre ellos, también entre las zonas urbanas, rurales, costeras o escasamente pobladas y entre el continente europeo y las regiones ultraperiféricas e islas. La financiación de la política de cohesión ha atraído inversiones que no se habrían materializado con el mismo alcance, ambición y rapidez si la financiación de la UE no hubiese estado disponible. Por lo tanto, los Estados miembros no pueden alcanzar por sí solos los objetivos de la propuesta y el apoyo de la Unión crea valor añadido.



La actuación a escala de la UE aporta un valor añadido a la acción a escala nacional. La financiación de la política de cohesión para el período 2014-2020 fue significativa, alcanzando casi el 13% de la inversión pública total en la UE y el 51% en los países de cohesión. Los estudios económicos constatan reiteradamente que la política de cohesión contribuye positivamente al crecimiento económico regional, incluso a nivel local. Además, las simulaciones macroeconómicas señalan un aumento global del PIB de la UE derivado de la inversión en la política de cohesión de casi el 1% para el año de mayor incidencia. Los beneficios son especialmente significativos en las regiones menos desarrolladas, donde las previsiones del PIB para el final del período de ejecución superan a las previsiones en ausencia de la política de cohesión. Las regiones más desarrolladas muestran un impacto menor a largo plazo, aunque positivo, debido a los efectos indirectos (beneficios que se distribuyen entre regiones). Estos efectos indirectos representan alrededor del 15% del impacto total del PIB de la UE, con la mayor proporción (45%) en las regiones desarrolladas.

Además, las decisiones estratégicas del Reglamento son proporcionadas, ya que los fondos se ejecutarán en régimen de gestión compartida, es decir, los programas no son gestionados directamente por la Comisión Europea, sino que se aplican en asociación con los Estados miembros. Consecuentemente, se aprecia que la iniciativa cumple formalmente con el principio de subsidiariedad.

En lo que al principio de proporcionalidad se refiere, la propuesta se ajusta a este y no excede de lo necesario para alcanzar sus objetivos pues se enmarca en el ámbito de actuación para reforzar la cohesión económica, social y territorial. Los objetivos y el apoyo de la Unión correspondiente son proporcionados a lo que el instrumento pretende lograr. La propuesta también tiene por objeto intensificar los esfuerzos de simplificación anteriores, alcanzando una mayor unificación y consolidación de las normas.

### **3. Carga financiera y administrativa**

No se acompaña en la documentación remitida por las Cortes Generales un análisis de las eventuales cargas, si es que las hay, para las autoridades nacionales, regionales o locales, agentes económicos o ciudadanos, derivadas de la nueva regulación, con lo cual no es posible pronunciarse al respecto.

### **4. Consideración de los aspectos locales y regionales en la consulta y análisis del impacto**

El Parlamento de Canarias no ha sido objeto de consulta previa a la elaboración de la propuesta que hoy se somete a su valoración en el marco del mecanismo de control del principio de subsidiariedad. Tampoco nos consta que lo haya sido el Gobierno de Canarias.

### **5. Otras observaciones**

La iniciativa legislativa incide en medidas específicas adoptadas en el marco del artículo 349 del TFUE que afectan a Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea.

- por lo que respecta a la concentración temática, el artículo 4 del Reglamento establece una concentración mucho más favorable para Canarias, independientemente de su clasificación como región más o menos desarrollada y excluye por completo de la misma a la asignación adicional específica. En la propuesta aquí informada, el concepto de concentración temática del Feder desaparece y es sustituido por el de objetivos generales y objetivos específicos de los planes nacionales y regionales (artículos 2 y 3 de la propuesta de Reglamento que figura en el COM (2025) 565.

- por lo que respecta a las excepciones para las RUP en las inversiones excluidas del Feder, estas se basan en que en las RUP se pueden financiar a través del Feder inversiones en infraestructuras aeroportuarias y en residuos cumpliendo determinados requisitos, mientras que en las demás regiones ello no es posible.

- por último, la asignación adicional específica para las RUP, el comúnmente llamado Fondo RUP ve muy reducida su mención en la propuesta de Reglamento y en cualquier caso se halla sujeto a la voluntad de la Administración General del Estado puesto que tendrá que estar recogido en los planes de colaboración nacional y regional elaborados por esta Administración.

En el siguiente cuadro se reflejan las diferencias entre la legislación vigente y la propuesta:

MFP 2021-2027	MFP 2028-2034
Reglamento (EU) 2021/1058 Feder y Fondo de Cohesión	Propuesta de la Comisión COM (2025) Feder, Fondo de Cohesión e Interreg
Concentración temática	
Artículo 4(2) -Por lo que se refiere a la concentración temática de la ayuda a los Estados miembros con regiones ultraperiféricas, los recursos del Feder asignados específicamente a programas para las regiones ultraperiféricas y los asignados a las demás regiones se gestionarán por separado	El concepto de concentración temática del Feder desaparece y es sustituido por el de objetivos generales y objetivos específicos de los planes nacionales y regionales (artículos 2 y 3 de la propuesta de Reglamento que figura en el COM (2025) 565
Artículo 4(3) -A los efectos de una concentración temática y para los programas del objetivo de inversión en empleo y crecimiento, las RUP se clasificarán dentro del grupo 3 (aquellos que tengan una tasa de PIB de < 75% de la media de la UE)	
Artículo 4(4) -Requisitos de concentración temática. -Grupo 1/regiones más desarrolladas –mín. del 85% de los recursos del Feder para el OP 1 y el OP 2, y mín. del 30% para el OP 2; -Grupo 2/regiones en transición –mín. del 40% de los recursos del Feder para el OP 1, y mín. del 30% para el OP 2; -Grupo 3/regiones menos desarrolladas –mín. del 25% de los recursos del Feder para el OP 1, y mín. del 30% para el OP 2	
Excepciones para las RUP en las inversiones excluidas del Feder	
Artículo 7(1) –Las RUP están excluidas de la norma que estipula que el Feder y el Fondo de Cohesión no proporcionarán ayuda para -(e) inversiones en infraestructuras aeroportuarias; -(f): inversiones en eliminación de residuos en vertederos; -(g): inversiones en aumentar la capacidad de las instalaciones para el tratamiento de residuos (exención únicamente en casos debidamente justificados)	El concepto de inversiones admitidas y excluidas para el Feder también desaparece y se integra dentro de un concepto más amplio de inversiones con el objeto de alcanzar todos los objetivos generales y específicos de los planes nacionales y regionales. En su evaluación sobre cada uno de los planes nacionales, la Comisión verificará, entre otras cuestiones, el posible falseamiento de la competencia o las afecciones a otras políticas sectoriales a los que anteriormente estaban dirigidas estas excepciones
Asignación adicional específica (Fondo RUP)	
La asignación no está sujeta a concentración temática alguna: Artículo 14(1) –Las normas de concentración temática de la ayuda del Feder no se aplicarán a la AAE para las RUP. La AAE en las RUP se utilizará para compensar los gastos adicionales realizados en esas regiones como consecuencia de una o varias de las limitaciones permanentes para su desarrollo (artículo 349 del TFUE)	Además de la falta de una cifra específica para esta asignación, y de la importante desaparición de la mención “adicional” en la propuesta para el próximo periodo, se simplifica considerablemente la redacción de este artículo y se deja en manos del Estado miembro su inclusión o no en los planes de colaboración nacional y regional (artículo 6): En los planes de colaboración nacional y regional se establecerán medidas para cubrir el apoyo estructural para sus costes de desarrollo económico, social y territorial, así como los costes de funcionamiento o compensación, incluida la prestación de servicios en el marco de una obligación de servicio público y sus contratos en dichas regiones, con el fin de compensar los costes adicionales en que se incurra en las regiones ultraperiféricas como consecuencia de una o varias de las limitaciones permanentes para su desarrollo enumeradas en el artículo 349, párrafo primero, del TFUE
Se establece una lista positiva de actividades que pueden financiarse, tanto inversión como funcionamiento. Artículo 14(2) -La AAE proporcionará ayuda a las actividades que entren dentro del alcance de la ayuda del Feder: -inversiones en infraestructuras; -actividades para la investigación aplicada y la innovación; -inversiones en el acceso a los servicios; -equipos, software y activos inmateriales; -redes, cooperación, intercambio de experiencias y actividades que impliquen agrupaciones de innovación, en particular entre empresas, organizaciones de investigación y administraciones públicas; -información, comunicación y estudios; -asistencia técnica; -inversiones productivas en empresas, con independencia de su tamaño (Excepción al artículo 5 (1, d) recogida en el apartado 4 de este artículo 14). También proporcionará ayuda a: -las medidas que cubran gastos de funcionamiento, a fin de compensar los gastos adicionales en que se incurra en las RUP como consecuencia de las limitaciones permanentes para su desarrollo a que se refiere el artículo 349 del TFUE; -los gastos correspondientes a las compensaciones concedidas para el cumplimiento de obligaciones y contratos de servicio público en las RUP	
Se establece una lista negativa de actividades que no pueden ser financiadas con esta asignación adicional: -Artículo 14(3) –la AAE no financiará: -(a) operaciones relacionadas con los productos enumerados en el anexo I del TFUE; -(b) ayudas al transporte de personas autorizadas con arreglo al artículo 107(2)(a) del TFUE; -(c) exenciones fiscales y exenciones de cargas sociales; -(d) obligaciones de servicio público de las que no se encarguen empresas y en las que el Estado actúa ejerciendo la autoridad pública.	

6. Conclusión

Por todo ello, si bien la propuesta recoge un cumplimiento formal de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, porque no menoscaba las competencias autonómicas, sin embargo, supone un retroceso y un riesgo para la aplicación del derecho europeo en Canarias puesto que la financiación europea específicamente dirigida a paliar las dificultades de estas regiones ultraperiféricas no está claramente diferenciada y determinada a nivel europeo, como exige el artículo 349 del TFUE, sino que se deja en manos de un reparto estatal en el marco de un plan conjunto con otras políticas.

Parlamento de Canarias, a 3 de noviembre de 2025. Alicia Vanoostende Simili. Socorro Beato Castellano. Luz Reverón González. Luis Alberto Campos Jiménez. Melodie Mendoza Rodríguez.

**11L/CSUE-0166 *Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Fondo Social Europeo como parte de los planes de colaboración nacional y regional establecidos en el Reglamento (UE) [planes CNR], por el que se establecen las condiciones para la ejecución de la ayuda de la Unión destinada al empleo de calidad, las capacidades y la inclusión social para el periodo 2028-2034. COM/2025/558 final***

Presidencia

Emitido dictamen por el Parlamento de Canarias, a instancias de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales, para la verificación del cumplimiento del principio de subsidiariedad por parte de una iniciativa legislativa de la Unión Europea, relativo a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Fondo Social Europeo como parte de los planes de colaboración nacional y regional establecidos en el Reglamento (UE) [planes CNR], por el que se establecen las condiciones para la ejecución de la ayuda de la Unión destinada al empleo de calidad, las capacidades y la inclusión social para el periodo 2028-2034. COM/2025/558 final, por la ponencia creada al efecto, al amparo de lo previsto en el artículo 53.5 del Reglamento de la Cámara, con fecha 3 de noviembre de 2025, de conformidad con lo establecido en los artículos 53.6 y 112 del Reglamento del Parlamento, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 3 de noviembre de 2025. EL SECRETARIO GENERAL (*P. D. de la presidenta, Resolución de 30 de junio de 2023, BOPC núm. 8, de 3/7/2023*), Salvador Iglesias Machado.

**DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS Y ACCIÓN EXTERIOR DEL PARLAMENTO DE CANARIAS, A INSTANCIAS DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA DE LAS CORTES GENERALES, PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD POR PARTE DE UNA INICIATIVA LEGISLATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA**

Título del documento:	Iniciativa legislativa UE: Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Fondo Social Europeo como parte de los planes de colaboración nacional y regional establecidos en el reglamento (EU) [planes CNR], por el que se establecen las condiciones para la ejecución de la ayuda de la unión destinada al empleo de calidad, las capacidades y la inclusión social para el periodo 2028-2034.
Referencia:	COM (2025) 558 final de 16/7/2025 (CSUE-166)

I. ANTECEDENTES:

1. Con fecha 8 de septiembre de 2025, RE 202510000009597, se recibió en la Cámara correo electrónico de la Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales, por el que, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la citada Comisión Mixta remitió al Parlamento de Canarias, Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Fondo Social Europeo como parte de los planes de colaboración nacional y regional establecidos en el Reglamento (UE) [planes CNR], por el que se establecen las condiciones para la ejecución de la ayuda de la Unión destinada al empleo de calidad, las capacidades y la inclusión social para el periodo 2028-2034 –COM (2025) 558 final, de 16/7/2025, para su conocimiento y, en su caso, emisión de dictamen motivado sobre el eventual incumplimiento del principio de subsidiariedad.
2. De conformidad con lo previsto en el artículo 53.3 del Reglamento del Parlamento de Canarias, la comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior elaborará y aprobará, dentro del plazo de cuatro semanas fijado por el artículo 6.2 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, modificada por la 24/2009, de 22 de diciembre, para su adaptación al Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007 y por la 38/2010, de 20 de diciembre, para reforzar las funciones asignadas a dicha Comisión Mixta, así como el artículo Octavo. 3 de la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, 628/000006 (S) de 27 de mayo de 2010, sobre reforma de la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de septiembre de 1995, sobre desarrollo de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, para su adaptación a las previsiones del Tratado de Lisboa y de la Ley 24/2009, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales núm. 312 de 8 de junio de 2010, un dictamen en el que quedará fijada la posición de la Cámara y de cuya aprobación se dará cuenta al pleno.

3. La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de julio de 2023, adoptó el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

“17. ASUNTOS TRATADOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

17.1. Asuntos remitidos por la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales.

Acuerdo:

*“La Mesa de la Cámara, con el objeto de determinar, dentro de las posibilidades que al efecto, dispone el artículo 53 del Reglamento de la Cámara, el concreto procedimiento parlamentario que haya de seguirse para la emisión del parecer del Parlamento de Canarias respecto del cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad por parte de las iniciativas legislativas comunitarias europeas que sean objeto de remisión al mismo por las Cortes Generales, en los términos de lo previsto en la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, en su versión modificada para su adaptación al Tratado de Lisboa de 13 de abril de 2007, oída la Junta de Portavoces en su reunión del día de la fecha, acuerda:*

*1. Constituir la ponencia a que se refiere el artículo 53.5 del Reglamento de la Cámara, que, con carácter general y en tanto en cuanto no se determine lo contrario, será la competente para conocer y, en su caso, elaborar para su posterior remisión a las Cortes Generales, dictamen motivado en relación con el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad por parte de los proyectos legislativos europeos que sean objeto de consulta por aquellas”.*

4. Con fecha 14 de octubre de 2025, el Gobierno de Canarias presentó informe a la iniciativa legislativa de la UE sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Fondo Social Europeo como parte de los planes de colaboración nacional y regional establecidos en el Reglamento (UE) [planes CNR], por el que se establecen las condiciones para la ejecución de la ayuda de la Unión destinada al empleo de calidad, las capacidades y la inclusión social para el período 2028-2034 –COM (2025) 558 final, de 16/7/2025.

5. Finalmente, la ponencia, en su reunión de 3 de noviembre del año en curso, ha analizado el texto de la iniciativa legislativa europea remitida por la Comisión Mixta para la Unión Europea, a resultas de lo cual, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 53.5 del Reglamento de la Cámara y del acuerdo de la Mesa antes referido, ha elaborado el siguiente:

## II. DICTAMEN

### 1. Base jurídica y tipo de competencia:

#### a) Objetivos de la propuesta legislativa

La propuesta forma parte del amplio paquete para el próximo marco financiero plurianual (MFP) correspondiente al período 2028-2034, presentada por la Comisión el pasado 16 de julio.

Este paquete legislativo va más allá de las modificaciones que se han ido consolidando en los anteriores periodos legislativos y pretende ser mucho más ambicioso para abordar los numerosos retos a los que se enfrenta la Unión en estos momentos. El presupuesto pretende garantizar que las inversiones de la UE estén en consonancia con las prioridades políticas de la Unión. Con carácter general, el presupuesto crece tanto en términos absolutos como en términos relativos al alcanzar la cifra de 1,98 millones de euros, para todo el período, que es equivalente al 1,26% de la Renta Nacional Bruta (RNB) de los Estados miembros.

En cuanto a los ingresos, la Comisión propone nuevos recursos propios, incluyendo ajustes en los ya propuestos en 2023 así como otros nuevos, de modo que las aportaciones de la renta de los Estados se mantengan estables y se disponga, en cualquier caso, de un presupuesto acorde con las necesidades de la UE, incluida la de reembolso de los préstamos de New Generation EU.

En el lado de los gastos, el próximo presupuesto de la UE presentado por la Comisión Europea estará basado en prioridades superando la división en rúbricas para políticas sectoriales, de modo que puedan establecerse complementariedades entre unos y otros programas para financiar prioridades concretas de la Unión.

Dentro de esta nueva estructura, la Comisión agrupa en unos pocos instrumentos, la multiplicidad de fondos actual y propone, en particular, la adopción de un Fondo Europeo para la Cohesión Económica, Social y Territorial, la Agricultura y las Zonas Rurales, la Pesca y el Mar, la Prosperidad y la Seguridad para el período 2028-2034 (propuesta de la Comisión con la referencia COM (2025) 565). Este Fondo agrupará las normas sectoriales específicas relativas a:

- Desarrollo regional (Feder y Fondo de Cohesión).
- Migración, fronteras, seguridad.
- Social (FSE+).
- Política Agrícola común.
- Política Pesquera y Marítima.

Asimismo, se creará un Mecanismo de la Unión que funcionará como una reserva para aumentar la flexibilidad y hacer frente a crisis imprevistas.

Y, todo ello, a través de la elaboración por parte de cada uno de los Estados miembros de planes de colaboración nacional y regional que reunirán catorce fondos existentes y que habrán de ser aprobados por la Comisión Europea



y que combinarán fondos de la UE ejecutados por los Estados miembros y por las regiones en un proceso de planificación a medida que debe ser acorde con las prioridades comunes de la Unión.

Estos planes de colaboración han de estar anclados en las prioridades europeas, aunque podrán adaptarse a las necesidades específicas de los Estados miembros y las regiones y ser coherente con los restos determinados a través del Semestre Europeo. La Comisión pretende dar flexibilidad a este nuevo sistema dando cabida a la diversidad de cada Estado miembro a través de flexibilidad para desarrollar capítulos nacionales, sectoriales, pero también regionales y territoriales.

Así, al contrario que en los marcos anteriores, en este, la Comisión Europea en la propuesta del mencionado Reglamento sobre el Fondo Europeo para la Cohesión Económica, Social y Territorial, la Agricultura y las Zonas Rurales, la Pesca y el Mar, la Prosperidad y la Seguridad no se establecen dotaciones individualizadas para todas y cada una de las categorías, sino únicamente las siguientes (artículo 10):

- para las regiones menos desarrolladas, aquellas que tienen un PIB per cápita inferior en un 75% a la media europea tomando como referencia los años 2022, 2023 y 2024 (sin embargo, no para las regiones en transición ni para las más desarrolladas). Recordemos que, con los datos disponibles en este momento, Canarias es una de esas regiones puesto que, según los datos provisionales de 2022 y 2023, el PIB per cápita se situó en el 68%, y el 71%, por lo que difícilmente superará el 75% en media de estos dos años más el de 2024.

- para determinados tipos de ayudas agrarias entre los que no se encuentra el Posei.
- para cuestiones relacionadas con migración, asilo e integración.
- para el Mecanismo de reserva de la Unión.
- para Interreg.

Por consiguiente, el objetivo concreto de esta propuesta de Reglamento sobre el Fondo Social Europeo (FSE), es establecer este Fondo como parte de los planes de colaboración nacional y regional de la UE para el período 2028-2034. Este fondo tiene como propósito principal, apoyar el empleo de calidad, el desarrollo de capacidades y la inclusión social, contribuyendo a la cohesión económica, social y territorial de la UE. Además, busca implementar el pilar europeo de derechos sociales, promover la igualdad de oportunidades, mejorar los sistemas de educación y formación, así como combatir la pobreza y la exclusión social.

### **b) Ámbito competencial**

Los artículos 162, 164, 174 y 175 párrafo tercero del TFUE constituyen la base jurídica del FSE, incluyendo el apoyo a la lucha contra la pobreza, la promoción de los valores fundamentales de la UE y la cohesión económica, social y territorial. Además, el reglamento hace referencia al artículo 163 del TFUE para la creación del Comité del FSE.

Así, por lo que respecta a la cohesión económica, social y territorial, el artículo 149 de la Constitución española concede competencia exclusiva al Estado en lo relativo a las “Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica” (apartado 1.13.º). A su vez, el artículo 114 del Estatuto de Autonomía de Canarias, señala que *“corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materia de planificación y promoción de la actividad económica en Canarias, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 149.1. 11.º y 13.º de la Constitución”*. En particular, dispone el apartado 3 de este artículo que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias *“el desarrollo y la gestión de la planificación general de la actividad económica”*.

Por otro lado, el artículo 175 del Estatuto señala que corresponde en exclusiva a la Comunidad Autónoma de Canarias la gestión, ejecución y, en su caso, la planificación de los fondos europeos destinados a Canarias, en especial de aquellos aprobados en aplicación de criterios de convergencia o derivados de la condición ultraperiférica de Canarias; y el artículo 197 de la misma norma señala, en su apartado 2, que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias *“la gestión de los fondos europeos en materias de su competencia”*. Asimismo, el artículo 139 del Estatuto dispone que *corresponden a la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de la legislación del Estado, las competencias ejecutivas en materia de empleo y relaciones laborales*” y el artículo 142 atribuye a la comunidad autónoma las competencias en materia de servicios sociales.

La iniciativa, por tanto, afecta a competencias estatales y autonómicas. Sin embargo, los Fondos Europeos señalados en esta iniciativa legislativa y, en particular, los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos no están destinados a sustituir las políticas públicas aplicadas por los Estados miembros y regiones en materia de planificación económica, sino a cofinanciar las acciones que los Estados y las regiones efectúen al respecto, manteniendo, por tanto, la Comunidad Autónoma de Canarias todas sus competencias en materia de realización y ejecución de dichos planes y programas específicos.

En particular, la propuesta que se informa, consideramos que no menoscaba las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias. No obstante, aun sin menoscabar las competencias autonómicas, supone un retroceso y un riesgo para la aplicación del derecho europeo en Canarias puesto que la financiación europea específicamente dirigida a paliar las dificultades de estas regiones no está claramente diferenciada y especificada a nivel europeo, sino que se deja en manos de un reparto estatal en el marco de un plan conjunto con otras políticas.

## 2. Análisis de las exigencias derivadas del principio de subsidiariedad

Tal y como determina el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (versión consolidada), en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva la Unión intervendrá solo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.

Por otra parte, los criterios que han sido definidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para proceder al examen de un acto comunitario desde la óptica del respeto al principio de subsidiariedad son dos: 1) determinar, en primer lugar, si la competencia a la que recurre el legislador comunitario es exclusiva de la Unión y, a continuación, en el caso en que no fuera una competencia exclusiva, 2) determinar si el objetivo de la acción adoptada puede lograrse mejor a nivel comunitario. Al primer criterio ya se ha respondido, de manera que procede referirse al segundo.

El Protocolo n.º 2, publicado en el *Diario Oficial de la Unión Europea*, n.º 115 de 9 de mayo de 2008 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, establece en su artículo 5 lo siguiente:

*“Los proyectos de actos legislativos se motivarán en relación con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Todo proyecto de acto legislativo debería incluir una ficha con pormenores que permitan evaluar el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Esta ficha debería incluir elementos que permitan evaluar el impacto financiero y, cuando se trate de una Directiva, sus efectos en la normativa que han de desarrollar los Estados miembros, incluida, cuando proceda, la legislación regional. Las razones que justifiquen la conclusión de que un objetivo de la Unión puede alcanzarse mejor en el plano de esta se sustentarán en indicadores cualitativos y, cuando sea posible, cuantitativos. Los proyectos de actos legislativos tendrán debidamente en cuenta la necesidad de que cualquier carga, tanto financiera como administrativa, que recaiga sobre la Unión, los Gobiernos nacionales, las autoridades regionales o locales, los agentes económicos o los ciudadanos sea lo más reducida posible y proporcional al objetivo que se desea alcanzar”.*

El principio de subsidiariedad establece que solo podrán tomarse medidas a nivel de la UE cuando sean más eficaces que la actuación individual de los Estados miembros a nivel nacional, regional o local. El mecanismo de control de la subsidiariedad, que se aplica en los ámbitos de competencia compartida entre la UE y los Estados miembros, permite a los parlamentos nacionales manifestar su posición cuando consideren que una iniciativa legislativa de la UE no respeta este principio, posición que ha de ser tenida en cuenta por la Comisión Europea.

En lo que a la presente iniciativa se refiere, en los ámbitos de la política social y de empleo y de la salud pública, la UE tiene competencias compartidas con los Estados miembros (artículo 4 del TFUE), competencias para establecer las disposiciones en el marco de las cuales deberán coordinar su acción (artículo 5 del TFUE) o bien competencias para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros (artículo 6 del TFUE).

El FSE se basa en el principio de subsidiariedad. Mediante la gestión compartida, la Comisión delega las tareas estratégicas de programación y ejecución en los Estados miembros y las regiones de la UE. También limita la acción de la UE a lo necesario para alcanzar sus objetivos tal como se establecen en los tratados. Con la gestión compartida se pretende que la adopción de las decisiones sea lo más cercana posible al ciudadano y que la acción a nivel de la UE se justifique a la luz de las posibilidades y las especificidades a escala nacional, regional o local. La gestión compartida acerca Europa a sus ciudadanos y conecta las necesidades locales con los objetivos europeos. Además, aumenta la apropiación de los objetivos de la UE, pues los Estados miembros y la Comisión comparten el poder y la responsabilidad de la toma de decisiones.

Consecuentemente, se aprecia que la iniciativa cumple formalmente con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

## 3. Carga financiera y administrativa

No se acompaña en la documentación remitida por las Cortes Generales un análisis de las eventuales cargas, si es que las hay, para las autoridades nacionales, regionales o locales, agentes económicos o ciudadanos, derivadas de la nueva regulación, con lo cual no es posible pronunciarse al respecto.

## 4. Consideración de los aspectos locales y regionales en la consulta y análisis del impacto

El Parlamento de Canarias no ha sido objeto de consulta previa a la elaboración de la propuesta que hoy se somete a su valoración en el marco del mecanismo de control del principio de subsidiariedad. Tampoco nos consta que lo haya sido el Gobierno de Canarias.

## 5. Otras observaciones

La iniciativa legislativa incide en medidas específicas adoptadas en el marco del artículo 349 del TFUE que afectan a Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea, puesto que el programa marco Horizonte Europa en la actualidad, contiene disposiciones específicas para las regiones ultraperiféricas, como Canarias.

En particular, las diferencias entre la regulación del FSE en el período anterior y este son notables, produciéndose una simplificación de las medidas específicas para las regiones ultraperiféricas. El Reglamento vigente en la actualidad, Reglamento (UE) 2021/1057 contiene las siguientes disposiciones específicas referidas a las RUP:

- Una referencia a una rúbrica correspondiente a las regiones escasamente pobladas del norte de Europa y a las RUP que se eleva a 473 millones de euros. La parte correspondiente a las RUP se eleva a 372 millones de euros y es una dotación adicional.

- Dicha dotación adicional queda excluida de las reglas de la concentración temática.

- La mención de que se asignará al menos un 12,5% de los recursos del FSE+ a las RUP en régimen de gestión compartida a las acciones específicas relativas a la educación y al empleo juvenil.

La propuesta de reglamento FSE reduce considerablemente dichas disposiciones ya que únicamente se refiere a las RUP en un considerando que se limita a decir que los Estados miembros deben incluir medidas destinadas a mejorar el empleo y la movilidad laboral, en particular de los jóvenes, la educación y las competencias, y la inclusión social. De este modo, las medidas específicas para las RUP y su montante, dependerán de la voluntad del Estado, debiendo recogerse en los planes nacionales y regionales, elaborados por aquel.

En el siguiente cuadro se reflejan las diferencias entre la legislación vigente y la propuesta:

MFP 2021-2027	MFP 2028-2034
Reglamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio, por el que se establece el Fondo Social Europeo (FSE+) y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1296/2013	Propuesta de Reglamento del del Parlamento Europeo y del Consejo que establece el FSE como parte del plan nacional y regional del Reglamento (UE) ... y que establece las condiciones de implementación del apoyo de la Unión a la calidad del empleo, capacidades e inclusión social para el período 2028-2034
<p>Considerando (27)</p> <p>De conformidad con el artículo 349 del TFUE y con el artículo 2 del Protocolo n.º 6 sobre las disposiciones especiales relativas al objetivo n.º 6 en el marco de los Fondos estructurales en Finlandia, Noruega y Suecia del Acta de Adhesión de 1994, las regiones ultraperiféricas y las regiones septentrionales escasamente pobladas tienen derecho a medidas específicas en el marco de las políticas comunes y los programas de la Unión. Debido a las limitaciones permanentes, como la despoblación, dichas regiones requieren un apoyo específico</p> <p>Artículo 5. (Presupuesto) apartado 2</p> <p>La parte de la dotación financiera para la ejecución del capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida para contribuir al objetivo de inversión para el empleo y el crecimiento en los Estados miembros y regiones, tal como establece el artículo 5, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) 2021/1060, será de 87.319.331.844€ a precios de 2018, de los que 175.000.000€ se asignarán a la cooperación transnacional para acelerar la transferencia de soluciones innovadoras y facilitar su aplicación a mayor escala, tal como se establece en el artículo 25, letra i), del presente Reglamento, y 472.980.447€, a precios de 2018, se destinarán a la financiación adicional de las regiones ultraperiféricas identificadas en el artículo 349 del TFUE y las regiones de nivel NUTS 2 que reúnan los criterios establecidos en el artículo 2 del Protocolo n.º 6 sobre las disposiciones especiales relativas al objetivo n.º 6 en el marco de los Fondos estructurales en Finlandia, Noruega y Suecia del Acta de Adhesión de 1994</p> <p>Artículo 7 (Coherencia y concentración temática) apartado 6 tercer párrafo y apartado 7</p> <p>6. (...) Las regiones ultraperiféricas que cumplan las condiciones establecidas en el párrafo segundo asignarán al menos el 12,5% de sus recursos del capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida de sus programas a las acciones específicas y a las reformas estructurales recogidas en el párrafo primero. Esta asignación se tendrá en cuenta para verificar el cumplimiento del porcentaje mínimo a nivel nacional establecido en el párrafo segundo, cuando proceda.</p> <p>7. Los apartados 2 a 6 del presente artículo no se aplicarán a la dotación específica adicional recibida por las regiones ultraperiféricas y las regiones de nivel NUTS 2 que reúnan los criterios establecidos en el artículo 2 del Protocolo n.º 6.</p> <p>Artículo 16 (Subvencionabilidad) apartado 3</p> <p>La dotación específica adicional recibida por las regiones ultraperiféricas y las regiones de nivel NUTS 2 que reúnan los criterios establecidos en el artículo 2 del Protocolo n.º 6 se utilizará para apoyar el logro de los objetivos específicos establecidos en el artículo 4, apartado 1. (objetivos específicos del FSE+)</p>	<p>Considerando (24)</p> <p>Teniendo en cuenta las características y limitaciones especiales de las regiones ultraperiféricas, los Estados miembros deben incluir en su capítulo dedicado a las regiones ultraperiféricas medidas destinadas a mejorar el empleo y la movilidad laboral, en particular de los jóvenes, la educación y las competencias, y la inclusión social</p>

6. Conclusión

Por todo ello, si bien la propuesta recoge un cumplimiento formal de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, porque no menoscaba las competencias autonómicas, sin embargo, supone un retroceso y un riesgo para la aplicación del derecho europeo en Canarias en su condición de región ultraperiférica, puesto que la financiación europea específicamente dirigida a la adopción de medidas destinadas a mejorar el empleo y la movilidad laboral, en particular de los jóvenes, la educación, las competencias y la inclusión social, en esta comunidad autónoma no está claramente diferenciada y determinada a nivel europeo, como exige el artículo 349 del TFUE, sino que se deja en manos de un reparto estatal en el marco de un plan conjunto con otras políticas.

Parlamento de Canarias, a 3 de noviembre de 2025. Alicia Vanoostende Simili. Socorro Beato Castellano. Luz Reverón González. Luis Alberto Campos Jiménez. Melodie Mendoza Rodríguez.

**11L/CSUE-0169 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo Europeo para la Cohesión Económica, Social y Territorial, la Agricultura y las Zonas Rurales, la Pesca y el Mar, la Prosperidad y la Seguridad para el periodo 2028-2034, y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2023/955 y el Reglamento (UE, Euratom) 2024/2509. COM (2025) 565. Anexo. SWD (2025) 565**

Presidencia

Emitido dictamen por el Parlamento de Canarias, a instancias de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales, para la verificación del cumplimiento del principio de subsidiariedad por parte de una iniciativa legislativa de la Unión Europea, relativo a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo Europeo para la Cohesión Económica, Social y Territorial, la Agricultura y las Zonas Rurales, la Pesca y el Mar, la Prosperidad y la Seguridad para el periodo 2028-2034, y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2023/955 y el Reglamento (UE, Euratom) 2024/2509. COM (2025) 565. Anexo. SWD (2025) 565, por la ponencia creada al efecto, al amparo de lo previsto en el artículo 53.5 del Reglamento de la Cámara, con fecha 3 de noviembre de 2025, de conformidad con lo establecido en los artículos 53.6 y 112 del Reglamento del Parlamento, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 3 de noviembre de 2025. EL SECRETARIO GENERAL (*P. D. de la presidenta, Resolución de 30 de junio de 2023, BOPC núm. 8, de 3/7/2023*), Salvador Iglesias Machado.

**DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS Y ACCIÓN EXTERIOR DEL PARLAMENTO DE CANARIAS, A INSTANCIAS DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA DE LAS CORTES GENERALES, PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD POR PARTE DE UNA INICIATIVA LEGISLATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA**

<b>Título del documento:</b>	<b>Iniciativa legislativa UE:</b> <b>Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo europeo para la cohesión económica, social y territorial, la agricultura y las zonas rurales, la pesca y el mar, la prosperidad y la seguridad para el período 2028-2034 y por el que se modifican el reglamento (UE) 2023/955 y el reglamento (UE, Euratom) 2024/2509.</b>
<b>Referencia:</b>	<b>COM (2025) 565 final de 16/7/2025 (CSUE-169)</b>

I. ANTECEDENTES:

- Con fecha 9 de septiembre de 2025, RE 202510000009716, se recibió en la Cámara correo electrónico de la Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales, por el que, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la citada Comisión Mixta remitió al Parlamento de Canarias, Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo Europeo para la Cohesión Económica, Social y Territorial, la Agricultura y las Zonas Rurales, la Pesca y el Mar, la Prosperidad y la Seguridad para el período 2028-2034, y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2023/955 y el Reglamento (UE, Euratom) 2024/2509 –COM (2025) 565 final, de 16/7/2025, para su conocimiento y, en su caso, emisión de dictamen motivado sobre el eventual incumplimiento del principio de subsidiariedad.
- De conformidad con lo previsto en el artículo 53.3 del Reglamento del Parlamento de Canarias, la comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior elaborará y aprobará, dentro del plazo de cuatro semanas fijado por el artículo 6.2 de la *Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea*, modificada por la 24/2009, de 22 de diciembre, para su adaptación al Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007 y por la 38/2010, de 20 de diciembre, para reforzar las funciones asignadas a dicha Comisión Mixta, así como el artículo Octavo. 3 de la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, 628/000006 (S) de 27 de mayo de 2010, sobre reforma de la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de septiembre de 1995, sobre desarrollo de la *Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea*, para su adaptación a las previsiones del Tratado de Lisboa y de la Ley 24/2009, publicado



en el *Boletín Oficial de las Cortes Generales* núm. 312 de 8 de junio de 2010, un dictamen en el que quedará fijada la posición de la Cámara y de cuya aprobación se dará cuenta al pleno.

3. La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de julio de 2023, adoptó el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

“17. ASUNTOS TRATADOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

17.1. Asuntos remitidos por la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales.

Acuerdo:

*“La Mesa de la Cámara, con el objeto de determinar, dentro de las posibilidades que al efecto, dispone el artículo 53 del Reglamento de la Cámara, el concreto procedimiento parlamentario que haya de seguirse para la emisión del parecer del Parlamento de Canarias respecto del cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad por parte de las iniciativas legislativas comunitarias europeas que sean objeto de remisión al mismo por las Cortes Generales, en los términos de lo previsto en la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, en su versión modificada para su adaptación al Tratado de Lisboa de 13 de abril de 2007, oída la Junta de Portavoces en su reunión del día de la fecha, acuerda:*

*1. Constituir la ponencia a que se refiere el artículo 53.5 del Reglamento de la Cámara, que, con carácter general y en tanto en cuanto no se determine lo contrario, será la competente para conocer y, en su caso, elaborar para su posterior remisión a las Cortes Generales, dictamen motivado en relación con el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad por parte de los proyectos legislativos europeos que sean objeto de consulta por aquellas”.*

4. Con fecha 14 de octubre de 2025, el Gobierno de Canarias presentó informe a la iniciativa legislativa de la UE sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo Europeo para la Cohesión Económica, Social y Territorial, la Agricultura y las Zonas Rurales, la Pesca y el Mar, la Prosperidad y la Seguridad para el período 2028-2034, y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2023/955 y el Reglamento (UE, Euratom) 2024/2509 –COM (2025) 565 final, de 16/7/2025.

5. Finalmente, la ponencia, en su reunión de 3 de noviembre del año en curso, ha analizado el texto de la iniciativa legislativa europea remitida por la Comisión Mixta para la Unión Europea, a resultas de lo cual, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 53.5 del Reglamento de la Cámara y del acuerdo de la Mesa antes referido, ha elaborado el siguiente:

## II. DICTAMEN

### 1. Base jurídica y tipo de competencia:

Objetivos de la propuesta legislativa:

La propuesta forma parte del amplio paquete para el próximo marco financiero plurianual (MFP) correspondiente al período 2028-2034, presentada por la Comisión el pasado 16 de julio.

Este paquete legislativo va más allá de las modificaciones que se han ido consolidando en los anteriores periodos legislativos y pretende ser mucho más ambicioso para abordar los numerosos retos a los que se enfrenta la Unión en estos momentos. El presupuesto pretende garantizar que las inversiones de la UE estén en consonancia con las prioridades políticas de la Unión. Con carácter general, el presupuesto crece tanto en términos absolutos como en términos relativos al alcanzar la cifra de 1,98 millones de euros, para todo el período, que es equivalente al 1,26% de la Renta Nacional Bruta (RNB) de los Estados miembros.

En cuanto a los ingresos, la Comisión propone nuevos recursos propios, incluyendo ajustes en los ya propuestos en 2023 así como otros nuevos, de modo que las aportaciones de la renta de los Estados se mantengan estables y se disponga, en cualquier caso, de un presupuesto acorde con las necesidades de la UE, incluida la de reembolso de los préstamos de New Generation EU.

En el lado de los gastos, el próximo presupuesto de la UE presentado por la Comisión Europea estará basado en prioridades superando la división en rúbricas para políticas sectoriales, de modo que puedan establecerse complementariedades entre unos y otros programas para financiar prioridades concretas de la Unión.

Dentro de esta nueva estructura, la Comisión agrupa en unos pocos instrumentos, la multiplicidad de fondos actual y propone, en particular, la adopción de un Fondo Europeo para la Cohesión Económica, Social y Territorial, la Agricultura y las Zonas Rurales, la Pesca y el Mar, la Prosperidad y la Seguridad.

Este Fondo agrupará las normas sectoriales específicas relativas a:

- Desarrollo regional (Feder y Fondo de Cohesión).
- Migración, fronteras, seguridad
- Social (FSE+)
- Política Agrícola común
- Política Pesquera y Marítima
- Asimismo, se creará un Mecanismo de la Unión que funcionará como una reserva para aumentar la flexibilidad

y hacer frente a crisis imprevistas

Y, todo ello, a través de la elaboración por parte de cada uno de los Estados miembros de planes de colaboración nacional y regional que reunirán catorce fondos existentes y que habrán de ser aprobados por la Comisión Europea

y que combinarán fondos de la UE ejecutados por los Estados miembros y por las regiones en un proceso de planificación a medida que debe ser acorde con las prioridades comunes de la Unión.

Estos planes de colaboración han de estar anclados en las prioridades europeas, aunque podrán adaptarse a las necesidades específicas de los Estados miembros y las regiones y ser coherente con los restos determinados a través del Semestre Europeo. La Comisión pretende dar flexibilidad a este nuevo sistema dando cabida a la diversidad de cada Estado miembro a través de flexibilidad para desarrollar capítulos nacionales, sectoriales, pero también regionales y territoriales.

Al contrario que en los marcos anteriores, en este, la Comisión Europea no establece dotaciones individualizadas para todas y cada una de las categorías, sino únicamente las siguientes (artículo 10):

- para las regiones menos desarrolladas, aquellas que tienen un PIB per cápita inferior en un 75% a la media europea tomando como referencia los años 2021, 2021 y 2023 (sin embargo, no para las regiones en transición ni para las más desarrolladas). Recordemos que, con los datos disponibles en este momento, Canarias es una de esas regiones puesto que, según los datos provisionales de 2022 y 2023, el PIB per cápita se situó en el 68%, y el 71%.
- para determinados tipos de ayudas agrarias entre los que no se encuentra el Posei.
- para cuestiones relacionadas con migración, asilo e integración
- para el Mecanismo de reserva de la Unión
- para Interreg.

Por consiguiente, el objetivo concreto de esta propuesta de Reglamento sobre el Feder, el Fondo de Cohesión e Interreg es abordar los desequilibrios regionales y apoyar el desarrollo de las regiones menos desarrolladas (artículo 176 del TFUE) apoyando las reformas e invirtiendo en el desarrollo social y económico de todas las regiones y ciudades de la UE, así como mejorando la cooperación territorial (especialmente a través del plan Interreg), así como la regulación específica del Fondo de Cohesión, que tiene por objeto apoyar las inversiones y las reformas en el ámbito del medio ambiente y el transporte en los Estados miembros con menor PIB per cápita (artículo 177).

### **b) Ámbito competencial**

La propuesta está amparada por distintas bases jurídicas del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) que reflejan las distintas políticas apoyadas por el Fondo:

- El artículo 174 compromete a la UE a promover la cohesión económica, social y territorial.
- Los artículos 176, 177 y 162 establecen el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión y el Fondo Social Europeo, respectivamente, y definen sus respectivos objetivos.
- El artículo 38 y el artículo 42, apartado 3, facultan a la Unión para definir y aplicar una política agrícola común (PAC) y una política pesquera común (PPC). El artículo 39 del TFUE establece los objetivos de la PAC, que incluyen incrementar la productividad agrícola, garantizar un nivel de vida adecuado para la población agrícola, estabilizar los mercados, garantizar la seguridad de los abastecimientos y asegurar al consumidor estos suministros a precios razonables. El artículo 42 del TFUE permite a la Unión determinar en qué medida las normas de la Unión en materia de competencia y ayudas estatales son aplicables a la producción y al comercio de los productos agrícolas que figuran en la lista del anexo I del TFUE.
- El artículo 43, apartado 3 otorga competencias al Consejo para adoptar medidas relativas al ámbito pesquero.
- El artículo 46 otorga competencias al Parlamento Europeo y al Consejo para adoptar medidas en el ámbito de la libre circulación de trabajadores; y, en particular, la letra d) de dicho artículo en relación con el nivel de vida y de empleo en las diversas regiones e industrias. A su vez, el artículo 149 otorga competencias a la Unión en materia de empleo, y el artículo 153 en numerosos ámbitos relacionados con la Política Social.
- El artículo 91 otorga igualmente competencias al Parlamento Europeo y al Consejo para adoptar medidas en el ámbito del transporte.
- El artículo 175 enumera los fondos con finalidad estructural, que apoyarán la consecución de la cohesión económica, social y territorial: el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, sección «Orientación», el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El artículo 177 del TFUE establece que *«el Parlamento Europeo y el Consejo [...] determinarán las funciones, los objetivos prioritarios y la organización de los fondos con finalidad estructural, lo que podrá suponer la agrupación de los fondos»*.
- El artículo 192 y el 194 constituyen bases jurídicas específicas para adoptar medidas en los ámbitos de medio ambiente y energía respectivamente.
- A su vez, los artículos 209 y 212 atribuyen competencias específicas al Parlamento Europeo y al Consejo para adoptar medidas en los ámbitos de la cooperación al desarrollo y la cooperación económica, financiera y técnica con terceros países.
- Por último, el artículo 349, base jurídica de las medidas específicas para las regiones ultraperiféricas, está también incluido entre las bases jurídicas de este Reglamento dadas las disposiciones para estas regiones que se encuentran recogidas en los artículos 46, 47 y 48 de la propuesta.

A nivel nacional, por lo que respecta a la cohesión económica, social y territorial, el artículo 149 de la Constitución española concede competencia exclusiva al Estado en lo relativo a las “Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica” (apartado 1.13.ª). A su vez, el artículo 114 del Estatuto de

Autonomía de Canarias, señala que “*corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materia de planificación y promoción de la actividad económica en Canarias, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 149.1. 11.ª y 13.ª de la Constitución*”. En particular, dispone el apartado 3 de este artículo que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias “*el desarrollo y la gestión de la planificación general de la actividad económica*”.

Por otro lado, el artículo 175 del Estatuto señala que corresponde en exclusiva a la Comunidad Autónoma de Canarias la gestión, ejecución y, en su caso, la planificación de los fondos europeos destinados a Canarias, en especial de aquellos aprobados en aplicación de criterios de convergencia o derivados de la condición ultraperiférica de Canarias; y el artículo 197 de la misma norma señala, en su apartado 2, que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias “*la gestión de los fondos europeos en materias de su competencia*”.

Dado el carácter multisectorial de este Fondo, numerosas otras competencias en los ámbitos de la agricultura, la pesca o la migración entre otros aspectos también son compartidas a distintos niveles entre la Administración General del Estado y la Administración autonómica.

La iniciativa, por tanto, afecta a competencias estatales y autonómicas. Sin embargo, los Fondos Europeos señalados en esta iniciativa legislativa y, en particular, los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos no están destinados a sustituir las políticas públicas aplicadas por los Estados miembros y regiones en materia de planificación económica, sino a cofinanciar las acciones que los Estados y las regiones efectúen al respecto, manteniendo, por tanto, la Comunidad Autónoma de Canarias todas sus competencias en materia de realización y ejecución de dichos planes y programas específicos.

En particular, la propuesta que se informa, se considera que no menoscaba las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias. No obstante, supone un retroceso y un riesgo para la aplicación del derecho europeo en Canarias puesto que la financiación europea específicamente dirigida a paliar las dificultades de estas regiones no está claramente diferenciada y especificada a nivel europeo, sino que se deja en manos de un reparto estatal en el marco de un plan conjunto con otras políticas.

## **2. Análisis de las exigencias derivadas del principio de subsidiariedad**

Tal y como determina el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (versión consolidada), en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva la Unión intervendrá solo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.

Por otra parte, los criterios que han sido definidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para proceder al examen de un acto comunitario desde la óptica del respeto al principio de subsidiariedad son dos: 1) determinar, en primer lugar, si la competencia a la que recurre el legislador comunitario es exclusiva de la Unión y, a continuación, en el caso en que no fuera una competencia exclusiva, 2) determinar si el objetivo de la acción adoptada puede lograrse mejor a nivel comunitario. Al primer criterio ya se ha respondido, de manera que procede referirse al segundo.

El Protocolo n.º 2, publicado en el *Diario Oficial de la Unión Europea*, n.º 115, de 9 de mayo de 2008, sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, establece en su artículo 5 lo siguiente:

*“Los proyectos de actos legislativos se motivarán en relación con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Todo proyecto de acto legislativo debería incluir una ficha con pormenores que permitan evaluar el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Esta ficha debería incluir elementos que permitan evaluar el impacto financiero y, cuando se trate de una Directiva, sus efectos en la normativa que han de desarrollar los Estados miembros, incluida, cuando proceda, la legislación regional. Las razones que justifiquen la conclusión de que un objetivo de la Unión puede alcanzarse mejor en el plano de esta se sustentarán en indicadores cualitativos y, cuando sea posible, cuantitativos. Los proyectos de actos legislativos tendrán debidamente en cuenta la necesidad de que cualquier carga, tanto financiera como administrativa, que recaiga sobre la Unión, los Gobiernos nacionales, las autoridades regionales o locales, los agentes económicos o los ciudadanos sea lo más reducida posible y proporcional al objetivo que se desea alcanzar”.*

El principio de subsidiariedad establece que solo podrán tomarse medidas a nivel de la UE cuando sean más eficaces que la actuación individual de los Estados miembros a nivel nacional, regional o local. El mecanismo de control de la subsidiariedad, que se aplica en los ámbitos de competencia compartida entre la UE y los Estados miembros, permite a los parlamentos nacionales manifestar su posición cuando consideren que una iniciativa legislativa de la UE no respeta este principio, posición que ha de ser tenida en cuenta por la Comisión Europea.

En lo que a la presente iniciativa se refiere, las dotaciones preasignadas a nivel nacional desempeñan un papel fundamental en la consecución de las prioridades de la UE en todos los Estados miembros y regiones. Así, la política de cohesión promueve la integración y la cooperación entre los Estados miembros, ayudando a reducir las disparidades regionales dentro de los Estados miembros y entre ellos. La política agrícola común garantiza unas condiciones de competencia equitativas entre los Estados miembros y los agricultores en el mercado único, garantizando la seguridad alimentaria en toda la Unión, haciendo que el sector sea más atractivo también para

los jóvenes agricultores y los nuevos agricultores y afrontando retos de carácter transfronterizo y mundial. La conservación de los recursos marinos, que es una competencia exclusiva de la UE, confiere una responsabilidad a la Unión en cuanto a la elaboración de políticas y la financiación. En el ámbito de los asuntos de interior, la financiación de la UE es necesaria para garantizar un enfoque común y fomentar la cooperación en el espacio de libertad, seguridad y justicia.

La financiación a nivel de la Unión también es necesaria para apoyar los bienes públicos de la UE que los Estados miembros no priorizan lo suficiente (por ejemplo, debido a deficiencias del mercado), pero que aportan grandes beneficios a escala de la UE, como proyectos transfronterizos o proyectos importantes de interés común europeo.

Hacer frente a estos retos a través de dotaciones preasignadas a nivel nacional aportaría valor añadido, al fomentar la asunción de responsabilidades y garantizar que la ayuda tenga en cuenta las necesidades específicas de cada uno de los Estados miembros y sus regiones. También ayudaría a la UE a alcanzar sus objetivos políticos de manera más eficiente vinculando la financiación de la UE a las reformas, lo que reforzaría la influencia de la UE para impulsar y ayudar a los Estados miembros a superar los obstáculos institucionales y reglamentarios que dificultan el cumplimiento de las prioridades políticas de la UE. Las reformas también pueden contribuir a incrementar el impacto positivo de las inversiones, aumentando así el valor de cada euro gastado. Consecuentemente, se aprecia que la iniciativa cumple formalmente con el principio de subsidiariedad.

En lo que al principio de proporcionalidad se refiere, la propuesta se ajusta a este y no excede de lo necesario para alcanzar el objetivo específico de contribuir a los esfuerzos de simplificación anteriores, alcanzando una mayor unificación y consolidación de las normas y garantizando que se presta una mayor atención al rendimiento y a la flexibilidad para maximizar la eficacia y la capacidad de respuesta del gasto de la UE.

### **3. Carga financiera y administrativa**

No se acompaña en la documentación remitida por las Cortes Generales un análisis de las eventuales cargas, si es que las hay, para las autoridades nacionales, regionales o locales, agentes económicos o ciudadanos, derivadas de la nueva regulación, con lo cual no es posible pronunciarse al respecto.

### **4. Consideración de los aspectos locales y regionales en la consulta y análisis del impacto**

El Parlamento de Canarias no ha sido objeto de consulta previa a la elaboración de la propuesta que hoy se somete a su valoración en el marco del mecanismo de control del principio de subsidiariedad. Tampoco nos consta que lo haya sido el Gobierno de Canarias.

### **5. Otras observaciones**

La iniciativa legislativa incide en medidas específicas adoptadas en el marco del artículo 349 del TFUE que afectan a Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea.

Las disposiciones específicas que estaban recogidas en prácticamente todos los Fondos que son agrupados por esta propuesta han desaparecido en sus reglamentaciones de desarrollo específicos, sustituyéndose por un capítulo específico dedicado a las regiones ultraperiféricas, que contiene tres artículos 46, 47 y 48. Este capítulo obliga a nuestra Administración nacional a incluir todas esas disposiciones específicas que considere oportuno seguir manteniendo dentro del plan nacional y regional que España habrá de presentar y negociar con la Comisión Europea.

Así, el artículo 46 señala que España habrá de preparar, como parte de su plan, medidas para hacer frente a las limitaciones permanentes y estructurales de las regiones ultraperiféricas de la Unión, que obstaculizan gravemente su desarrollo, tal como se reconoce en el artículo 349 del TFUE para abordar los objetivos siguientes:

1) seguridad alimentaria, la vivienda, el transporte sostenible, la gestión del agua y los residuos, la energía, el empleo y la movilidad laboral —en particular, de los jóvenes—, la descarbonización, la circularidad, la educación y las capacidades, la inclusión social, la migración, la resiliencia frente al cambio climático y la adaptación a este, la protección del medio ambiente, la economía azul, el acceso a la asistencia sanitaria, la energía, el transporte sostenible y la conectividad digital, y el desarrollo económico, que incluya una economía azul sostenible y diversificada (es decir, los ámbitos recogidos actualmente en el Feder, el FSE+, el programa LIFE, el Fondo de Asilo, Migración e Integración entre otros más).

2) garantizar el suministro de productos esenciales para el consumo, la transformación o su utilización como insumos agrícolas (es decir, lo que actualmente está recogido en el Régimen Específico de Abastecimiento —REA—);

3) asegurar el futuro y el desarrollo a largo plazo de la agricultura, la pesca y la acuicultura (es decir, lo que ahora está recogido en el Posei y en las normas específicas para pesca y acuicultura).

A su vez, los artículos 47 y 48 desarrollan, respectivamente, las cuestiones relacionadas con el REA y con el apoyo específico a la producción y transformación agrícolas locales (resto del Posei).

De este modo, las previsiones específicas que estaban recogidas en el Feder para la dotación adicional específica RUP, para la concentración temática específica RUP y para las inversiones admisibles en las RUP dependerán a partir de ahora de su inclusión o no en el plan nacional y regional.

Del mismo modo, la dotación adicional específica del Fondo Social Europeo+ dependerá igualmente de su inclusión o no en el plan nacional y regional.



Las disposiciones agrícolas específicas recogidas actualmente en los reglamentos relativos al Posei habrán de estar igualmente incluidas en el plan nacional y regional al igual que las disposiciones pesqueras y acuícolas.

Por último, el resto de políticas como la migración, la seguridad o el medio ambiente que también contenían disposiciones específicas para las RUP en su articulado o, al menos, en sus considerandos, también quedarán integradas en el plan nacional y regional que el Estado haya de presentar.

Y todo ello, independientemente de la ausencia en la normativa propuesta de contribuciones financieras específicas para las RUP en el nuevo marco financiero plurianual, que no son objeto de este informe.

6. Conclusión

Por todo ello, si bien la propuesta recoge un cumplimiento formal de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad porque no menoscaba las competencias autonómicas, sin embargo, supone un retroceso y un riesgo para la aplicación del derecho europeo en Canarias, puesto que la financiación europea específicamente dirigida a la cohesión económica, social y territorial, la agricultura y las zonas rurales, la pesca y el mar, la prosperidad y la seguridad para el período 2028-2034 destinada a paliar las dificultades de las regiones ultraperiféricas como Canarias, no está claramente diferenciada y determinada a nivel europeo, tal y como exige el artículo 349 del TFUE, sino que se deja en manos de un reparto estatal en el marco de un plan conjunto con otras políticas.

Parlamento de Canarias, a 3 de noviembre de 2025. Alicia Vanoostende Simili. Socorro Beato Castellano. Luz Reverón González. Luis Alberto Campos Jiménez. Melodie Mendoza Rodríguez.

**11L/CSUE-0172 Relativo a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» para el periodo 2028-2034, se establecen sus normas de participación y difusión, y se deroga el Reglamento (UE) 2021/695 [COM (2025) 543] {SEC (2025) 555} {SWD (2025) 555} {SWD (2025) 556}**

Presidencia

Emitido dictamen por el Parlamento de Canarias, a instancias de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales, para la verificación del cumplimiento del principio de subsidiariedad por parte de una iniciativa legislativa de la Unión Europea, relativo a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» para el periodo 2028-2034, se establecen sus normas de participación y difusión, y se deroga el Reglamento (UE) 2021/695 [COM (2025) 543] {SEC (2025) 555} {SWD (2025) 555} {SWD (2025) 556}, por la ponencia creada al efecto, al amparo de lo previsto en el artículo 53.5 del Reglamento de la Cámara, con fecha 3 de noviembre de 2025, de conformidad con lo establecido en los artículos 53.6 y 112 del Reglamento del Parlamento, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 3 de noviembre de 2025. EL SECRETARIO GENERAL (*P. D. de la presidenta, Resolución de 30 de junio de 2023, BOPC núm. 8, de 3/7/2023*), Salvador Iglesias Machado.

**DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS Y ACCIÓN EXTERIOR DEL PARLAMENTO DE CANARIAS, A INSTANCIAS DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA DE LAS CORTES GENERALES, PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD POR PARTE DE UNA INICIATIVA LEGISLATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA**

Título del documento:	Iniciativa legislativa UE: Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el programa marco de investigación e innovación “Horizonte Europa” para el periodo 2028-2034 y se establecen sus normas de participación y difusión, y se deroga el reglamento (UE) 2021/695
Referencia:	COM (2025) 543 final de 16/7/2025 (CSUE-172)

I. ANTECEDENTES:

1. Con fecha 16 de septiembre de 2025, RE 202510000010036, se recibió en la Cámara correo electrónico de la Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales, por el que, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la citada Comisión Mixta remitió al Parlamento de Canarias, Propuesta de Reglamento del del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación “Horizonte Europa” para el período 2028-2034 y se establecen sus normas de participación y difusión, y se deroga el Reglamento (UE)2021/695 –COM (2025) 543, de 16/7/2025, para su conocimiento y, en su caso, emisión de dictamen motivado sobre el eventual incumplimiento del principio de subsidiariedad.
2. De conformidad con lo previsto en el artículo 53.3 del Reglamento del Parlamento de Canarias, la comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior elaborará y aprobará, dentro del plazo de cuatro semanas fijado por el artículo 6.2 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, modificada por la 24/2009, de 22 de diciembre, para su adaptación al Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007 y por la 38/2010, de 20 de diciembre,

para reforzar las funciones asignadas a dicha Comisión Mixta, así como el artículo Octavo. 3 de la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, 628/000006 (S) de 27 de mayo de 2010, sobre reforma de la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de septiembre de 1995, sobre desarrollo de la *Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea*, para su adaptación a las previsiones del Tratado de Lisboa y de la Ley 24/2009, publicado en el *Boletín Oficial de las Cortes Generales* núm. 312 de 8 de junio de 2010, un dictamen en el que quedará fijada la posición de la Cámara y de cuya aprobación se dará cuenta al pleno.

3. La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de julio de 2023, adoptó el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

“17. ASUNTOS TRATADOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

17.1. Asuntos remitidos por la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales.

Acuerdo:

*“La Mesa de la Cámara, con el objeto de determinar, dentro de las posibilidades que al efecto, dispone el artículo 53 del Reglamento de la Cámara, el concreto procedimiento parlamentario que haya de seguirse para la emisión del parecer del Parlamento de Canarias respecto del cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad por parte de las iniciativas legislativas comunitarias europeas que sean objeto de remisión al mismo por las Cortes Generales, en los términos de lo previsto en la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, en su versión modificada para su adaptación al Tratado de Lisboa de 13 de abril de 2007, oída la Junta de Portavoces en su reunión del día de la fecha, acuerda:*

*1. Constituir la ponencia a que se refiere el artículo 53.5 del Reglamento de la Cámara, que, con carácter general y en tanto en cuanto no se determine lo contrario, será la competente para conocer y, en su caso, elaborar para su posterior remisión a las Cortes Generales, dictamen motivado en relación con el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad por parte de los proyectos legislativos europeos que sean objeto de consulta por aquellas”.*

4. Con fecha 14 de octubre de 2025, el Gobierno de Canarias presentó informe a la iniciativa legislativa de la UE sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación “Horizonte Europa” para el período 2028-2034 y se establecen sus normas de participación –COM (2025) 543.

5. Finalmente, la ponencia, en su reunión de 3 de noviembre del año en curso, ha analizado el texto de la iniciativa legislativa europea remitida por la Comisión Mixta para la Unión Europea, a resultas de lo cual, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 53.5 del Reglamento de la Cámara y del acuerdo de la Mesa antes referido, ha elaborado el siguiente:

## II. DICTAMEN

### 1. Base jurídica y tipo de competencia:

#### a) Objetivos de la propuesta legislativa

La propuesta forma parte del amplio paquete para el próximo marco financiero plurianual (MFP) correspondiente al período 2028-2034, presentada por la Comisión el pasado 16 de julio.

Este paquete legislativo va más allá de las modificaciones que se han ido consolidando en los anteriores periodos legislativos y pretende ser mucho más ambicioso para abordar los numerosos retos a los que se enfrenta la Unión en estos momentos. El presupuesto pretende garantizar que las inversiones de la UE estén en consonancia con las prioridades políticas de la Unión. Con carácter general, el presupuesto crece tanto en términos absolutos como en términos relativos al alcanzar la cifra de 1,98 millones de euros, para todo el período, que es equivalente al 1,26% de la Renta Nacional Bruta (RNB) de los Estados miembros.

En cuanto a los ingresos, la Comisión propone nuevos recursos propios, incluyendo ajustes en los ya propuestos en 2023 así como otros nuevos, de modo que las aportaciones de la renta de los Estados se mantengan estables y se disponga, en cualquier caso, de un presupuesto acorde con las necesidades de la UE, incluida la de reembolso de los préstamos de *New Generation EU*.

En el lado de los gastos, el próximo presupuesto de la UE presentado por la Comisión Europea estará basado en prioridades superando la división en rúbricas para políticas sectoriales, de modo que puedan establecerse complementariedades entre unos y otros programas para financiar prioridades concretas de la Unión.

Esta iniciativa legislativa forma parte del conjunto de programas incluidos en la rúbrica dos del nuevo presupuesto, dedicada a la “*Competitividad, prosperidad y seguridad*” y se aplicará en estrecha colaboración con el Fondo Europeo de Competitividad. La Comisión europea pretende dar un poderoso impulso a la competitividad de Europa y, de este modo, garantizar unas cadenas de suministro seguras, intensificar la innovación y liderar la carrera mundial hacia una tecnología limpia e inteligente. Se trata de que las inversiones en este ámbito contribuyan a crear una base industrial más sólida, un mercado único más integrado y una Europa unida que aprovecha su fortaleza.

Por consiguiente, el objetivo del reglamento es establecer el Programa Marco de Investigación e Innovación “*Horizonte Europa*” para el período 2028-2034. Este programa busca reforzar la competitividad, la base científica y tecnológica de la Unión Europea y abordar los retos mundiales mediante una investigación e innovación excelentes. Además, tiene como objetivos específicos los siguientes:

- Crear conocimientos y capacidades de alta calidad y carreras atractivas para los investigadores.
- Aumentar la investigación colaborativa, el intercambio de conocimientos y la valorización a escala internacional y de la UE.
- Armonizar las prioridades de la UE, nacionales y regionales para crear un ecosistema paneuropeo de investigación e innovación.
- Mejorar la posición de la Unión en el ámbito de la innovación, prestando especial atención a las tecnologías estratégicas y a la innovación disruptiva, facilitar la difusión de soluciones innovadoras a través de actividades de normalización para fomentar la competitividad y abordar retos sociales clave.
- Reducir el riesgo y movilizar más financiación privada para investigación e innovación, en particular con vistas a apoyar la tecnología profunda y la expansión de las empresas emergentes y las pymes innovadoras.
- Contribuir al incremento de la inversión pública y privada en investigación e innovación de los Estados miembros, contribuyendo así a lograr un gasto total de al menos el 3% del PIB de la UE en investigación y desarrollo.

### **b) Ámbito competencial**

El Programa Marco de Investigación e Innovación “Horizonte Europa” para el período 2028-2034 se basa en los títulos competenciales de “*Industria*” e “*Investigación y desarrollo tecnológico y espacio*” del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE): artículos 173 apartado 3; artículo 182 apartado 1; artículo 183 y artículo 188 párrafo segundo. Asimismo, se basa en el artículo 322, apartado 1, letra a) del TFUE.

Así, por lo que respecta a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, el artículo 149 de la Constitución española concede competencia exclusiva al Estado en lo relativo al fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. Asimismo, el artículo 44 de la Constitución española dispone que los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.

Por otro lado, el artículo 37 del Estatuto de Autonomía de Canarias señala que los poderes públicos canarios asumen como principios rectores de su política, entre otros, el impulso de la investigación científica y técnica de calidad y de la creatividad artística, la incorporación de procesos innovadores, el acceso a la información y a las nuevas tecnologías. Además, el artículo 135 de esta misma norma establece que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materia de investigación que incluye, en todo caso: a) La creación, organización, régimen de funcionamiento, seguimiento, control y acreditación de los mismos, b) El establecimiento de líneas propias de investigación y el seguimiento, control y evaluación de los proyectos científicos o tecnológicos; c) La regulación y gestión de las becas y demás ayudas convocadas y financiadas por la Comunidad Autónoma de Canarias; d) La regulación y la formación profesional del personal investigador y de apoyo a la investigación; e) La difusión de la ciencia y la transferencia de resultados; f) El fomento de la investigación científica, el desarrollo y la investigación tecnológica.

La iniciativa, por tanto, afecta a competencias estatales y autonómicas.

En particular, la propuesta que se informa, se considera que no menoscaba las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

## **2. Análisis de las exigencias derivadas del principio de subsidiariedad**

Tal y como determina el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (versión consolidada), en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva la Unión intervendrá solo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.

Por otra parte, los criterios que han sido definidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para proceder al examen de un acto comunitario desde la óptica del respeto al principio de subsidiariedad son dos: 1) determinar, en primer lugar, si la competencia a la que recurre el legislador comunitario es exclusiva de la Unión y, a continuación, en el caso en que no fuera una competencia exclusiva, 2) determinar si el objetivo de la acción adoptada puede lograrse mejor a nivel comunitario. Al primer criterio ya se ha respondido, de manera que procede referirse al segundo.

El Protocolo n.º 2, publicado en el *Diario Oficial de la Unión Europea*, n.º 115 de 9 de mayo de 2008 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, establece en su artículo 5 lo siguiente:

*“Los proyectos de actos legislativos se motivarán en relación con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Todo proyecto de acto legislativo debería incluir una ficha con pormenores que permitan evaluar el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Esta ficha debería incluir elementos que permitan evaluar el impacto financiero y, cuando se trate de una Directiva, sus efectos en la normativa que han de desarrollar los Estados miembros, incluida, cuando proceda, la legislación regional. Las razones que justifiquen la conclusión de que un objetivo de la Unión puede alcanzarse mejor en el plano de esta se sustentarán en indicadores cualitativos y, cuando sea posible, cuantitativos. Los proyectos de actos legislativos tendrán debidamente en cuenta la necesidad de que cualquier carga, tanto financiera como administrativa, que recaiga sobre la Unión, los Gobiernos nacionales, las autoridades regionales o locales, los agentes económicos o los ciudadanos sea lo más reducida posible y proporcional al objetivo que se desea alcanzar”.*

El principio de subsidiariedad establece que solo podrán tomarse medidas a nivel de la UE cuando sean más eficaces que la actuación individual de los Estados miembros a nivel nacional, regional o local. El mecanismo de control de la subsidiariedad, que se aplica en los ámbitos de competencia compartida entre la UE y los Estados miembros, permite a los parlamentos nacionales manifestar su posición cuando consideren que una iniciativa legislativa de la UE no respeta este principio, posición que ha de ser tenida en cuenta por la Comisión Europea.

En lo que a la presente iniciativa se refiere, en virtud del artículo 4, apartado 3, del TFUE, la Unión tiene competencias compartidas en este ámbito. En primer lugar, al mejorar la colaboración y la integración entre las partes interesadas y las fronteras, la financiación de la UE rompe las barreras nacionales para responder a desafíos comunes. En segundo lugar, al abordar las deficiencias del mercado y las condiciones de inversión subóptimas, y generar un impacto económico, la UE mejora la resiliencia económica, moviliza fondos privados, atrae capital, impulsa la productividad en toda la UE y apoya proyectos beneficiosos desde el punto de vista económico que, de lo contrario, podrían no llevarse a cabo. Apoya la competencia en toda la UE, lo que permite seleccionar las mejores ideas científicas e innovadoras del conjunto de la Unión. En tercer lugar, al reforzar la direccionalidad de la inversión y la puesta en común de recursos, la UE puede abordar mejor los retos a escala de la Unión y promover prioridades compartidas, como la doble transición ecológica y digital.

Este enfoque a nivel de la UE apoya las innovaciones de vanguardia y los objetivos estratégicos, superando las limitaciones en materia de coordinación entre los Estados miembros. Como resultado, no solo se eleva el nivel de excelencia y se da visibilidad a la I+i de vanguardia, sino que, además, se fomenta la movilidad transnacional y se consigue atraer a los mejores talentos a escala mundial. Un programa a nivel de la Unión es la opción más indicada para asumir actividades de I+i de alto riesgo y a largo plazo, y así compartir el riesgo y hacer posibles una amplitud de alcance y unas economías de escala. Por otra parte, se perseguirá la creación de vínculos con iniciativas nacionales, en particular en el ámbito de la innovación.

Un programa de estas características ofrece la posibilidad de apalancar inversiones públicas y privadas adicionales en I+i, contribuir al refuerzo del panorama de la I+i en Europa y acelerar la comercialización y la difusión de la innovación. Además, los programas a nivel de la Unión pueden servir de apoyo para la formulación de políticas y los objetivos políticos.

Consecuentemente, se aprecia que la iniciativa cumple con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

### **3. Carga financiera y administrativa**

No se acompaña en la documentación remitida por las Cortes Generales un análisis de las eventuales cargas, si es que las hay, para las autoridades nacionales, regionales o locales, agentes económicos o ciudadanos, derivadas de la nueva regulación, con lo cual no es posible pronunciarse al respecto.

### **4. Consideración de los aspectos locales y regionales en la consulta y análisis del impacto**

El Parlamento de Canarias no ha sido objeto de consulta previa a la elaboración de la propuesta que hoy se somete a su valoración en el marco del mecanismo de control del principio de subsidiariedad. Tampoco nos consta que lo haya sido el Gobierno de Canarias.

### **5. Otras observaciones**

La iniciativa legislativa incide en medidas específicas adoptadas en el marco del artículo 349 del TFUE que afectan a Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea, puesto que el programa marco *Horizonte Europa*, en la actualidad, contiene disposiciones específicas para las regiones ultraperiféricas, como Canarias.

En el caso que nos ocupa, la especificidad consistente en que las regiones ultraperiféricas pueden ser seleccionadas como coordinadores en el marco del componente “*Ampliación*” del Programa *Horizonte Europa* se mantiene.

Dicho componente tiene como objetivo aumentar la participación de los países menos representados en actividades de investigación e innovación, promoviendo una cobertura geográfica más amplia en proyectos colaborativos excelentes. Solo las entidades jurídicas establecidas en los países de ampliación o en transición, mencionados en el artículo 19 de la propuesta, todos ellos países, y no regiones, pueden ser seleccionadas como coordinadores de este componente. Las regiones ultraperiféricas pueden serlo también, independientemente de que su país forme parte o no de los países elegibles.

Además, las regiones ultraperiféricas no están sujetas a la previsión de que, a partir de 2030, el acceso a las medidas de desarrollo de capacidades estará limitado a los países de ampliación que hayan incrementado su inversión pública en investigación y desarrollo en comparación con el año anterior.

En el siguiente cuadro se reflejan las diferencias entre la legislación vigente y la propuesta:



MFP 2021-2027	MFP 2028-2034
Reglamento (UE) 2021/695 – Programa Marco de Investigación e Innovación “Horizonte Europa”	COM (2025) 543 - Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación “Horizonte Europa” para el período 2028-2034 y se establecen sus normas de participación
Considerando 52 Cuando proceda, el Programa debe tener en cuenta las características específicas de las regiones ultraperiféricas que se especifican en el artículo 349 del TFUE y en consonancia con la Comunicación de la Comisión, “Una asociación estratégica renovada y más fuerte con las regiones ultraperiféricas de la UE”, que contó con la aprobación del Consejo. Artículo 2 (17) Definición de “países de ampliación” o “países con bajo rendimiento en I+i” –países cuyas entidades jurídicas deban estar establecidas en su territorio para poder optar a ser coordinadores dentro del componente «ampliar la participación y difundir la excelencia» de la parte «Ampliar la participación y fortalecer el EEI» del Programa; entre los Estados miembros, esos países son Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal y Rumanía, para toda la duración del Programa; para los países asociados, significará la lista de países admisibles tal como se determina sobre la base de un indicador y que se publica en el programa de trabajo. Las entidades jurídicas de las regiones ultraperiféricas definidas en el artículo 349 del TFUE también podrán ser seleccionadas, sin restricción alguna, como coordinadores en el marco de este componente;	Artículo 19 (4) En el caso de los países asociados, las entidades jurídicas de la lista de países admisibles según se determina sobre la base de un indicador y que se publica en el programa de trabajo podrán ser seleccionadas, sin restricción alguna, como coordinadores en el marco de este componente. Las entidades jurídicas de las regiones ultraperiféricas, tal como se definen en el artículo 349 del TFUE, también podrán ser seleccionadas como coordinadores en el marco de este componente y estarán sujetas a las mismas normas que se aplican a los países de ampliación con arreglo al presente artículo, con excepción del apartado 7. (Dicho apartado 7 establece lo siguiente: A partir de 2030, el acceso a las medidas de desarrollo de capacidades se limitará a los países de ampliación que hayan aumentado su gasto real de inversión pública en investigación y desarrollo en el último año para el que se disponga de datos en comparación con el año anterior).

6. Conclusión

Por todo ello, se estima favorablemente la propuesta que recoge el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, no menoscaba las competencias autonómicas, y atiende a las especificidades de las regiones ultraperiféricas en cumplimiento del artículo 349 TFUE.

Parlamento de Canarias, a 3 de noviembre de 2025. Alicia Vanoostende Simili. Socorro Beato Castellano. Luz Reverón González. Luis Alberto Campos Jiménez. Melodie Mendoza Rodríguez.

**11L/CSUE-0173 *Propuesta de Decisión del Consejo que establece el Programa Específico por el que se ejecuta el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» para el periodo 2028-2034, se establecen las normas de participación y difusión en el marco de dicho Programa, y se deroga la Decisión (UE) 2021/764 [COM (2025) 544] {SEC (2025) 555} {SWD (2025) 555} {SWD (2025) 556}***

Presidencia

Emitido dictamen por el Parlamento de Canarias, a instancias de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales, para la verificación del cumplimiento del principio de subsidiariedad por parte de una iniciativa legislativa de la Unión Europea, relativo a la propuesta de Decisión del Consejo que establece el Programa Específico por el que se ejecuta el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» para el periodo 2028-2034, se establecen las normas de participación y difusión en el marco de dicho Programa, y se deroga la Decisión (UE) 2021/764 [COM (2025) 544] {SEC (2025) 555} {SWD (2025) 555} {SWD (2025) 556}, por la ponencia creada al efecto, al amparo de lo previsto en el artículo 53.5 del Reglamento de la Cámara, con fecha 3 de noviembre de 2025, de conformidad con lo establecido en los artículos 53.6 y 112 del Reglamento del Parlamento, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 3 de noviembre de 2025. EL SECRETARIO GENERAL (*P. D. de la presidenta, Resolución de 30 de junio de 2023, BOPC núm. 8, de 3/7/2023*), Salvador Iglesias Machado.

**DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS Y ACCIÓN EXTERIOR DEL PARLAMENTO DE CANARIAS, A INSTANCIAS DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA DE LAS CORTES GENERALES, PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD POR PARTE DE UNA INICIATIVA LEGISLATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA**

Título del documento:	Iniciativa legislativa UE: Propuesta de Decisión del Consejo que establece el Programa Específico por el que se ejecuta el Programa Marco de Investigación e Innovación “Horizonte Europa” para el período 2028-2034 y se establecen sus normas de participación y difusión en el marco de dicho programa, y se deroga la decisión (UE) 2021/764 [COM (2025)544] {SEC(2025) 555} {SWD (2025) 555} {SWD (2025) 556}.
Referencia:	COM (2025) 544 final de 16/7/2025 (CSUE-173)

## I. ANTECEDENTES:

1. Con fecha 16 de septiembre de 2025, RE 202510000010037, se recibió en la Cámara correo electrónico de la Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales, por el que, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la citada Comisión Mixta remitió al Parlamento de Canarias, Propuesta de Decisión del Consejo que establece el Programa Específico por el que se ejecuta el Programa Marco de Investigación e Innovación “Horizonte Europa” para el período 2028-2034 y se establecen sus normas de participación y difusión en el marco de dicho programa, y se deroga la Decisión (UE) 2021/764[COM (2025)544] {SEC(2025) 555} {SWD (2025) 555} {SWD (2025) 556}. –COM (2025) 544 de 16/7/2025.

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 53.3 del Reglamento del Parlamento de Canarias, la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior elaborará y aprobará, dentro del plazo de cuatro semanas fijado por el artículo 6.2 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, modificada por la 24/2009, de 22 de diciembre, para su adaptación al Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007 y por la 38/2010, de 20 de diciembre, para reforzar las funciones asignadas a dicha Comisión Mixta, así como el artículo Octavo. 3 de la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, 628/000006 (S) de 27 de mayo de 2010, sobre reforma de la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de septiembre de 1995, sobre desarrollo de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, para su adaptación a las previsiones del Tratado de Lisboa y de la Ley 24/2009, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales núm. 312 de 8 de junio de 2010, un dictamen en el que quedará fijada la posición de la Cámara y de cuya aprobación se dará cuenta al pleno.

3. La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de julio de 2023, adoptó el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

“17. ASUNTOS TRATADOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

17.1. Asuntos remitidos por la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales.

Acuerdo:

“La Mesa de la Cámara, con el objeto de determinar, dentro de las posibilidades que al efecto, dispone el artículo 53 del Reglamento de la Cámara, el concreto procedimiento parlamentario que haya de seguirse para la emisión del parecer del Parlamento de Canarias respecto del cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad por parte de las iniciativas legislativas comunitarias europeas que sean objeto de remisión al mismo por las Cortes Generales, en los términos de lo previsto en la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, en su versión modificada para su adaptación al Tratado de Lisboa de 13 de abril de 2007, oída la Junta de Portavoces en su reunión del día de la fecha, acuerda:

1. Constituir la ponencia a que se refiere el artículo 53.5 del Reglamento de la Cámara, que, con carácter general y en tanto en cuanto no se determine lo contrario, será la competente para conocer y, en su caso, elaborar para su posterior remisión a las Cortes Generales, dictamen motivado en relación con el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad por parte de los proyectos legislativos europeos que sean objeto de consulta por aquellas”.

4. Con fecha 21 de octubre de 2025, el Gobierno de Canarias presentó informe a la iniciativa legislativa de la UE sobre, Propuesta de Decisión del Consejo que establece el Programa Específico por el que se ejecuta el Programa Marco de Investigación e Innovación “Horizonte Europa” para el período 2028-2034 y se establecen sus normas de participación y difusión2034 y se establecen sus normas de participación y difusión en el Marco de dicho Programa, y se deroga la Decisión (UE) 2021/764[COM (2025)544] {SEC(2025) 555} {SWD (2025) 555} {SWD (2025) 556}. –COM (2025) 544 de 16/7/2025 –COM (2025) 544 de 16/7/2025.

5. Finalmente, la ponencia, en su reunión de 3 de noviembre del año en curso, ha analizado el texto de la iniciativa legislativa europea remitida por la Comisión Mixta para la Unión Europea, a resultas de lo cual, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 53.5 del Reglamento de la Cámara y del acuerdo de la Mesa antes referido, ha elaborado el siguiente:

## II. DICTAMEN

### 1. Base jurídica y tipo de competencia:

#### a) Objetivos de la propuesta legislativa

La presente propuesta forma parte del amplio paquete para el próximo marco financiero plurianual (MFP) correspondiente al período 2028-2034 presentada por la Comisión el pasado 16 de julio.

Este paquete legislativo va más allá de las modificaciones que se han ido consolidando en los anteriores periodos legislativos y pretende ser mucho más ambicioso para abordar los numerosos retos a los que se enfrenta la Unión en estos momentos. La Comisión Europea presenta un nuevo enfoque disruptivo, basado en la simplificación de rúbricas y programas, más ajustado a prioridades y objetivos de la UE y orientado a resultados. El presupuesto pretende garantizar que las inversiones de la UE estén en consonancia con las prioridades políticas de la Unión. Con carácter general, el presupuesto crece tanto en términos absolutos como en términos relativos al alcanzar la cifra de 1,98 millones de euros, para todo el período, que es equivalente al 1,26% de la Renta Nacional Bruta (RNB) de los Estados miembros.

En cuanto a la parte de los ingresos, la Comisión propone nuevos recursos propios, incluyendo ajustes en los ya propuestos en 2023 así como otros nuevos, de modo que las aportaciones de la renta de los Estados se mantengan estables y se disponga, en cualquier caso, de un presupuesto acorde con las necesidades de la UE, incluida la de reembolso de los préstamos de New Generation EU.

En el lado de los gastos, el próximo presupuesto de la UE presentado por la Comisión Europea estará basado en prioridades superando la división en rúbricas para políticas sectoriales, de modo que puedan establecerse complementariedades entre unos y otros programas para financiar prioridades concretas de la Unión.

La iniciativa legislativa que nos ocupa forma parte del conjunto de programas incluidos en la rúbrica dos del nuevo presupuesto, dedicada a la “Competitividad, prosperidad y seguridad” y se aplicará en estrecha colaboración con el Fondo Europeo de Competitividad. La Comisión Europea pretende dar un poderoso impulso a la competitividad de Europa y, de este modo, garantizar unas cadenas de suministro seguras, intensificar la innovación y liderar la carrera mundial en pos de una tecnología limpia e inteligente. Se trata de que las inversiones en este ámbito contribuyan a crear una base industrial más sólida, un mercado único más integrado y una Europa unida que aprovecha su fortaleza.

Por consiguiente, el objetivo de la Decisión del Consejo es ejecutar el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» de la UE para el período 2028-2034, y las partes pertinentes de investigación e innovación del Fondo Europeo de Competitividad.

### **b) Ámbito competencial**

El Programa Específico establecido por la Decisión que nos ocupa se basa en el artículo 182, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Dicho artículo establece que el Programa Marco debe ejecutarse mediante programas específicos que precisen las modalidades de su realización, fijen su duración y prevean los medios que se estimen necesarios.

Por lo que respecta a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, el artículo 149 de la Constitución española concede competencia exclusiva al Estado en lo relativo al fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. Asimismo, el artículo 44 de la Constitución Española dispone que los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.

Por otro lado, el artículo 37 del Estatuto de Autonomía de Canarias señala que los poderes públicos canarios asumen como principios rectores de su política, entre otros, el impulso de la investigación científica y técnica de calidad y de la creatividad artística, la incorporación de procesos innovadores, el acceso a la información y a las nuevas tecnologías. Además, el artículo 135 del Estatuto establece que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materia de investigación que incluye, en todo caso: a) La creación, organización, régimen de funcionamiento, seguimiento, control y acreditación de los mismos, b) El establecimiento de líneas propias de investigación y el seguimiento, control y evaluación de los proyectos científicos o tecnológicos; c) La regulación y gestión de las becas y demás ayudas convocadas y financiadas por la Comunidad Autónoma de Canarias; d) La regulación y la formación profesional del personal investigador y de apoyo a la investigación; e) La difusión de la ciencia y la transferencia de resultados; f) El fomento de la investigación científica, el desarrollo y la investigación tecnológica.

La iniciativa, por tanto, afecta a competencias estatales y autonómicas.

En particular, la propuesta que se informa, se considera que no menoscaba las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

## **2. Análisis de las exigencias derivadas del principio de subsidiariedad**

Tal y como determina el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (versión consolidada), en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva la Unión intervendrá solo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.

Por otra parte, los criterios que han sido definidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para proceder al examen de un acto comunitario desde la óptica del respeto al principio de subsidiariedad son dos: 1) determinar, en primer lugar, si la competencia a la que recurre el legislador comunitario es exclusiva de la Unión y, a continuación, en el caso en que no fuera una competencia exclusiva, 2) determinar si el objetivo de la acción adoptada puede lograrse mejor a nivel comunitario. Al primer criterio ya se ha respondido, de manera que procede referirse al segundo.

El Protocolo n.º 2, publicado en el *Diario Oficial de la Unión Europea*, n.º 115 de 9 de mayo de 2008 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, establece en su artículo 5 lo siguiente:

*“Los proyectos de actos legislativos se motivarán en relación con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Todo proyecto de acto legislativo debería incluir una ficha con pormenores que permitan evaluar el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Esta ficha debería incluir elementos que*

*permitan evaluar el impacto financiero y, cuando se trate de una Directiva, sus efectos en la normativa que han de desarrollar los Estados miembros, incluida, cuando proceda, la legislación regional. Las razones que justifiquen la conclusión de que un objetivo de la Unión puede alcanzarse mejor en el plano de esta se sustentarán en indicadores cualitativos y, cuando sea posible, cuantitativos. Los proyectos de actos legislativos tendrán debidamente en cuenta la necesidad de que cualquier carga, tanto financiera como administrativa, que recaiga sobre la Unión, los Gobiernos nacionales, las autoridades regionales o locales, los agentes económicos o los ciudadanos sea lo más reducida posible y proporcional al objetivo que se desea alcanzar”.*

El principio de subsidiariedad establece que solo podrán tomarse medidas a nivel de la UE cuando sean más eficaces que la actuación individual de los Estados miembros a nivel nacional, regional o local. El mecanismo de control de la subsidiariedad, que se aplica en los ámbitos de competencia compartida entre la UE y los Estados miembros, permite a los parlamentos nacionales manifestar su posición cuando consideren que una iniciativa legislativa de la UE no respeta este principio, posición que ha de ser tenida en cuenta por la Comisión Europea.

En lo que a la presente iniciativa se refiere, en virtud del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Programa Marco debe ejecutarse mediante programas específicos que precisen las modalidades de su realización y prevean los medios que se estimen necesarios.

En lo que al principio de proporcionalidad se refiere, la iniciativa comprende modificaciones limitadas y específicas de la legislación actual, necesarias para el buen funcionamiento de la actual organización común de mercados.

Consecuentemente, se aprecia que la iniciativa cumple formalmente con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

### **3. Carga financiera y administrativa**

No se acompaña en la documentación remitida por las Cortes Generales un análisis de las eventuales cargas, si es que las hay, para las autoridades nacionales, regionales o locales, agentes económicos o ciudadanos, derivadas de la nueva regulación, con lo cual no es posible pronunciarse al respecto.

### **4. Consideración de los aspectos locales y regionales en la consulta y análisis del impacto**

El Parlamento de Canarias no ha sido objeto de consulta previa a la elaboración de la propuesta que hoy se somete a su valoración en el marco del mecanismo de control del principio de subsidiariedad. Tampoco nos consta que lo haya sido el Gobierno de Canarias.

### **5. Otras observaciones**

La iniciativa legislativa incide en medidas específicas adoptadas en el marco del artículo 349 del TFUE que afectan a Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea, puesto que, la Decisión del Consejo en la actualidad, contiene disposiciones específicas para las regiones ultraperiféricas, como Canarias.

Si bien es verdad que la Decisión del Consejo en vigor mencionaba expresamente a las regiones ultraperiféricas, junto a los países de la ampliación (en el contexto de la 1+D+i) y la propuesta actual no recoge dicha mención, también lo es que la propuesta de Reglamento que establece el programa Horizonte Europa para 2028-2034 mantiene la especificidad consistente en que las regiones ultraperiféricas pueden ser seleccionadas como coordinadores en el marco del componente “Ampliación”.

Dicho componente tiene como objetivo aumentar la participación de los países menos representados en actividades de investigación e innovación, promoviendo una cobertura geográfica más amplia en proyectos colaborativos excelentes. Solo las entidades jurídicas establecidas en los países de ampliación o en transición, mencionados en el artículo 19 de la propuesta, todos ellos países y no regiones, pueden ser seleccionadas como coordinadores de este componente. Las regiones ultraperiféricas pueden serlo también, independientemente de que su país forme parte o no de los países elegibles.

Además, las regiones ultraperiféricas no están sujetas a la previsión de que, a partir de 2030, el acceso a las medidas de desarrollo de capacidades estará limitado a los países de ampliación que hayan incrementado su inversión pública en investigación y desarrollo en comparación con el año anterior.

En el siguiente cuadro se reflejan las diferencias entre la legislación vigente y la propuesta:



MPF 2021-2027	MPF 2028-2034
Decisión (UE) 2021/764 del Consejo –Programa Específico por el que se ejecuta el Programa Marco de Investigación e Innovación “Horizonte Europa”	COM (2025) 544 - Propuesta de Decisión del Consejo que establece el Programa Específico por el que se ejecuta el Programa Marco de Investigación e Innovación “Horizonte Europa” para el período 2028-2034 y se establecen sus normas de participación y difusión
Pie de página (14) Por “economía azul sostenible” se entiende todas las actividades económicas sectoriales e intersectoriales en todo el mercado único relacionadas con los océanos, los mares, las costas y las aguas interiores, que abarquen las regiones ultraperiféricas de la Unión y los países sin litoral, incluidos los sectores emergentes y los bienes y servicios no de mercado, y sean coherentes con la legislación medioambiental de la Unión. 1.Ampliar la participación y difundir la excelencia –Primer párrafo Reducir las disparidades y divisiones existentes en los resultados en materia de I+D+i mediante el intercambio de conocimientos y experiencias en el conjunto de la Unión ayudará a los países en que se aplique la ampliación y a las regiones ultraperiféricas de la Unión a alcanzar una posición competitiva en las cadenas de valor mundiales y a la Unión a beneficiarse plenamente de todo el potencial de la  +  para todos los Estados miembros.	

6. Conclusión

Por todo ello, aunque la propuesta cumple formalmente con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, omite la mención expresa a las regiones ultraperiféricas como lo es Canarias y exige el artículo 349 TFUE y que, a diferencia de esta iniciativa, sí recogía la vigente Decisión (UE) 2021/764 del Consejo relativa al Programa Específico por el que se ejecuta el Programa Marco de Investigación e Innovación “Horizonte Europa” en la misma materia, laguna que se recomienda sea subsanada para proceder a la inclusión expresa de estas regiones singulares.

Parlamento de Canarias, a 3 de noviembre de 2025. Alicia Vanoostende Simili. Socorro Beato Castellano. Luz Reverón González. Luis Alberto Campos Jiménez. Melodie Mendoza Rodríguez.

**11L/CSUE-0175 *Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo Europeo de Competitividad (FEC), incluido el programa específico de actividades de investigación e innovación en materia de defensa, por el que se derogan los Reglamentos (UE) 2021/522, (UE) 2021/694, (UE) 2021/697 y (UE) 2021/783 y se modifican los Reglamentos (UE) 2021/696, (UE) 2023/588 y (UE) [EDIP] [COM (2025) 555] {SEC (2025) 555} {SWD (2025) 555} {SWD (2025) 556}***

Presidencia

Emitido dictamen por el Parlamento de Canarias, a instancias de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales, para la verificación del cumplimiento del principio de subsidiariedad por parte de una iniciativa legislativa de la Unión Europea, relativo a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo Europeo de Competitividad (FEC), incluido el programa específico de actividades de investigación e innovación en materia de defensa, por el que se derogan los Reglamentos (UE) 2021/522, (UE) 2021/694, (UE) 2021/697 y (UE) 2021/783 y se modifican los Reglamentos (UE) 2021/696, (UE) 2023/588 y (UE) [EDIP] [COM (2025) 555] {SEC (2025) 555} {SWD (2025) 555} {SWD (2025) 556}, por la ponencia creada al efecto, al amparo de lo previsto en el artículo 53.5 del Reglamento de la Cámara, con fecha 3 de noviembre de 2025, de conformidad con lo establecido en los artículos 53.6 y 112 del Reglamento del Parlamento, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 3 de noviembre de 2025. EL SECRETARIO GENERAL (*P. D. de la presidenta, Resolución de 30 de junio de 2023, BOPC núm. 8, de 3/7/2023*), Salvador Iglesias Machado.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS Y ACCIÓN EXTERIOR DEL PARLAMENTO DE CANARIAS, A INSTANCIAS DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA DE LAS CORTES GENERALES, PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD POR PARTE DE UNA INICIATIVA LEGISLATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA

Título del documento:	Iniciativa legislativa UE: Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo Europeo de Competitividad (FEC), incluido en el programa específico de actividades de investigación e innovación en materia de defensa por el que se derogan los reglamentos (UE) 2021/522, (UE) 2021/694, (UE) 2021/697 y (UE) 2021/783 y se modifican los reglamentos (UE) 2021/696, (UE) 2023/588 Y (UE) [EDIP] [COM (2025) 555] {SEC (2025) 555} {SWD (2025) 555} {SWD (2025) 556}.
Referencia:	COM (2025) 555 final de 16/7/2025 (CSUE-175)

## I. ANTECEDENTES:

1. Con fecha 19 de septiembre de 2025, RE202510000010284, se recibió en la Cámara correo electrónico de la Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales, por el que, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la citada Comisión Mixta remitió al Parlamento de Canarias, Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo Europeo de Competitividad (FEC), incluido el programa específico de actividades de investigación e innovación en materia de defensa por el que se derogan los reglamentos (UE) 2021/522, (UE) 2021/694, (UE) 2021/697 Y (UE) 2021/783 y se modifican los reglamentos (UE) 2021/696, (UE) 2023/588 Y (UE) [EDIP] [COM (2025) 555] {SEC (2025) 555} {SWD (2025) 555} {SWD (2025) 556}. – COM (2025) 555 de 16/7/2025.

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 53.3 del Reglamento del Parlamento de Canarias, la comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior elaborará y aprobará, dentro del plazo de cuatro semanas fijado por el artículo 6.2 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, modificada por la 24/2009, de 22 de diciembre, para su adaptación al Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007 y por la 38/2010, de 20 de diciembre, para reforzar las funciones asignadas a dicha Comisión Mixta, así como el artículo Octavo. 3 de la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, 628/000006 (S) de 27 de mayo de 2010, sobre reforma de la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de septiembre de 1995, sobre desarrollo de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, para su adaptación a las previsiones del Tratado de Lisboa y de la Ley 24/2009, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales núm. 312 de 8 de junio de 2010, un dictamen en el que quedará fijada la posición de la Cámara y de cuya aprobación se dará cuenta al pleno.

3. La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de julio de 2023, adoptó el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

“17. ASUNTOS TRATADOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

17.1. Asuntos remitidos por la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales.

Acuerdo:

*“La Mesa de la Cámara, con el objeto de determinar, dentro de las posibilidades que al efecto, dispone el artículo 53 del Reglamento de la Cámara, el concreto procedimiento parlamentario que haya de seguirse para la emisión del parecer del Parlamento de Canarias respecto del cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad por parte de las iniciativas legislativas comunitarias europeas que sean objeto de remisión al mismo por las Cortes Generales, en los términos de lo previsto en la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, en su versión modificada para su adaptación al Tratado de Lisboa de 13 de abril de 2007, oída la Junta de Portavoces en su reunión del día de la fecha, acuerda:*

*1. Constituir la ponencia a que se refiere el artículo 53.5 del Reglamento de la Cámara, que, con carácter general y en tanto en cuanto no se determine lo contrario, será la competente para conocer y, en su caso, elaborar para su posterior remisión a las Cortes Generales, dictamen motivado en relación con el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad por parte de los proyectos legislativos europeos que sean objeto de consulta por aquellas”.*

4. Con fecha 21 de octubre de 2025, el Gobierno de Canarias presentó informe a la iniciativa legislativa de la UE sobre, Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo Europeo de Competitividad (FEC), incluido el programa específico de actividades de investigación e innovación en materia de defensa por el que se derogan los reglamentos (UE) 2021/522, (UE) 2021/694, (UE) 2021/697 Y (UE) 2021/783 y se modifican los reglamentos (UE) 2021/696, (UE) 2023/588 Y (UE) [EDIP] [COM (2025) 555] {SEC (2025) 555} {SWD (2025) 555} {SWD (2025) 556}– COM (2025) 555 de 16/07/2025.

5. Finalmente, la ponencia, en su reunión de 3 de noviembre del año en curso, ha analizado el texto de la iniciativa legislativa europea remitida por la Comisión Mixta para la Unión Europea, a resultas de lo cual, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 53.5 del Reglamento de la Cámara y del acuerdo de la Mesa antes referido, ha elaborado el siguiente:

## II. DICTAMEN

### 1. Base jurídica y tipo de competencia:

#### a) Objetivos de la propuesta legislativa

La presente propuesta forma parte del amplio paquete para el próximo marco financiero plurianual (MFP) correspondiente al período 2028-2034 presentada por la Comisión el pasado 16 de julio.

Este paquete legislativo va más allá de las modificaciones que se han ido consolidando en los anteriores periodos legislativos y pretende ser mucho más ambicioso para abordar los numerosos retos a los que se enfrenta la Unión en estos momentos. La Comisión Europea presenta un nuevo enfoque disruptivo, basado en la simplificación de rúbricas y programas, más ajustado a prioridades y objetivos de la UE y orientado a resultados. El presupuesto pretende garantizar que las inversiones de la UE estén en consonancia con las prioridades políticas de la Unión. Con carácter general, el presupuesto crece tanto en términos absolutos como en términos relativos al alcanzar la cifra de 1,98 millones de euros, para todo el período, que es equivalente al 1,26% de la Renta Nacional Bruta (RNB) de los Estados miembros.

En cuanto a la parte de los ingresos, la Comisión propone nuevos recursos propios, incluyendo ajustes en los ya propuestos en 2023 así como otros nuevos, de modo que las aportaciones de la renta de los Estados se mantengan estables y se disponga, en cualquier caso, de un presupuesto acorde con las necesidades de la UE, incluida la de reembolso de los préstamos de New Generation EU.

En el lado de los gastos, el próximo presupuesto de la UE presentado por la Comisión Europea estará basado en prioridades superando la división en rúbricas para políticas sectoriales, de modo que puedan establecerse complementariedades entre unos y otros programas para financiar prioridades concretas de la Unión.

La iniciativa legislativa que nos ocupa forma parte del conjunto de programas incluidos en la rúbrica dos del nuevo presupuesto, dedicada a la “*Competitividad, prosperidad y seguridad*” y se aplicará en estrecha colaboración con el Fondo Europeo de Competitividad. La Comisión europea pretende dar un poderoso impulso a la competitividad de Europa y, de este modo, garantizar unas cadenas de suministro seguras, intensificar la innovación y liderar la carrera mundial en pos de una tecnología limpia e inteligente. Se trata de que las inversiones en este ámbito contribuyan a crear una base industrial más sólida, un mercado único más integrado y una Europa unida que aprovecha su fortaleza.

Por consiguiente, el objetivo del reglamento es el de consolidar catorce instrumentos financiación individuales del actual marco financiero plurianual en un marco que funciones como capacidad de inversión para reforzar la competitividad europea en tecnologías y sectores estratégicos esenciales para la competitividad de la UE, ofreciendo apoyo a lo largo de todo el recorrido de un proyecto, desde la fase de concepción hasta la expansión, así como atraer inversiones privadas mediante instrumentos presupuestarios.

El Fondo simplificará y acelerará la financiación de la UE y catalizará la inversión privada y pública. Se regirá por un único código normativo y ofrecerá una pasarela única a los solicitantes de financiación.

El apoyo que brindará se centrará en cuatro ámbitos:

- la transición hacia una energía limpia y la descarbonización industrial;
- la transición digital.
- la salud, la biotecnología, la agricultura y la bioeconomía;
- la defensa y el espacio.

#### **b) Ámbito competencial**

Dado que el Fondo Europeo de Competitividad constituye un marco para los distintos actos de base de los programas y los ámbitos de actuación en cuestión, la propuesta se sustenta en diversas bases jurídicas, cada una de las cuales debe aplicarse a las partes pertinentes del mismo:

- el artículo 43, apartado 2, del TFUE en relación con la consecución de los objetivos de la política agrícola común;
- el artículo 168, apartado 5, del TFUE en relación con las actividades pertinentes destinadas a proteger y mejorar la salud humana mediante el apoyo a la competitividad de los sectores de la salud, la biotecnología, la agricultura y la bioeconomía;
- el artículo 172 del TFUE en relación con las actividades pertinentes de apoyo a la competitividad a través de la transformación digital en ámbitos de interés público;
- el artículo 173, apartado 3, del TFUE en relación con las actividades de apoyo a la competitividad de la base industrial de la Unión Europea, incluido el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, en particular para adaptarse a los nuevos retos económicos en los ámbitos de la investigación, la transición limpia y digital, la salud, la biotecnología, la agricultura, la bioeconomía, el espacio, la seguridad y la defensa;
- el artículo 175 del TFUE en relación con la necesidad de continuar con las medidas y mejorarlas al margen de los Fondos a que se refiere el artículo 175 del TFUE para acciones destinadas a mejorar la competitividad en el mercado interior, también a través de medidas de ampliación, teniendo en cuenta la cohesión económica, social y territorial;
- el artículo 182, apartado 4, el artículo 183 y el artículo 188, párrafo segundo, del TFUE en relación con las actividades pertinentes de apoyo a la investigación y la innovación en el ámbito de la defensa;
- el artículo 189, apartado 2, del TFUE en relación con las actividades pertinentes de apoyo a la política espacial de la Unión;
- el artículo 192, apartado 1, del TFUE en relación con las actividades pertinentes de conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente y las actividades de apoyo a la transición hacia una energía limpia para contribuir a la mitigación del cambio climático;
- el artículo 194, apartado 2, del TFUE en relación con el funcionamiento del mercado de la energía; la seguridad del abastecimiento energético en la Unión; la eficiencia y el ahorro energéticos, así como el desarrollo de energías nuevas y renovables; y la interconexión de las redes energéticas;
- el artículo 212, apartado 2, del TFUE en relación con las actividades de apoyo a los socios estratégicos de la industria de la defensa;
- el artículo 322, apartado 1, letra a), en relación con la adopción de las normas financieras que determinen, en particular, el procedimiento que debe adoptarse para el establecimiento y la ejecución del presupuesto, así como para la presentación y la auditoría de cuentas.

Del mismo modo, en el ámbito nacional y autonómico la multiplicidad de aspectos relacionados con el Fondo Europeo de Competitividad determina que sean múltiples las competencias afectadas tanto a nivel nacional como autonómico.

Así, en el ámbito de la agricultura, de conformidad con el artículo 148.1.7.<sup>a</sup> de la Constitución española, las comunidades autónomas pueden asumir competencias en materia de agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.

Por su parte, el artículo 130 del Estatuto de Autonomía establece que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materia de agricultura y ganadería, respetando lo establecido por el Estado en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 149.1. 13.<sup>a</sup>, 16.<sup>a</sup> y 23.<sup>a</sup> de la Constitución.

Por último, el artículo 175 de esta misma norma, en el apartado sobre gestión de los Fondos Europeos, dispone que corresponde en exclusiva a la Comunidad Autónoma de Canarias la gestión, ejecución y, en su caso, la planificación de los fondos europeos destinados a Canarias, en especial de aquellos aprobados en aplicación de criterios de convergencia o derivados de la condición ultraperiférica de Canarias.

La iniciativa, por tanto, afecta a competencias de desarrollo autonómicas. Sin embargo, tratándose de una Política Común en que las competencias son mayoritariamente de la Unión Europea, la propuesta que se informa, que tiene por objeto facilitar la gestión por parte de los poderes públicos autonómicos de esta política y de estos fondos europeos, no menoscaba las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En cuanto a la salud pública, de conformidad con el artículo 149 de la Constitución española, el Estado tiene competencia exclusiva sobre las bases y coordinación general de la sanidad, la legislación sobre productos farmacéuticos y el fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.

Por lo que respecta a las competencias autonómicas, el artículo 141 del Estatuto de Autonomía establece que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución de la legislación estatal en materia de sanidad interior.

La iniciativa, por tanto, afecta a competencias exclusivas del Estado, así como a competencias de gestión y ejecución de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, la garantía de un alto nivel de salud pública en la Unión Europea en su conjunto solo es posible a través de disposiciones europeas.

Por lo que respecta a la transformación digital en ámbitos de interés público, para que la Administración pública pueda servir con objetividad a los ciudadanos está obligada a transformarse en una administración electrónica regida por el principio de eficacia que proclama el artículo 103 de nuestra Constitución. Asimismo, el artículo 149.1, 182 otorga competencia exclusiva al Estado sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las comunidades autónomas.

A su vez, de conformidad con el artículo 62 del Estatuto de Autonomía de Canarias, corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la organización de su propia Administración Pública, que responderá a los principios de eficacia, economía, máxima proximidad a los ciudadanos y atención al hecho insular.

Se trata, por tanto, en este ámbito, también de competencias estatales sin perjuicio de las de desarrollo que correspondan a la Comunidad Autónoma de Canarias en sus facultades de autoorganización.

En relación con las competencias relacionadas con el sector industrial, se trata de una competencia exclusiva compartida o ejercida en concurrencia con las comunidades autónomas, puesto que a la Comunidad Autónoma de Canarias le corresponde, de acuerdo con el artículo 124, apartado 1, de su Estatuto de Autonomía, *“la competencia exclusiva en materia de industria, ... sin perjuicio de las que corresponden al Estado”*, competencia que incluye, entre otras y en todo caso, las siguientes facultades: *“a) La ordenación de los sectores y de los procesos industriales en Canarias, b) La seguridad de las actividades, de las instalaciones, de los equipos, de los procesos y de los productos industriales y c) La regulación de las actividades industriales que puedan producir impacto en la seguridad o salud de las personas”*.

La atribución de esta competencia con carácter exclusivo a la comunidad autónoma conlleva el ejercicio *“de forma íntegra, [de] la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, sin perjuicio de la concurrencia de otros títulos competenciales del Estado”* (artículo 95, apartado 1, del Estatuto de Autonomía de Canarias).

Por lo que respecta a la cohesión económica, social y territorial, el artículo 149 de la Constitución española concede competencia exclusiva al Estado en lo relativo a las *“Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica”* (apartado 1.132). A su vez, el artículo 114 del Estatuto de autonomía de Canarias, señala que *“corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materia de planificación y promoción de la actividad económica en Canarias, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 149.1. 112 y 132 de la Constitución”*. En particular, dispone el apartado 3 de este artículo que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias *“el desarrollo y la gestión de la planificación general de la actividad económica”*.

Por otro lado, el artículo 175 del Estatuto señala que corresponde en exclusiva a la Comunidad Autónoma de Canarias la gestión, ejecución y, en su caso, la planificación de los fondos europeos destinados a Canarias, en especial de aquellos aprobados en aplicación de criterios de convergencia o derivados de la condición ultraperiférica de Canarias; y el artículo 197 de la misma norma señala, en su apartado 2, que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias *“la gestión de los fondos europeos en materias de su competencia”*.



En cuanto a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, el artículo 149 de la Constitución española concede competencia exclusiva al Estado en lo relativo al fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. Asimismo, el artículo 44 de la Constitución española dispone que los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.

Por otro lado, el artículo 37 del Estatuto señala que los poderes públicos canarios asumen como principios rectores de su política, entre otros, el impulso de la investigación científica y técnica de calidad y de la creatividad artística, la incorporación de procesos innovadores, el acceso a la información y a las nuevas tecnologías. Además, el artículo 135 del Estatuto establece que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materia de investigación que incluye, en todo caso:

- a) La creación, organización, régimen de funcionamiento, seguimiento, control y acreditación de los mismos;
- b) El establecimiento de líneas propias de investigación y el seguimiento, control y evaluación de los proyectos científicos o tecnológicos;
- c) La regulación y gestión de las becas y demás ayudas convocadas y financiadas por la Comunidad Autónoma de Canarias;
- d) La regulación y la formación profesional del personal investigador y de apoyo a la investigación;
- e) La difusión de la ciencia y la transferencia de resultados;
- f) El fomento de la investigación científica, el desarrollo y la investigación tecnológica.

En materia de medio ambiente, el artículo 149.1.23.<sup>a</sup> de la Constitución española atribuye competencia exclusiva al Estado en cuanto a legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección, así como de la gestión en materia de protección del medio ambiente para la que el artículo 148.1. 9.<sup>a</sup> permite a las comunidades autónomas asumir competencias en esta materia.

A su vez, el Estatuto de Autonomía de Canarias otorga a la comunidad autónoma en su artículo 153 la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución de la legislación estatal en materia de medio ambiente, que incluye en todo caso el establecimiento y la regulación de los instrumentos de planificación ambiental y de medidas de sostenibilidad (letras a) y c) respectivamente).

Asimismo, en cuanto a la energía, de conformidad con el artículo 149.1. 25.<sup>a</sup>, el Estado tiene competencias exclusivas sobre las bases del régimen energético y el apartado 132 se le otorga sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

A su vez, el Estatuto de Autonomía de Canarias otorga a la Comunidad Autónoma competencias sobre fomento y gestión de las energías renovables y de la eficiencia energética (artículo 163,1, b), sin perjuicio de las mencionadas competencias estatales.

La iniciativa, por tanto, afecta a competencias estatales y autonómicas.

En particular, la propuesta que se informa, se considera que no menoscaba las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Como señala la exposición de motivos de la propuesta, la respuesta para reforzar la competitividad de la Unión debe coordinarse a nivel de la Unión para resultar verdaderamente efectiva. La puesta en común de recursos a este nivel aumenta las repercusiones y el valor de las inversiones al lograr economías de escala a la hora de fomentar la inversión y reducir el riesgo asociado en ámbitos de actuación críticos para la competitividad europea. Este enfoque es más rentable que si los Estados miembros actuaran de forma independiente.

Por tanto, pareciera que este Fondo Europeo que regula esta iniciativa no está destinado a sustituir las políticas públicas aplicadas por Canarias en materia de competitividad, sino a cofinanciar las acciones que el Estado y la Comunidad Autónoma efectúen al respecto, manteniendo, por tanto, la Comunidad Autónoma de Canarias todas sus competencias en materia de realización y ejecución de dichos planes y programas específicos.

## **2. Análisis de las exigencias derivadas del principio de subsidiariedad**

Tal y como determina el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (versión consolidada), en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva la Unión intervendrá solo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.

Por otra parte, los criterios que han sido definidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para proceder al examen de un acto comunitario desde la óptica del respeto al principio de subsidiariedad son dos: 1) determinar, en primer lugar, si la competencia a la que recurre el legislador comunitario es exclusiva de la Unión y, a continuación, en el caso en que no fuera una competencia exclusiva, 2) determinar si el objetivo de la acción adoptada puede lograrse mejor a nivel comunitario. Al primer criterio ya se ha respondido, de manera que procede referirse al segundo.

El Protocolo n.º 2, publicado en el *Diario Oficial de la Unión Europea*, n.º 115 de 9 de mayo de 2008 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, establece en su artículo 5 lo siguiente:

*“Los proyectos de actos legislativos se motivarán en relación con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Todo proyecto de acto legislativo debería incluir una ficha con pormenores que permitan evaluar el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Esta ficha debería incluir elementos que permitan evaluar el impacto financiero y, cuando se trate de una Directiva, sus efectos en la normativa que han de desarrollar los Estados miembros, incluida, cuando proceda, la legislación regional. Las razones que justifiquen la conclusión de que un objetivo de la Unión puede alcanzarse mejor en el plano de esta se sustentarán en indicadores cualitativos y, cuando sea posible, cuantitativos. Los proyectos de actos legislativos tendrán debidamente en cuenta la necesidad de que cualquier carga, tanto financiera como administrativa, que recaiga sobre la Unión, los Gobiernos nacionales, las autoridades regionales o locales, los agentes económicos o los ciudadanos sea lo más reducida posible y proporcional al objetivo que se desea alcanzar”.*

El principio de subsidiariedad establece que solo podrán tomarse medidas a nivel de la UE cuando sean más eficaces que la actuación individual de los Estados miembros a nivel nacional, regional o local. El mecanismo de control de la subsidiariedad, que se aplica en los ámbitos de competencia compartida entre la UE y los Estados miembros, permite a los parlamentos nacionales manifestar su posición cuando consideren que una iniciativa legislativa de la UE no respeta este principio, posición que ha de ser tenida en cuenta por la Comisión Europea.

En lo que a la presente iniciativa se refiere, La puesta en común de recursos a este nivel aumenta las repercusiones y el valor de las inversiones al lograr economías de escala a la hora de fomentar la inversión y reducir el riesgo asociado en ámbitos de actuación críticos para la competitividad europea. Este enfoque es más rentable que si los Estados miembros actuaran de forma independiente.

La insuficiencia persistente de la inversión por parte del sector privado en ámbitos críticos como las infraestructuras, las transiciones ecológica y digital y la capacidad industrial se ve agravada por la fragmentación de los mercados de capitales, que impide que la inversión transfronteriza sea eficiente. A pesar de que el ahorro privado es elevado, no se convierte adecuadamente en las inversiones a largo plazo que serían necesarias para lograr la autonomía estratégica.

El gasto público en I+D dentro de la Unión sigue estando fragmentado y no se ajusta a las prioridades a escala de la Unión, y la mayor parte de la financiación procede de los presupuestos individuales de los Estados miembros. Dado que, por sí solos, los Estados miembros no pueden lograr unos proyectos de esta escala y este tipo, el único modo de conseguirlo es actuando a nivel de la Unión, mediante la creación de una masa crítica para proyectos y asociaciones efectivos.

Además, la coordinación a nivel de la Unión promueve la colaboración, que resulta esencial para fomentar los efectos indirectos del conocimiento y la reducción del riesgo de la inversión, lo que contribuye a mejorar la competitividad. Un enfoque a escala de la Unión ofrece economías de escala y cooperación entre las partes interesadas, que resultan fundamentales para impulsar la valorización del conocimiento y mejorar las capacidades.

Por ello, parece conveniente adoptar una regulación unitaria que garantice la cooperación transfronteriza en los ámbitos estratégicos cubiertos por este Fondo.

En lo que al principio de proporcionalidad se refiere, la iniciativa comprende modificaciones limitadas y específicas para conseguir los objetivos de la Unión.

Consecuentemente, se aprecia que la iniciativa cumple con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

### **3. Carga financiera y administrativa**

No se acompaña en la documentación remitida por las Cortes Generales un análisis de las eventuales cargas, si es que las hay, para las autoridades nacionales, regionales o locales, agentes económicos o ciudadanos, derivadas de la nueva regulación, con lo cual no es posible pronunciarse al respecto.

### **4. Consideración de los aspectos locales y regionales en la consulta y análisis del impacto**

El Parlamento de Canarias no ha sido objeto de consulta previa a la elaboración de la propuesta que hoy se somete a su valoración en el marco del mecanismo de control del principio de subsidiariedad. Tampoco nos consta que lo haya sido el Gobierno de Canarias.

### **5. Otras observaciones**

La iniciativa legislativa incide en medidas específicas adoptadas en el marco del artículo 349 del TFUE que afectan a Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea. En concreto, se trata de un Fondo de nueva creación que, a su vez, integra disposiciones relativas al programa marco Horizonte Europa que ya en la actualidad, contiene disposiciones específicas para las regiones ultraperiféricas, como Canarias.

Así, el fondo contiene menciones expresas a las regiones ultraperiféricas, en dos considerandos y en dos artículos.

El Considerando (9) reconoce los activos únicos de estas regiones, las condiciones excepcionales para la investigación espacial y astrofísica, el enorme potencial de energías renovables, la riqueza de la biodiversidad y las extensas zonas marítimas. Añadiendo que dicho Fondo debe aprovechar el potencial que representan como puestos avanzada geoestratégicos, especialmente de cara a apoyar los objetivos de la Unión en materia de seguridad, preparación, cadenas de valor regionales y competitividad.

El Considerando (80) se refiere al apoyo a las empresas, estableciendo que dicho apoyo a las empresas a nivel local, regional y nacional es diverso y también debería conectar a las regiones menos desarrolladas y a las regiones ultraperiféricas. Se refiere a algunas iniciativas de la Comisión ya existentes como la Red Europea para las Empresas, la Plataforma Europea de Colaboración de Clústeres y los centros europeos de innovación digital, manifestando que han contribuido a colmar la brecha existente. Establece que se creará una Red de la UE para las Empresas, basada en las iniciativas citadas anteriormente, para simplificar y racionalizar los servicios de asesoramiento y Asociación.

El artículo 27.1 menciona a las regiones ultraperiféricas entre los beneficiarios de la Red de la UE para las Empresas, cuyo objetivo será de ayudar a las empresas de la Unión a ser más competitivas, innovar y crecer, centrándose especialmente en las pymes, las empresas emergentes, las emergentes en expansión y las pequeñas empresas de mediana capitalización.

El artículo 28 apartado f) establece que el Fondo llevará a cabo actividades transversales en especial a través una serie de medidas entre las que se encuentra la facilitación del acceso a los mercados, en particular mediante el apoyo a la internacionalización de las pymes y el suministro de información sobre el mercado, también en las regiones menos desarrolladas y las regiones ultraperiféricas.

## 6. Conclusión

Por todo ello, se informa favorablemente la propuesta dado que cumple con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, al tiempo que recoge una regulación específica para las regiones ultraperiféricas, entre las que se encuentra Canarias, tal y como estipula el artículo 349 TFUE.

Parlamento de Canarias, a 3 de noviembre de 2025. Alicia Vanoostende Simili. Socorro Beato Castellano. Luz Reverón González. Luis Alberto Campos Jiménez. Melodie Mendoza Rodríguez.



Parlamento de Canarias

